

EL MAXI KIOSCO



LEANDRO SANTORO

EL MAXIKIOSCO

LEANDRO SANTORO

ÍNDICE

Introducción	11
Capítulo 1 · Bienes y servicios públicos	
Los bienes públicos en manos privadas	30
Recolección de basura	32
Mantenimiento de veredas	36
Alumbrado público	40
Control de plagas	41
Alcantarillado	43
Subte	44
Tránsito	52
Acarreo	54
Espacio verdes	57
Poda de árboles	59
Educación	61
El negocio del hambre en las escuelas	61
Centros de primera infancia	65
Servicio de transporte escolar	69
El maquillaje de una Ciudad bilingüe	71
Mantenimiento de las escuelas	72
Salud	74
Matenimiento de hospitales	74
Servicio alimentario en hospitales	75
La lavandería privada	77
Equipos y aparatos alquilados	77
Seguridad	79

Capítulo 2 · Negocio Inmobiliario	
La Ciudad en venta	87
La planificación... de los negocios	92
Normativa a la carta	92
La tierra pública de remate	93
¿Código urbanístico o de negocios?	96
La inversión pública para mejorar la rentabilidad privada	98
Un caso paradigmático del modelo macrista: Costa Salguero	99
Capítulo 3 · Concesiones, obras y contrataciones	
La obra pública en la Ciudad	101
La obra pública de Jorge Macri	103
Los pesos pesados de la obra pública porteña	110
La ciudad donde es más fácil conseguir una concesión que un alquiler	114
Mercado de los Carruajes	114
Paseo Gigena: un negocio de Toto Caputo que puede dejar sin agua a la Ciudad	118
¿A quién contrata Buenos Aires?	121
Capítulo 4 · Conclusiones y propuestas	
Los principales clientes del maxikiosco	125
Los Caputo, una historia de poder y negocios en la Ciudad	126
SES S.A. - Mantelectric	129
Contratos para obras de construcción y mantenimiento edilicio	130
Desarrollos inmobiliarios de lujo	131
Compra de terrenos en el ex Tiro Federal	132
Otros negocios	133
Grupo Roggio	134
Mantelectric, “los reyes del espacio público”	135
Los ganadores del negociado inmobiliario	136
Empresas más frecuentes	140
Devolverle el poder a la gente	141

INTRODUCCIÓN

Vivimos en una de las ciudades más lindas del mundo y, sin embargo, todos los días tenemos que protestar por algo. El tráfico, los ruidos, el subte que no funciona, las calles llenas de basura y los edificios creciendo como hongos en los barrios para robarnos la luz y el sol. Alguna vez estuvimos orgullosos de nuestra salud y educación pública, **hoy sufrimos el abandono** de las escuelas y los hospitales. Los parques y las calles arboladas que fascinaban a los turistas son tierra de nadie y los barrios en que jugábamos en la vereda se convirtieron en territorio del individualismo, el miedo y el sálvese quien pueda.

Esta ciudad carísima, insegura y mugrienta ya no nos pertenece. Tiene otros dueños.

Te extrañamos, Buenos Aires.

Durante casi veinte años, **un grupo de políticos y sus empresas** familiares, amigas o socias fueron quedándose con nuestra ciudad. Vos no las ves, pero allí están. **Convirtieron a Buenos Aires en un maxikiosco**, tal cual la definió el importante escritor argentino Jorge Asís. Son los dueños de la obra pública, la recolección de basura, los subtes y la limpieza de los hospitales. Son los que construyen torres enfrente de tu casa, te acarrearán el auto y te cobran la fotomulta, rompen las veredas que están bien y dejan sin arreglar las que están rotas, llenan de cemento la plaza del barrio y quieren construir mansiones frente a la costa de nuestro río.

Este maxikiosco reparte contrataciones, obras y concesiones como si fueran caramelos y cigarrillos. En un sentido muy similar, una nota del diario Clarín citó alguna vez a una fuente en off, perteneciente al PRO, que decía que el partido oficialista no iba a entregar a la Ciudad porque era su **“caja de recaudación”**. La mismísima Patricia Bullrich, quien

fuera alguna vez presidenta del PRO, acusó a Jorge Macri de usar a la Ciudad como “**un botín**”. Este libro es el **fin de la metáfora**. Vamos a documentar y poner en palabras, datos y hechos lo que muchos insinúan. Vamos a patear el maxikiosco y terminar con esto para poder transformar la Ciudad.

Pagamos fortunas en impuestos, tarifas y servicios y recibimos muy poco a cambio. Porque todo va para la ganancia de esas empresas. Unas pocas familias se hicieron cada vez más ricas a costa del deterioro de nuestra ciudad. Porque no les importa cómo vivimos: solo quieren llevarse todo lo que puedan mientras les duren los negocios que comparten con sus amigos en el Gobierno de la Ciudad desde el 2007 en adelante.

Desde entonces, no hay un proyecto de ciudad. No hay un sueño, una idea. ¿Cómo queremos que sea Buenos Aires? ¿Cómo queremos vivir en nuestra amada ciudad? En lugar de eso, hay un Maxikiosco, góndolas donde se ofrecen al mejor postor obras, contratos, licitaciones. Todo está en venta, y todo se lo quedan unos pocos. Después, obviamente, nada funciona, y no tenés a quién reclamarle. Porque el gobierno solo hace negocios, y las empresas no tienen ningún tipo de control. Vos, yo, el vecino, el ciudadano, no importamos. Nadie nos mira, nadie nos ve. **Pasamos a ser una molestia en un paisaje en el que lo único que importa es pasarse de mano en mano, de gestión en gestión, de socio en socio, la fórmula mágica para llenarse de dinero a nuestra costa.**

Hacen negocio con tu calidad de vida cuando cambian el código de planeamiento para construir torres enfrente de tu ventana; hacen negocios con nuestros niños y nuestros viejos cuando mandan comida en mal estado a las escuelas y las residencias para mayores; hacen negocios con tu vida cuando compran armas no letales a familiares de funcionarios en lugar de mejorar las comisarías y los sueldos de la policía en las zonas que lo necesitan.

Queremos movernos por la ciudad en auto, en bici, caminando o en subte. Pero no podemos. Porque los estacionamientos son parte del maxikiosco y nos cobran fortunas, y en el barrio no hay donde dejar el

auto porque nadie pensó dónde iban a estacionar los miles de nuevos inquilinos de los cientos de nuevos edificios. Y no construyeron ni un metro de subte en casi veinte años, ¡ni un metro! Lo poco nuevo que hay lo construyeron los gobiernos nacionales y ahora te anuncian grandes planes cuando están por llegar las elecciones. Y en el subte viajas entre la mugre, y sin aire, y nunca cumplen los horarios y no tienen frecuencia. ¿Adiviná por qué? Sí, claro porque las empresas que los manejan son parte de las familias que gobiernan y no les importa nada el servicio porque solo quieren hacer dinero. Y saben bien que no van a controlarlos porque son todos amigos, y todos cobran un poco, digamos todo.

Los productos que tiene en oferta este maxikiosco son muchos y variados. No pueden ser abarcados en un libro todos y cada uno de ellos. Decidimos hacer esta selección para ilustrar algunos de **los más relevantes para la vida cotidiana de los ciudadanos, y más onerosos para sus bolsillos**. Cada uno de esos productos es una responsabilidad del Estado que fue entregada a una empresa privada para que la lleve adelante. Tareas de lo más diversas.

El maxikiosco tiene **una góndola en la que ofrece la tercerización de todos los bienes y servicios de la Ciudad de Buenos Aires**. Si pensabas que estas eran tareas brindadas directamente por el Estado, debemos decepcionarte porque fueron despachadas por el maxikiosco a sus clientes predilectos. Entre los distintos productos de esta góndola, estos son solamente los que documentamos en este libro:

- Recolección de residuos, barrido y limpieza del espacio público
- Mantenimiento de veredas
- Alumbrado público
- Control de plagas
- Mantenimiento del alcantarillado
- Operatoria del subte de Buenos Aires
- Estacionamiento medido
- Multas fotográficas
- Verificación Técnica
- Mantenimiento de espacios verdes
- Poda de árboles

- Mantenimiento de colegios
- Alimentación escolar
- Transporte escolar
- Educación de idioma extranjero (inglés)
- Centros de Primera Infancia
- Mantenimiento de hospitales
- Alimentación en hospitales
- Servicio de lavandería en hospitales
- Alquiler de aparatología médica en hospitales
- Seguridad privada en edificios públicos

Otra de las góndolas ofrece concesiones, contrataciones y obra pública, y algunos de los productos que podemos encontrar son los siguientes:

- Concesión de las playas de estacionamiento
- Concesión del sistema de acarreo de autos (grúas)
- Concesión del Paseo Gigena
- Concesión del Mercado de Carruajes
- Concesión de locales comerciales en Costanera y distintos lugares de la Ciudad.
- Compras de cárceles modulares
- Compra de pistolas taser
- Compra de luminaria pública
- Obras en espacios verdes
- Obras de infraestructura pluvial
- Obras en edificios públicos
- Obras de infraestructura vial

Finalmente, una de las **góndolas más importantes de este maxikiosco es el negocio inmobiliario,** que si bien puede tener menos productos que las otras, que esto no engañe al lector. Se trata de negocios multimillonarios instrumentados por unos pocos:

- Código urbanístico para fomentar la construcción especulativa
- Excepciones a la normativa que permiten aumentar la capacidad de construcción en una determinada parcela a cambio del pago de una suma de dinero
- Remate y privatización de tierras públicas
- Inversión pública para revalorizar las zonas donde interesa desarrollar negocios inmobiliarios

Los gerentes del Pro no llegaron para mejorar la administración pública, sino para reemplazarla por sus negocios privados. A partir del desempeño de muchos de sus referentes en el “sector privado”, el macrismo construyó una imagen de sí mismo como gestor eficiente. Instaló que venía a aportar su “exitosa” experiencia laboral para el “bien común”. Pero esa imagen de los gerentes de SOCMA administrando eficientemente el Estado es falsa. Lo que hicieron **fue privatizar y tercerizar las funciones del Estado** en manos de un puñado de empresas que obtienen ganancias hagan bien o no sus tareas y transformar a los Ministros, no en gestores eficientes, sino en **meros gerentes de compra** de un Estado **con muchos recursos** (cada vez más) **y escasas funciones** desarrolladas por gestión propia. Utilizan el dinero de los contribuyentes porteños **simplemente para realizar pliegos de licitación**, que siempre otorgan a las mismas empresas **sin importar si hacen bien su trabajo.**

Aunque muchas veces puedan estar vestidos con indumentaria que aparenta ser de trabajadores del Estado, los responsables de gestionar los servicios públicos no son cuadrillas de empleados municipales sino empresas privadas a las que se les ha tercerizado el servicio. Hace años, **la Ciudad esconde un gran secreto.** Este libro lo sacará a la luz para devolverle el poder a la gente y mejorar la capacidad de control y regulación de lo público por parte de las instituciones democráticas. Porque no se trata tanto de si el Estado es grande o chico; no es un problema de tamaño, sino de funcionamiento, de eficiencia y de eficacia.

Buenos Aires es la ciudad más importante del Cono Sur y hoy tiene servicios públicos de pésima calidad que, además, son carísimos. Los contribuyentes pagamos miles de millones de dólares anuales a empresas que no cumplen eficientemente su tarea. Esto sucede porque el Estado se convirtió en un maxikiosco. Hay productos de todos los colores y para todos los gustos. Por eso las internas del PRO son tan virulentas por el control del distrito. **Para el PRO, gobernar la Ciudad es arreglar con las 50 principales empresas contratistas del Estado.** Alrededor del 25% del presupuesto de la Ciudad se destina a empresas privadas. Ese es el gran secreto oculto del macrismo. **Estas son las 50 sombras de la Ciudad:**

Empresa	Negocios en el Maxikiosco
Familia Caputo	Mantenimiento de escuelas, concesión de Paseo de los Carruajes, obra pública, mantenimiento de hospitales, mantenimiento de edificios públicos, estacionamiento medido, negocio inmobiliario
Grupo Roggio	Basura, subte, obra pública, mantenimiento de escuelas, mantenimiento de hospitales.
IRSA S.A. (Elsztain)	Negocio inmobiliario
Mantelectric	Mantenimiento de escuelas, de hospitales, alumbrado, mantenimiento del espacio público, poda de árboles, alcantarillado
Consultatio (Constantini)	Negocio inmobiliario
Grupo Werthein	Negocio inmobiliario
Techint	Obra pública
lecsa	Obra pública
Indaltec	Mantenimiento de escuelas, mantenimiento del espacio público, poda de árboles, obra pública
Algieri S.A.	Veredas, mantenimiento del espacio público, poda de árboles, obra pública
Ilubaires	Veredas, alumbrado, obra pública
Salvatori S.A.	Veredas, mantenimiento del espacio público, poda de árboles
Verde Integral S.A.	Mantenimiento del espacio público, poda de árboles, obra pública

Empresa	Negocios en el Maxikiosco
Ecología Urbana S.R.L	Mantenimiento del espacio público, poda de árboles, obra pública
Nittida	Basura, alcantarillado
Urbaser Argentina	Basura, veredas
Cámara Argentina de Servicios de Comedores y Refrigerio	Viandas escolares, viandas en hospitales
MIG S.A.	Mantenimiento de escuelas, mantenimiento de hospitales
Mejores Hospitales S.A.	Mantenimiento de escuelas, mantenimiento de hospitales
MH Construcciones y Servicios S.A.	Mantenimiento de escuelas, mantenimiento de hospitales
Lesko S.A.C.I.F.I.A.	Mantenimiento de hospitales, alumbrado
Naku Construcciones S.R.L	Veredas, obra pública
Miavasa S.A.	Veredas, obra pública
Alemarsa Sociedad Anonima Comercial	Veredas, alcantarillado
Dejesus Constructora S.R.L.	Veredas, obra pública
Hytsa S.A.	Inspección de vías peatonales, servicios de consultoría
MIICA S.A.	Mantenimiento del espacio público, poda de árboles
AESA	Basura
Solbayres	Basura

Empresa	Negocios en el Maxikiosco
Ashira	Basura
Seyma	Mantenimiento de hospitales
Avinco	Veredas
Construmex S.A.	Veredas
Seob S.A.	Veredas
Marcalba S.A.	Veredas
Grupo Varsovia S.R.L	Veredas
Autotrol S.A.C.I.F.I.A.	Alumbrado
Construman S.A.	Alumbrado
Cecaitra	Fotomultas
Nec Argentina S.A.	Fotomultas
Vivero Cuculo S.R.L	Mantenimiento del espacio público
Soluciones Químicas	Alcantarillado
Os.Lo	Alcantarillado
Reconstrucción Caños S.A.	Alcantarillado
Automat. S.A.	Alcantarillado
Desobstructora Argentina	Alcantarillado
Mantenimientos ambientales	Alcantarillado
Sach	Alcantarillado
Green S.A.	Obra pública
Criba S.A.	Obra pública

Empresa	Negocios en el Maxikiosco
Constructora Sudamericana S.A.	Obra pública
Conorvial	Obra pública
Bricons S.A.I.C.I.F.I.	Obra pública

En las diferentes contrataciones del Gobierno de la Ciudad se repite una serie de características que dan cuenta de un **verdadero “método” de funcionamiento**. Oferta cartelizada y ausencia de competencia, empresas polirrubro que se dedican a tareas de lo más variado, uniones transitorias de empresas que sirven como llave de ingreso a los negocios, ausencia de un verdadero y eficaz control sobre las empresas, redeterminaciones de precios sobre los contratos originales, prórrogas injustificadas de estos, que se hacen sin licitación, extendiendo en el tiempo los contratos, incrementando la renta del capital sin contrapartida, poca transparencia en los costos de las empresas, y vínculos con el partido de gobierno y sus funcionarios o familiares.

Cartelización de la oferta: Las empresas están absolutamente cartelizadas. Son un puñado de empresas que obtienen contratos en los más diversos rubros. Muchas veces, es notorio cómo antes de ofertar coordinan para repartirse entre ellas las zonas de la ciudad: cada empresa presenta el precio "correcto" en la zona en la que pretende operar, con la tranquilidad de que las otras presentarán un precio más elevado. Así, todas y cada una de las empresas cartelizadas se aseguran la obtención de la zona pactada al precio que quieren. No hay licitación real y transparente, sólo reparto del negocio.

Falta de competencia: A la hora de adjudicar una licitación, no se toma en consideración si la empresa en el pasado cumplió, si fue eficiente o cómo la ciudadanía evalúa su prestación. No se construyen indicadores que permitan comparar las prácticas de las empresas para elegir a las mejores por sobre las peores. No se estimula el ingreso de PyMEs ni se capacitan nuevas empresas para no depender siempre del mismo puñado de contratistas.

Empresas polirrubro: Si se recurre a la tercerización en empresas privadas es porque se supone que el Estado carece de los recursos técnicos, humanos y logísticos para afrontar la multiplicidad de tareas que demanda una ciudad como Buenos Aires. Se delega alguna de estas tareas en una empresa privada en cuya expertise y eficiencia se confía por cuestiones de escala (trabaja en todo el país, con el Estado y el privado), de capacidad técnica y de especialización en la tarea. Sin embargo, vemos que la misma empresa muchas veces presta el servicio de recolección de basura, subte, obra pública, mantenimiento de espacios verdes, alumbrado, alcantarillado, etc. Semejante diversificación de tareas pareciera hablar más del reparto del maxikiosco que de eficiencia privada basada en la experiencia. A juzgar por el deplorable estado de los bienes y servicios de la ciudad que se les han delegado, podría decirse que son empresas especializadas... ¡en ganar licitaciones!

Las uniones transitorias de empresa (UTE) como llave de ingreso al negocio: Las UTE son un instrumento que resulta muy útil para que dos o más empresas se unan en función de un proyecto específico y, a partir de esta unión, puedan cumplir con los requisitos de capital y logísticos necesarios para desarrollar la tarea. Esto podría permitir que haya más empresas y PyMEs que ingresen al negocio como contratistas del Estado. Sin embargo, no es así como son utilizadas por el PRO. Las UTE se convirtieron en un instrumento para que empresas que no tienen experiencia, muchas veces asociadas al partido gobernante, ingresen al negocio a partir de unirse con otras que sí la tienen. Además, muchas veces hay empresas, casualmente con estrechos vínculos con el PRO, que realizan sistemáticamente esta operación en rubros de lo más variados, haciendo partícipe al partido gobernante de muchos de los negocios del maxikiosco.

Ausencia de un verdadero control sobre las empresas:

Existen organismos públicos encargados de auditar y controlar las prestaciones de las empresas privadas, pero los efectos de su trabajo son prácticamente nulos. La Auditoría General de la Ciudad publica recurrentes informes que dan cuenta de los incumplimientos y las irregularidades en las que incurren estas empresas. Sin embargo, esto no impide que vuelvan a ser elegidas y que la situación no cambie de un contrato a otro. Algo similar ocurre con el Ente Regulador de los

Servicios Públicos, encargado de aprobar las multas por incumplimiento de las empresas. No hay registro oficial de que las multas publicadas en el Boletín Oficial sean abonadas y, además, los incumplimientos siguen ocurriendo con regularidad. El Directorio de este Ente se compone sistemáticamente de mayoría de miembros del oficialismo.

Redeterminaciones de precios: En una economía con alta inflación como la nuestra queda claro que muchas veces algunos contratos firmados a largo plazo deben ser actualizados. Sin embargo, esta práctica, conocida como “redeterminaciones de precios”, muchas veces se realiza de forma poco transparente. Existen casos en que se actualizó por encima de la inflación, o en que empresas que realizan el mismo servicio a un similar monto inicial tienen redeterminaciones muy dispares, con algunas que aumentan mucho más que otras. Pero además, existen dos tipos de redeterminaciones, las provisorias y las definitivas. Las provisorias no se publican en ningún caso, y sólo aparecen en los expedientes de las redeterminaciones definitivas, haciendo imposible un control transparente de cómo y por qué se decidió aumentar previamente.

Prórrogas injustificadas: Cuando se termina un contrato, lo correcto sería que vuelva a llamarse a una nueva licitación. Sin embargo, muchas veces el Ejecutivo lo prorroga sin licitación ni control por parte de los otros poderes del Estado. Hay casos de prórrogas injustificadas que duran muchos años, incluso hasta dos décadas. En ocasiones se han otorgado prórrogas incluso antes de que termine el contrato. Así se dificulta aún más la competencia y se garantiza el negocio de las empresas de manera indefinida e injustificada.

Poca transparencia en los costos: Los costos reales de estas empresas muchas veces son un verdadero misterio, cuando no un escándalo. Además de lo ya mencionado acerca de cómo dibujan sus propuestas en las licitaciones para repartirse las zonas, en ocasiones las empresas inflan los costos para aumentar su rentabilidad. Por ejemplo, incluyendo gastos que no tienen ninguna relación con la prestación, o facturándose a sí mismos a partir de otras empresas del mismo grupo. Incluso muchas veces el Estado termina haciéndose cargo de costos que deberían ser solventados por las empresas. Si

realmente queremos discutir el gasto público hay que discutir la rentabilidad de estas empresas y la eficiencia y transparencia de los costos que asumen.

Vínculos con el partido de gobierno: Finalmente, muchas de las empresas contratistas del Estado tienen vínculos con el Gobierno. A veces, a partir de una empresa cuyos propietarios fueron aportantes de campaña, y otras veces de manera mucho más estrecha, ya que directamente se encuentran ligadas a algún funcionario o dirigente, o a algún familiar de algún funcionario o dirigente.

Este es el sistema que ha imperado los últimos 18 años. Desarmar el maxikiosco es imprescindible para mejorar la calidad de los servicios y abaratar su costo para el bolsillo del contribuyente. Si queremos discutir honestamente el gasto público, debemos centrarnos en el maxikiosco. **Hay que discutir la rentabilidad de las empresas, la transparencia de los procesos y el control de calidad de las prestaciones brindadas.** El sistema vigente hace que los servicios funcionen cada vez peor. Y continuarán empeorando, porque este complejo entramado de intereses, sin alternancia política, sólo puede enquistarse cada vez más, corroyendo inexorablemente los bienes y servicios públicos.

La **basura** en la Ciudad es un problema grave. Desde que asumió Jorge Macri el estado de la higiene urbana es paupérrimo. Contenedores desbordados, bolsas que se acumulan en las esquinas y un olor nauseabundo que se siente al transitar por nuestras calles. Un servicio muy malo, que sin embargo representa en promedio el 7% del presupuesto total de la Ciudad, **el más caro de todos los contratos del maxikiosco.** Pero el negocio no termina allí, ya que las empresas contratistas encargadas de prestar este servicio se encuentran entre las principales contratistas de la Ciudad en otros rubros, y muchas de ellas **figuran como arrepentidas en causas vinculadas al pago de coimas.** El contrato actual fue prorrogado de manera injustificada antes de vencer, y en ese momento se decidió que el Estado se haga cargo de costos que en realidad deberían afrontar las empresas, tal como venían haciéndolo: la adquisición de contenedores, el pago de parte de los salarios de los trabajadores, entre otros.

El **subte** es otro caso de un servicio deficiente a la luz de todos los porteños. Se prometió mejorar la frecuencia, pero en realidad empeoró. Se prometieron 10 kilómetros de subte por año, y por primera vez llevamos años sin ampliar la red. Más de la mitad de las estaciones no son accesibles para personas con movilidad reducida. Y todo esto, **siempre y cuando el subte efectivamente funcione**, porque existen demoras recurrentes, escaleras mecánicas y ascensores que no funcionan, interrupciones del servicio, goteras, coches que se quedan entre estaciones obligando a la gente a caminar por las vías, puertas que se abren solas con los trenes en movimiento, etc. Además, las formaciones tienen asbesto, un material que produce cáncer, y recientemente se encontraron incluso casos de sarna. La mugre y el mantenimiento en general son deplorables. Todas estas deficiencias no impiden que las tarifas sean carísimas y hayan aumentado considerablemente por encima de la inflación desde que asumió Jorge Macri.

Este pésimo servicio es prestado hace más de 30 años por el Grupo Roggio, que ganó la última licitación sin competencia, lo que permitió definir de forma unilateral los costos del servicio. La Justicia halló gastos muy difíciles de justificar presentados por la empresa: alquiler de autos en provincias que nada tienen que ver con la Ciudad, o servicios que se factura a sí misma a través de otras empresas del Grupo. En las audiencias públicas para la adecuación de las tarifas, organismos de control informaron que la tarifa que aprobó el gobierno se encuentra muy por encima de los costos reales. El Grupo Roggio está presente también en el negocio de la basura, en diferentes contratos de servicios públicos y es uno de los principales contratistas de obra pública. Además, también figura como arrepentida en las causas por pago de coimas.

La **educación** no es una excepción para los negocios. La **comida** que comen nuestros chicos en las escuelas ha sido noticia en más de una ocasión, y no precisamente por su calidad nutricional. **Chicos intoxicados**, comidas en mal estado, porciones que no cumplen con lo que las empresas se comprometen en los propios pliegos de licitación y mucho menos con los requerimientos nutricionales de los alumnos. Y todo pasa: pese al pésimo servicio, muchas de estas empresas volvieron a ganar la licitación, como el caso de **Lammerich**,

que intoxicó a más de 100 chicos y sin embargo pudo volver a renovar su contrato. Se ha **tercerizado incluso la enseñanza del inglés**, con la contratación de una empresa para realizar una aplicación que **está vinculada al Jefe de Gabinete de Jorge Macri, Sánchez Zinny**. El **mantenimiento escolar** también está en manos de empresas que son las responsables del pésimo estado edilicio de escuelas sin ventilación correcta, pisos rotos, techos que se caen, mampostería sin mantenimiento, etc.

Algunas de estas empresas que realizan el mantenimiento de las escuelas son también las encargadas, entre otros servicios, del **arreglo de veredas**. Un negocio multimillonario para empresas que rompen 20 veces la misma vereda pero sin embargo no evitan que haya baches y pozos en todos los barrios. Lo más insólito es que el trabajo de fiscalización de estas empresas, que debería constatar el estado de las aceras y calzadas, lo realiza... **¡otra empresa privada!** Uno se pregunta, ¿para qué está el Estado entonces?

En el caso de **salud**, los hospitales están llenos de kioscos. Las mismas empresas que dan comida deficiente en las escuelas prestan el servicio en los hospitales. Las mismas que mantienen edificios públicos y escuelas, también lo hacen con los hospitales. De los residuos patogénicos se encargan otras empresas. Hasta de lavar las sábanas. Más grave aún, ni siquiera muchos equipos de los hospitales son del Estado, ¡los alquilan a empresas privadas!

En **seguridad**, vemos cotidianamente cómo se escapan presos debido a que el Gobierno nunca construyó la cárcel, para la que tenía los fondos. Como parche, decidió sumar cárceles modulares en el medio de la Ciudad. Por supuesto, se contrató a empresas que tenían antecedentes como contratistas del Estado. Pero a eso debe sumarse las cámaras de seguridad, la seguridad privada en edificios públicos, la compra de armas no letales.

En materia de **tránsito** los negocios son varios. El **estacionamiento medido** (los viejos parquímetros) fue entregado a **una empresa vinculada a Nicky Caputo**, el amigo de la vida de Mauricio Macri y con varios negocios que se van a contar en este libro. Además, la misma empresa tiene concesionadas playas de

estacionamiento con cánones irrisorios. Las cámaras encargadas de realizar las **fotomultas** también están a cargo de **empresas denunciadas** por irregularidades en muchos distritos del país. Pero sin dudas, el mayor escándalo es el vinculado al acarreo, **las grúas** que se llevan a los autos en infracción. Durante 20 años fue prorrogada una concesión vencida en 2001, con cánones que pagaban por cifras ínfimas en relación a lo que recaudaban. Empresas que, otra vez, también tenían concesionadas playas de estacionamiento.

Todo el Estado está cooptado por empresas que prestan un mal servicio de manera muy onerosa. El **alumbrado público**, cuya renovación de lámparas estuvo a cargo de las familias Blanco Villegas (familia materna de Mauricio Macri) y Peña Braun (por un familiar del entonces Jefe de Gabinete de Macri), la **poda de árboles**, en la que cortar es un negocio que los debilita y hace más vulnerables a los temporales o el **mantenimiento del espacio público**, donde están las mismas empresas que en otros rubros, todos muy heterogéneos.

La **obra pública porteña** es otro de los principales productos del maxikiosco. Apenas 10 empresas se han quedado con la mitad de las adjudicaciones, por montos de cientos de millones de dólares, en los últimos 18 años. Algunas de ellas también son favorecidas con la tercerización de los servicios públicos o concesiones.

El **negocio inmobiliario** es uno de los caramelos insignia del maxikiosco. El Estado favorece a las grandes empresas concentradas del sector con múltiples instrumentos. Los **códigos urbanísticos** se utilizaron para permitir mayores rentabilidades, construyendo sin control en barrios cotizados. Las **excepciones al código**, votadas en la Legislatura, conformaron una herramienta para ganar más metros construibles a cambio de algunos dólares. Sí, normativa vendida a la carta. Pero además, el Estado también puso a disposición sus propias tierras, no para construir parques, polideportivos o vivienda para la clase media, sino **privatizando terrenos públicos para negocios inmobiliarios por miles de millones de dólares**. Finalmente, la política de **distritos económicos**, lejos de ser una política productiva, sirvió para aumentar el valor del suelo en algunas áreas, favorecidas también con la inversión pública para mejorar la zona.

Entre la variada mercadería de este maxikiosco encontramos a las **concesiones**. Allí el Estado entrega bienes y servicios públicos por cánones que están muy por debajo de los precios del mercado, garantizando rentabilidades elevadas a empresas que muchas veces tienen vínculo con el partido gobernante, a partir de aportes a las campañas o estando directamente relacionada con dirigentes oficialistas o sus familiares.

¿Por qué nadie puede comentar en ningún lado acerca de cómo se presta el servicio de recolección? ¿Por qué no puedo evaluar cómo resultó mi viaje en la Línea E de subte? ¿Por qué si durante años una empresa contratista de servicios públicos presta un mal servicio no puedo cambiarla por otra? ¿Por qué siguen ganando plata a pesar de la disconformidad general? ¿Por qué nadie sabe quiénes son sus dueños y qué hacen?

Hemos llegado a la peor escena posible: tenemos absolutismo de mercado y un Estado inútil e ineficiente. Llegamos así al final del ciclo del Pro.

La solución es devolverle el poder a la gente: Renegociar todos los contratos con todas las empresas, imponer condiciones justas, que los ciudadanos conozcan adónde van sus impuestos, diseñar los incentivos económicos adecuados para que las contratistas cobren sólo si cumplen con sus obligaciones, construir indicadores a partir de evaluaciones de los usuarios y consumidores, incrementar el control y la fiscalización públicas, para poder comparar las prestadoras a la hora de futuras licitaciones, utilizar la tecnología de la inteligencia artificial, el big data y la blockchain para mejorar tanto la transparencia, como la eficiencia y eficacia de los servicios públicos.

Obviamente, la filosofía del Pro y de La Libertad Avanza es que los mercados se autorregulan, aunque sabemos que la desregulación descontrolada ha empeorado la gestión de los bienes públicos. Y peor aún resulta cuando, además de darle tanto poder al mercado, se utiliza al Estado como un planificador de sus negocios... ¡con la plata de los contribuyentes! Cuando se observa el maxikiosco, quiénes se benefician de este modelo, se entiende la matriz de negocios del Pro.

El maxikiosco es el responsable de la mala calidad de los servicios que tenemos en la Ciudad. Es imposible que el PRO lo destruya porque el PRO es parte de él. Los vínculos con las empresas aparecen por todas partes. Algunas han sido **aportantes de campaña**, como Altote, Naku, Construmex, Murata, Miavasa, las empresas encargadas de las viandas escolares y de hospitales, Criba, Coinsa, Mantelectric.

Otras, tienen **vínculos con funcionarios o familiares**. Por ejemplo, la empresa encargada de realizar el software para enseñar inglés tiene vínculos con el Jefe de Gabinete de Jorge Macri, Sánchez Zinny. O IRSA, la estrella del negocio inmobiliario porteño, donde fue gerente el hermano de Larreta. En las compras de la Ciudad aparecen muchas veces funcionarios, como en la compra de luminarias a empresas vinculadas a los Blanco Villegas (familia materna de Macri) y Peña Braun (del ex Jefe de Gabinete de Nación, Marcos Peña), o en la compra de armas no letales a una empresa del hermano García Moritán. El caso paradigmático es la Familia Caputo, uno de los actores principales del maxikiosco, con negocios en casi todas las áreas, de estrechísimo vínculo con los Macri.

Por otro lado, hay que mencionar que algunas de las empresas que figuran en este libro, **han reconocido en el marco de causas judiciales que han pagado coimas a funcionarios a cambio de obtener sus contratos** ¿Cómo podemos estar seguros que el que paga coimas en un distrito no lo haga también en la Ciudad? Entre los ejemplos aparece el Grupo Roggio, otro de los grandes protagonistas de este libro. Pero también Ilubaires, Conovial, Solbayres, Nittida. Incluso han trascendido chats entre contratistas, como Marcelo Violante, que tuvo durante décadas el negocio de las grúas, con funcionarios, como el ex Ministro de Seguridad Marcelo D'alessandro, en el que hablan de "ofrecerle negocios a Horacio" y sobres con miles de dólares.

Amamos esta ciudad, y la disfrutamos a pesar de todo esto. Porque no hay otro lugar en el mundo donde la amistad sea tan importante como para hacernos encontrar cada vez que podemos en el café, el club del barrio o la mateada en el parque. Porque en ningún lado vas a encontrar teatros llenos en cada barrio, y centros culturales,

y fútbol y bodegones. Porque las familias siguen apostando a trabajar y estudiar como las bases del progreso individual y colectivo. Porque cuando tenemos tiempo libre nos gusta disfrutarlo en comunidad. Porque llevamos puesta la camiseta del barrio y nos gusta ser porteños y porteñas, pero también nos gusta ser de Agronomía, de Boedo, de Almagro o de Chacarita. Porque disfrutamos la libertad y respetamos la libertad del otro. Porque sabemos que la verdadera casta es la de quienes nos robaron esta ciudad hace casi veinte años, y se la reparten desde entonces entre su familia y sus amigos.

Buenos Aires fue siempre una ciudad participativa, donde los vecinos y vecinas se reúnen para plantear sus reclamos, pero también ofrecer soluciones. Somos solidarios, amables y también pertinaces y vehementes cuando queremos hacernos escuchar. Mucho de eso se fue perdiendo en la última década, porque también nos arrebataron esos espacios. Se apropiaron de la ciudad, y nos expulsaron. El maxikiosco tiene góndolas, y caja. Factura, no tiene espacio para la participación ciudadana.

No es un problema de estado o privados. Hay cosas que puede hacer bien el estado eficiente y austero, y hay cosas que pueden hacer bien los privados si están controlados y si no forman parte de la cadena de corrupción. Lo que importa verdaderamente, es que todo esté pensado como parte de un proyecto de ciudad donde el puntal sea el ciudadano, la ciudadana. Individualmente y en comunidad. En una organización transparente y participativa. Que todos y todas tengan garantizados sus necesidades y sus derechos, para que cada uno pueda buscar la felicidad a su manera, con sus recursos y sus talentos. Esa es la comunidad que queremos, la que persiga el buen vivir.

Eso es para lo que estudio, me formo, milito y trabajo desde que hace ya muchos años, y las primeras canas que comenzaron a aparecer me lo recuerdan cada día, cuando en el patio de la escuela de mi barrio entendí que la única manera de ser feliz es en medio de amigos, familia, comunidad. Si pudiera elegir un sueño, es que en esta ciudad nadie se sienta solo. **Que todos sepamos que somos los únicos, los verdaderos dueños, de esta maravilla llamada Buenos Aires.**

CAPÍTULO 1

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una estructura elefantiásica de 10 ministerios, la Vicejefatura de Gobierno, la Jefatura de Gabinete, 6 secretarías dependientes directamente del Jefe de Gobierno y 5 organismos fuera de nivel. Además, existen 10 secretarías, 50 subsecretarías, 281 direcciones generales, 720 gerencias, 540 subgerencias y 25 organismos fuera de nivel dentro de los ministerios (cada uno de los cuales tiene su propia estructura)¹. **Este inmenso Estado porteño** le cuesta a sus contribuyentes 11 mil millones de dólares anuales. Pero quienes verdaderamente gestionan no son esos cientos de funcionarios públicos, sino las empresas que contratan, a las que nadie conoce, nadie evalúa ni, como veremos, nadie controla.

Como ya mencionamos, no creemos que todas las áreas deban ser manejadas necesariamente por el Estado. Muchas veces, la administración pública no posee la capacidad operativa y técnica para abarcar tantas áreas, con conocimientos tan específicos. Delegar ciertas tareas en empresas podría ser beneficioso, fundamentalmente si éstas poseen expertise y capital para llevarlas adelante. Siempre y cuando sean controladas y reguladas, contratar empresas “especialistas” para que se encarguen de brindar bienes y servicios públicos no debería tener nada de malo.

Una clara demostración de la nula voluntad de control a las empresas contratistas es el caso de las multas que pone el Ente Regulador de Servicios Públicos. Este organismo autárquico con rango constitucional es el encargado de controlar la prestación de los servicios públicos, garantizar su calidad y proteger los derechos de los usuarios. Cotidianamente fiscaliza el funcionamiento de las empresas y las sanciona con multas por incumplir con sus deberes. Sin embargo, no tenemos pruebas de que esas multas se abonen. Es vox populi que eso no sucede. Pero como queremos pensar bien, fuimos a buscar los

datos. Al ser un ente autárquico, esas multas deberían conformar los recursos propio del organismo. Pero cuando analizamos el presupuesto, estos recursos no aparecen. Con lo cual, la duda sigue abierta... ¿pagan las multas o son sanciones testimoniales?

Para ejemplificar lo anterior, tomamos un año de caso testigo. Relevamos todas las multas que realizó el Ente a las empresas entre enero y diciembre de 2024. Las casi 2000 sanciones alcanzan el monto de mil seiscientos millones de pesos. Alrededor de casi un millón y medio de dólares. En 2024, hasta el primer semestre, ejecutó 0 (cero) pesos de fondos propios, mientras el Tesoro de la Ciudad aportó 7 mil millones de pesos. En el 2023 los recursos propios fueron apenas 152 millones de un presupuesto ejecutado total de 7 mil millones. En 2022, nuevamente 0 (cero) pesos, al igual que en 2021. En el 2020 aportaron menos de 4 millones de pesos, de un presupuesto total de mil millones aportados por el Tesoro.

Los bienes públicos en manos privadas

En todas las ciudades existe una cantidad de bienes que por sus características, sin importar si son ofrecidos por empresas o por el Estado, son denominados **“bienes públicos”**. Esto se debe a que reúnen dos características que los distinguen de otro tipo de bienes y servicios: **la no rivalidad y la no discriminación**. Suena técnico, pero es bastante sencillo. Veámoslo con algunos ejemplos.

Cuando hablamos de **“no rivalidad”**, significa sencillamente que no existe rivalidad en el consumo. En el caso de la mayoría de los bienes, cuando optamos por consumirlos estamos reduciendo la cantidad para otros consumidores. Si quiero comprar una entrada para un espectáculo, estoy generando un saldo menor de localidades para otros usuarios. Ese ticket que compré yo no podrá comprarlo otro. En el caso de los bienes públicos eso no sucede así. Por ejemplo, cuando consumo **“alumbrado público”** no estoy quitándole la luz a otro consumidor.

Por su parte, la característica de **“no discriminación”** significa que no se puede discriminar al consumidor del bien, que estará disponible para todos, independientemente de quiénes sean, dónde estén o

si pueden o no abonar su costo. En el caso de la recolección de residuos, si el Estado decidiera no proveer a un ciudadano —por no haber abonado u otro motivo—, estaría afectando a los demás ciudadanos y al bienestar general, ya que la suciedad estaría allí también para quienes hayan decidido pagar. Lo mismo podría decirse para el control de plagas o el alcantarillado. El criterio de no discriminación podría derivar en una situación conocida como la del “usuario polizón”, o “el colado” que tiene fuertes incentivos para no pagar por un bien que de todas formas podrá utilizar. Es para evitar esto que el cobro se hace a través de una “tasa”.

Estas peculiares características hacen que las leyes de la oferta y la demanda sencillamente no funcionen para el caso de los bienes públicos. El mercado depende de la competencia entre productores para ofrecer bienes de mejor calidad a precios más bajos. La **relación entre oferta y demanda** no solo permite equilibrar precios y cantidades sino que obliga a las empresas a mejorar sus bienes y servicios para poder mantenerse competitivas. Pero **los bienes públicos rompen esta lógica: la no rivalidad** elimina la necesidad de competir por el acceso a una cantidad limitada de un bien, lo que imposibilita el cobro por el mismo (si todos pueden obtenerlo por qué lo pagaría) mientras que la **no discriminación** impide que las empresas cobren a los usuarios y obtengan beneficios, ya que no pueden restringir el acceso (no puedo impedir que el que no pagó no lo consuma). Esto significa que no hay incentivos económicos claros para la inversión privada en bienes públicos, ya que el mercado por sí solo no puede garantizar su producción eficiente ni su provisión universal.

Pero no son los únicos casos en que las leyes del mercado no garantizan que provea bienes y servicios de manera más eficiente. Por ejemplo, en el caso del transporte la intervención del Estado se realiza porque su estructura de mercado queda definida dentro de lo que se denomina **monopolio natural**. En los mercados con esta estructura es más conveniente la prestación o producción por un solo prestador. Es así porque el nivel de inversión y el costo de mantenimiento es tan alto que la prestación o producción por dos o más empresas incrementa el costo de producción significando mayores erogaciones para el usuario.

Es por esto que el Estado suele intervenir en la provisión de estos bienes que son esenciales para el bienestar colectivo y cuya producción no puede depender exclusivamente de las leyes de oferta y demanda. **Si la regulación del Estado resulta importante en casi todos los bienes y servicios, como mínimo para evitar fallas de mercado y abuso de posición dominante, en el caso de los bienes públicos resulta imprescindible.** Dadas las características de los bienes públicos, sin regulaciones los privados no tendrían incentivos para brindarlos de manera eficiente. Es una decisión opinable pero legítima que los bienes públicos sean provistos por el sector privado, sin embargo si no es el Estado quien controla y regula, la prestación será siempre de mala calidad.

En la Ciudad de Buenos Aires los bienes públicos son brindados por empresas privadas. Si bien en sí mismo esto podría no ser un problema, por lo dicho anteriormente resulta evidente que la regulación pública tiene un rol importante para que estas empresas brinden bienes de buena calidad. De lo contrario, podrían cobrar dinero de los contribuyentes sin que los mecanismos de mercado actúen para enviarles señales acerca de su mal desempeño. Sin embargo, a lo largo de este libro demostraremos cómo la desregulación, producto de un complejo entramado de intereses, hace que no exista una relación virtuosa entre lo público y lo privado que garantice bienes públicos de calidad para los porteños.

Recolección de basura

La limpieza de nuestra Ciudad no depende de una cuadrilla de empleados públicos que se encarga del aseo general de las calles, sino de empresas privadas que se reparten el territorio en diferentes zonas. Entre las responsabilidades de las empresas se encuentra no sólo la recolección de los residuos vertidos dentro de los contenedores, sino también el barrido y limpieza en calzadas, veredas y espacios públicos; la provisión, reemplazo y mantenimiento de los cestos papeleros; el despegue de pegatinas; retiro de graffitis, pancartas y pasacalles y el servicio de recolección, barrido y limpieza de forma inmediata luego de concentraciones, corsos de carnaval, ferias barriales, maratones, etc.

La envergadura del contrato de la basura es de tal magnitud, que su privatización en 1979, durante la gestión de facto del intendente Cacciatore, cuando quedó en manos de Manliba, permitió el auge del grupo económico comandado por la familia Macri. Entre las empresas que participan actualmente de este negocio en la Ciudad, se encuentran las más importantes empresas contratistas del Estado, grupos económicos diversificados y con negocios a nivel nacional y provincial a lo largo del territorio. **El contrato de la basura es el más importante de la Ciudad**, alcanzando alrededor del 7% del presupuesto ejecutado año tras año. En el presupuesto ejecutado del 2024, se gastaron casi 600 millones de dólares en higiene urbana. Para el 2025, el presupuesto total de la Ciudad será de más de 11 mil millones de dólares.

La recolección de la basura en la Ciudad se divide en 7 zonas, cada una de las cuales es administrada por una empresa distinta, a excepción de la Zona 5, que coincide con la Comuna 8 (los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) y es gestionada por un organismo público, el Ente de Higiene Urbana. La adjudicación del contrato fue el 20 de diciembre de 2013, para empezar a funcionar desde el 1 de octubre del 2014, por un plazo de 10 años (que fueron prorrogados). Al tipo de cambio de la fecha de adjudicación, el contrato a 10 años por las 6 zonas a cargo de empresas fue por un monto total de **casi 3 mil millones de dólares.**²

Zona	Empresa	Monto en Pesos	Monto en Dólares
Zona 1 (Comuna 1)	AESA	\$ 5.016.631.750	u\$s 521.479.391
Zona 2 (Comunas 2, 13 y 14)	CLIBA	\$ 5.292.673.250	u\$s 550.173.934
Zona 3 (Comunas 11, 12 y 15)	SOLBAYRES	\$ 5.882.612.299	u\$s 611.498.159
Zona 4 (Comunas 9 y 10)	NITTIDA	\$ 3.413.901.000	u\$s 354.875.363
Zona 5 (Comuna 8)	Ente de Higiene Urbana	N/C	N/C
Zona 6 (Comunas 5, 6 y 7)	Ashira - Martin (UTE)	\$ 4.078.654.000	u\$s 423.976.507
Zona 7 (Comunas 3 y 4)	Urbasur	\$ 4.484.266.000	u\$s 466.139.916

Ya verán a lo largo del libro que el **Grupo Roggio** (propietario de Cliba) aparece en distintos negocios de la Ciudad. ¿Está vinculado a la basura? Bingo, no podía faltar. Encargado de la limpieza en la zona norte de la Ciudad, el grupo también es propietario de Emova, concesionaria del Subte, y además beneficiaria de una cantidad importante de obras y contrataciones por parte del Estado porteño. **Figurar como “arrepentida” en la “causa cuadernos” no le impidió acceder a este lugar privilegiado.** Tampoco se lo impidió a **Solbayres**, vinculada a los Pescarmona, ni a **Nittida**, del grupo EMEPA, propiedad de otro empresario que se acogió a la figura de imputado colaborador, Gabriel Romero. Este empresario hace **negocios con la Ciudad hace 20 años** a través de su empresa de publicidad PC Vía Pública, que tiene la concesión de parte del mobiliario urbano. Además, logró quedarse con un lote en el Parque de la Innovación porteño por 18 millones de dólares, donde podrá construir hasta 18 mil metros cuadrados. Es decir, a razón de 1.000 dólares el m² en uno de los barrios más cotizados de la Ciudad. En Av. Libertador, el valor del m² puede alcanzar los 4.000 dólares.

Las empresas que admitieron pagar coimas no deberían poder ser contratistas del Estado. ¿No es obvio? Hace 7 años presentamos ese proyecto de ley en la Legislatura Porteña. ¿Por qué lo cajearon? Porque le devolvería a los porteños lo que se llevan estos negocios. Es un ejemplo clarísimo de porqué Buenos Aires pide un cambio.

Además de estas empresas, también se encuentra Urbasur, de negocios conjuntos con los Macri. Propiedad de ACS, la constructora española del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, que es accionista de Autopistas del Sol y, por ende, vinculada a Sideco Americana, la compañía de la familia Macri, que recién vendió sus acciones en mayo de 2017. Las otras dos empresas que completan el pliego son la unión transitoria entre Ashira Martín y Martín, de los empresarios Eduardo García y Jorge Martín, y AESA, Aseo y Ecología S.A., del grupo francés Veolia.

El restante prestador es el Ente de Higiene Urbana, organismo público que se encarga de la recolección en la Comuna 8, que abarca a los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, al sur, una de las zonas más postergadas de Buenos Aires. Allí el presupuesto es

mucho menor que para el resto de la Ciudad. Para el año 2025, el Ente de Higiene Urbana tiene presupuestados \$7.490 millones de pesos. Para el resto de las comunas, el presupuesto es de más de un billón de pesos. El presupuesto para la Comuna 8 es de \$486 millones por km², mientras que para el resto de la Ciudad es de \$5.807 millones por km². Es decir, que **el presupuesto asignado para las 14 comunas cuyo servicio de higiene urbana es provisto por empresas privadas multiplica por 12 el monto destinado al mismo fin en la Comuna 8 donde el prestador es el Estado.**

¿Cuáles serán los motivos de esa discriminación? ¿Sólo amerita inversión en los casos en los que existe un negocio detrás? ¿O bien es directamente una decisión política en contra de la comuna más pobre de la Ciudad, donde casualmente suele perder las elecciones el oficialismo en manos del peronismo? ¿O será simplemente que el Estado es más eficiente para prestar el servicio que las empresas privadas?

La licitación del servicio de recolección de residuos se firmó en el año 2013, para empezar a funcionar en 2014, por un período de 10 años, prorrogable por 12 meses más. Pero mediante un Acta Acuerdo de septiembre de 2021, **se decidió prorrogar el contrato por 4 años más, hasta 2028, sin una justificación adecuada.** Así lo señaló un Informe de la Auditoría General de la Ciudad³, firmado por unanimidad: “Incumplimiento al artículo N° 10 "Plazo Contractual" del PCP. El contrato se prorrogó por 4 años en virtud de las Actas Acuerdo. Falta de fundamentación, en cuanto a la concesión de la prórroga del contrato en exceso del vencimiento original y de la motivación como uno de los requisitos del acto administrativo.”

El mismo informe señala otras irregularidades. Se decidió realizar un descuento del 4% sobre los contratos a las empresas y, como compensación, el **Gobierno de la Ciudad asumió tareas y responsabilidades que no estaban incorporadas en el pliego original:** pago de parte de los salarios de los empleados de las contratistas, como antigüedad y vacaciones, y la provisión de contenedores y flota. Es decir que no sólo se extendió el contrato sin justificación, sino que lisa y llanamente **se transfirieron al Estado costos de las empresas.** Hacés un poco de control público sobre

estos negocios y empieza a salir todo el pus... Es una cantidad enorme de dinero extraída del bolsillo de los porteños.

Además, se modificaron rutas y agregaron tareas, como la recolección de residuos secos sin la debida incorporación de equipos para su prestación, se desafectaron rutas de grandes generadores para recolectar los contenedores verdes, no se respeta la antigüedad máxima requerida para la flota automotriz, se imputan gastos no contemplados y el 52% de los reclamos por la prestación del servicio fueron resueltos por fuera de los plazos estipulados.

El contrato de higiene urbana tiene una importancia central para la Ciudad. No solamente impacta en la belleza de Buenos Aires sino que tiene dos objetivos básicos: la prevención de enfermedades y evitar la propagación de plagas, y proteger al ambiente, ya que reduce la contaminación del suelo, el agua y el aire.

Cada vez se ven más imágenes de basura desbordando las calles de nuestra Ciudad. La solución del gobierno porteño fue la compra de "aromatizantes con olor limón". **Sucios, pero perfumados.** En el medio, contratos multimillonarios que se prorrogan sin argumentación, incumplimiento de tareas, traslado de responsabilidades al Estado y empresas contratistas que, a pesar de haber confesado el pago de coimas, prestan servicios en innumerables rubros de la Ciudad y son beneficiarias de obras o de concesiones. Esto explica por qué la Ciudad gasta tanto en higiene urbana y, a la vez, tiene las paupérrimas condiciones que transitamos y vivimos a diario.

Mantenimiento de veredas

La gestión del PRO pasó de hacer varias veces la misma vereda a no preocuparse porque la mitad estén rotas. Es cada vez más frecuente ir caminando por la vereda esquivando charcos por la cantidad de baldosas hundidas, cuando no directamente pozos. De una u otra manera, hace tiempo que el mantenimiento de las veredas despierta polémica en la sociedad.

Como no podía ser de otra manera, este servicio está tercerizado. Sin embargo, no siempre fue así. Hasta la llegada de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno, esta tarea era realizada por cuadrillas municipales presentes en todos los Centros de Gestión y Participación.

En el caso del contrato para la “Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras”, Licitación Pública N° 351-0064-LPU23, las empresas contratadas son algunas de las que también suelen estar encargadas de obras públicas en la Ciudad, por montos millonarios. La licitación se adjudicó en agosto del 2023 por 48 meses y un monto de 64 mil millones de pesos, en esa época equivalentes a más de **50 millones de dólares**.⁴

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS

ZONA A: COMUNAS N° 1 y 4	AVINCO CONSTR. S.A. / ILUBAIRES S.A. UT
ZONA B: COMUNA N° 2	ALTOTE S.A
ZONA C: COMUNAS N° 5 y 3	CONSTRUMEX S.A.
ZONA D: COMUNA N° 6	SEOB S.A.
ZONA E: COMUNA N° 7	SALVATORI S.A
ZONA F: COMUNA N° 8	NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
ZONA G: COMUNA N° 9	MIAVASA S.A
ZONA H: COMUNA N° 10	MARCALBA S.A
ZONA I: COMUNA N° 11	GRUPO VARSOVIA S.R.L
ZONA J: COMUNA N° 12	ALEMARSA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
ZONA K: COMUNA N° 13	URBASER ARGENTINA SA
ZONA L: COMUNA N° 14	DEJESUS CONSTRUCTORA SRL
ZONA M: COMUNA N° 15	ALGIERI S.A.

El mayor contrato es para la unión transitoria entre **Ilubaires y Avinco**. La primera es una contratista habitual del GCABA, también presente en la licitación de alumbrado público. Pertenece a la Familia Weiss, vinculada en la causa cuadernos. Por las comunas 1 y 4 de la Ciudad, recibió 5 millones de dólares. Otra vieja conocida es **Algieri**. En julio de 2024 le adjudicaron la puesta en valor de las estaciones Lima y Pueyrredón del Subte. Un estudio de la **Auditoría General de la Ciudad** reveló que **Algieri se encontraba entre las empresas más contratadas para obra pública, a pesar de que los expedientes estaban plagados de incumplimientos**. Tuvo a su cargo obras de gran envergadura, como la puesta en valor de la Av. Corrientes, de los tres módulos que componen la Plaza Lavalle, de Barrancas de Belgrano, del destacamento policial del Barrio 31 y de la urbanización del Barrio 31, entre muchas otras. Su principal cliente es el GCBA.

Si hablamos de viejas conocidas, hay que mencionar dos empresas que en este caso fueron separadas, pero han tenido negocios en conjunto. Hablamos de **Altote S.A. y Naku Construcciones S.R.L.**, quienes tienen a su cargo las Comunas 8 y 2. En una unión transitoria, fueron beneficiadas en 2022 por 646 millones de pesos, más de 2 millones de dólares⁵, para una obra en Costa Salguero, encargadas de desmantelar lo que era la cancha de Golf que se encontraba en el predio. Además, tanto el titular de Naku Construcciones S.R.L, Santiago Jorge Bayazbakian, como el de Altote S.A., Eduardo Bartolomé Otero Machado, fueron aportantes a las campañas del PRO.

Por su parte, **Construmex S.A.** también figura entre los **aportantes de la campaña a gobernadora de María Eugenia Vidal**, de quien luego recibieron la adjudicación de numerosas obras. Otra de las empresas, el Grupo Varsovia, fue adjudicataria de distintas obras en la Ciudad: construcción y limpieza del Metrobús, reforma del Casco Histórico, mantenimiento de Puentes, Puentes Móviles, Pasarelas, etc. El grupo pertenece a la familia Raglewski, integrada por un excomisario de la Policía Federal y dueña de la empresa Murata SA, denunciada en varias ocasiones por diversos motivos. El más sobresaliente se remonta a 2018, en pleno escándalo por los aportantes truchos para las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017. En aquella ocasión, además de la investigación judicial, en entrevista con Perfil, Brenda Osso, una ex empleada de la empresa,

denunció que ella y otros 11 trabajadores habían sido utilizados para blanquear los aportes a la campaña.

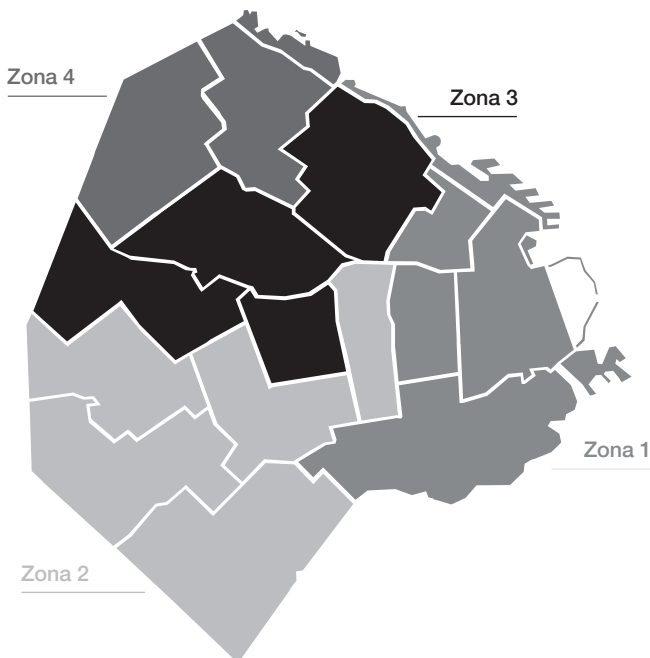
Miavasa S.A. es propiedad de Carlos Alberto Mastronardi, que suele ganar **muchas contrataciones en obra pública y en el Ministerio de Seguridad**⁶, como el mantenimiento integral y preventivo de los edificios de la Policía de la Ciudad, la construcción de pabellones de dormitorios y la ampliación del comedor en el instituto de cadetes. También ganó un contrato para la refacción de una comisaría, el mantenimiento de centros de reciclado y obras generales del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad. Además fue adjudicataria de licitaciones del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. A su vez, fue contratada para obras en el Metrobús y el Centro Trasbordo Constitución. La empresa tenía a **cuatro de sus ejecutivos como aportantes** a la campaña presidencial de Macri en 2015. Según La Nación, tuvo **26 contratos por más de 55 millones de dólares** en proyectos tales como aceras y superficies, reparación y renovación de veredas y la provisión de equipamientos en edificios de la Villa Olímpica, entre otros. Fue la empresa encargada de la construcción del Parque Lineal Caballito.

Levantás una baldosa y aparece un negociado. Pero esto no termina acá. Como si fuera poco, a la hora de inspeccionar el estado del mantenimiento de las vías peatonales, para **controlar el funcionamiento de las empresas**, la responsabilidad no recae sobre algún organismo estatal, sino que está a cargo de **¡otras empresas!** El contrato para la adjudicación del “Servicio Integral de Inspección de Obras en Vías Peatonales”, Licitación Pública N° 7162-0878-LPU23, fue adjudicado por 36 meses y un monto de 2.226 millones de pesos, equivalentes a 1.769.000 dólares⁷ a la empresa Hytsa Estudios y Proyectos S.A. Esta empresa ya había sido cuestionada en 2021, cuando recibió contratos millonarios en dólares para servicios de consultoría para la contratación de recursos humanos en el marco de la urbanización de la Villa 31. Entre las diferentes ampliaciones de ese contrato recibió **por trabajos de consultoría más de 2 millones de dólares**. Entre 2017 y 2018 también habían sido contratados para consultorías en el mismo barrio, por valores cercanos a los **2.500.000 dólares**. Recientemente, volvió a ser beneficiada con un trabajo de consultoría por más de 200 mil dólares.

Alumbrado público

En el caso del alumbrado público, la licitación fue adjudicada en septiembre de 2023 por el plazo de 36 meses y con un costo total de **21 millones de dólares**⁸. Aparecen algunas recurrentes protagonistas de este libro, **Mantelectric e Ilubaires**. El servicio se divide en 4 zonas, repartidas de la siguiente manera:

Zona	Empresa	Monto en Pesos	Monto en Dólares
Zona 1 (Comunas 1 - 2 - 3 - 4)	Mantelectric I.C.I.S.A.	\$3.887.292.420	u\$s 5.784.661
Zona 2 (Comunas 5 - 7 - 8 - 9 - 10)	Autotrol S.A. Construman S.A.	\$2.170.539.914	u\$s 3.229.970
Zona 3 (Comunas 6 - 11 - 14 - 15)	Lesko S.A.C.I.F.I.A	\$4.613.168.028	u\$s 6.864.833
Zona 4 (Comunas 12 - 13)	Ilubaires S.A.	\$3.743.682.455	u\$s 5.570.956



Hace unos años, la **Ciudad comenzó a modificar sus luminarias** para que el alumbrado público **tenga 100% luces led**. Una medida muy positiva en términos de ahorro energético y cuidado del ambiente, pero que sin embargo se vio afectada por la polémica. Es que en el año 2018, el Gobierno Nacional de **Mauricio Macri** lanzó el **Plan de Alumbrado Eficiente (PLAE)**, mediante el cual se ofrecía a provincias y municipios aportes no reembolsables destinados al cambio de luminarias existentes por tecnología led.

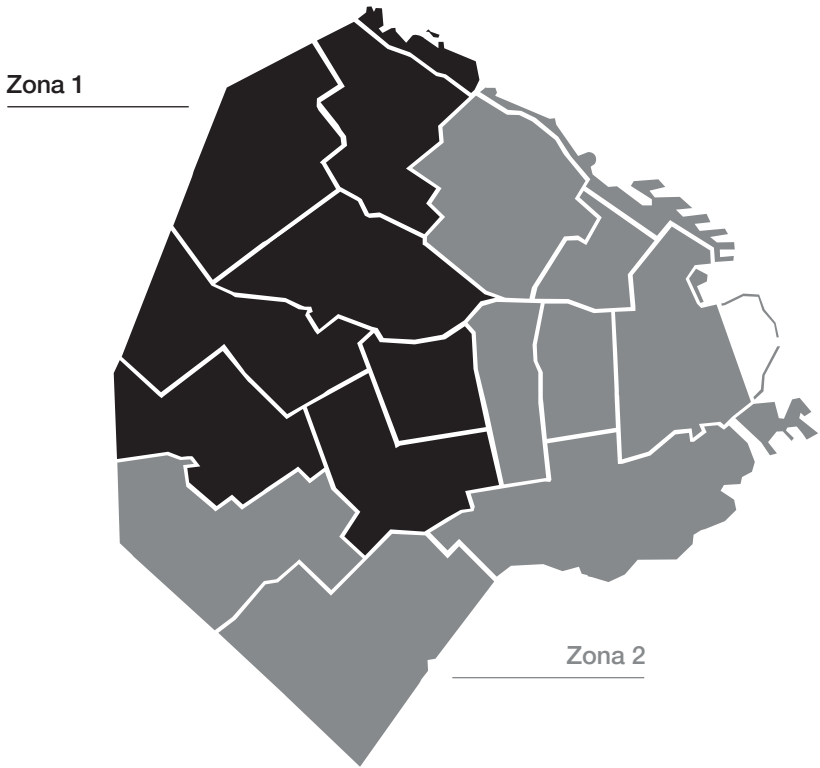
En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires convocó a una licitación, donde las empresas adjudicatarias resultaron ser empresas vinculadas a las familias Macri y Peña (Jefe de Gabinete del Ejecutivo Nacional). Las dos ganadoras fueron **Philco**, vinculada a los **Blanco Villegas**, la familia materna del ex Presidente y **General Lighting Systems**, que había sido adquirida en 2017 por **Alejandro Jaime Braun Peña**, primo del Jefe de Gabinete de la gestión nacional macrista. Una persona bien intencionada podría suponer que se trató de una simple casualidad. Sin embargo, las mismas empresas también ganaron licitaciones en los municipios de Pilar, conducido por Ducoté, Morón, cuyo intendente era Tagliaferro (marido por ese entonces de la gobernadora María Eugenia Vidal), y ni más ni menos que Vicente Lopez, donde el actual Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri era intendente. **Cuatro distritos macristas con las mismas empresas ganadoras**, vinculadas a familiares del Presidente y Jefe de Gabinete. **Una puede ser casualidad, pero con cuatro nos permitimos dudar.**

Control de plagas

Cada vez es más frecuente la aparición de roedores en la vía pública. En todos los barrios el reclamo es el mismo: se ven ratas por todas partes, en las calles, en las medianeras, en los comercios. Buenos Aires ha sido invadida. Como no podía ser de otra manera, en el maxikiosco porteño la tarea del control de plagas está a cargo de empresas privadas.

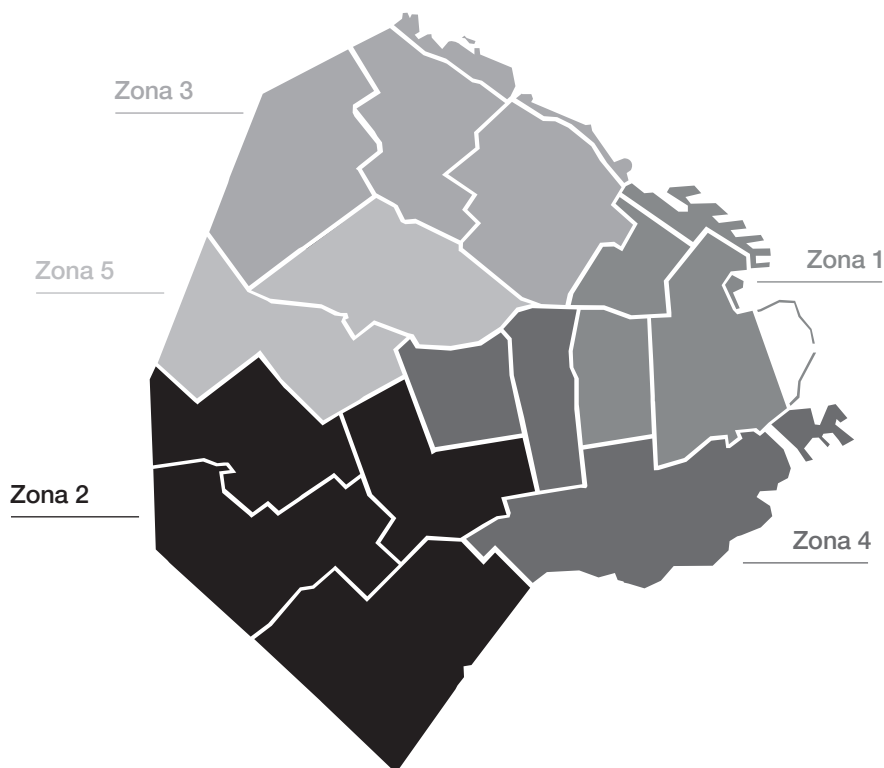
En este caso, se trata de dos empresas que se dividen la Ciudad en dos zonas. Para la zona 1 (Comunas 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 15), fue adjudicada la empresa Agus Fumigaciones S.R.L. y para la zona 2

(Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 14) el Grupo EFIA S.R.L. Fueron adjudicadas el 2 de noviembre de 2022 por un período de 24 meses, que han sido prorrogados por un año más, hasta noviembre de 2025. En el caso de la zona 1, la adjudicación fue por 499 millones de pesos, prorrogados por 249 millones. En dólares⁹, mientras la primera de las empresas facturó casi **dos millones de dólares**, la segunda embolsó **dos millones y medio**, entre los montos de la adjudicación y la prórroga.



Alcantarillado

El mantenimiento de los desagües pluviales es uno de los servicios centrales de la Ciudad, debido a que entre sus principales responsabilidades se encuentra **evitar y/o morigerar anegamientos en la vía pública**, generados por fenómenos climáticos como las lluvias, tormentas y/o sudestadas mediante acciones preventivas y correctivas, así como asistencia en alertas hidrometeorológicas.



La adjudicación por 36 meses se realizó el 1 de octubre de 2021, prorrogándose en 2024 hasta octubre de 2026. El monto total del contrato, teniendo en cuenta la prórroga, es por más de **26 millones de dólares**¹⁰.

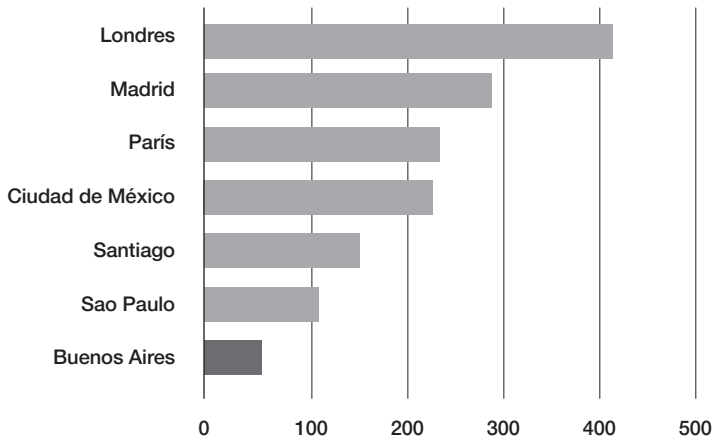
Zona	Empresa	Monto en USD	Monto de la prórroga en USD	Monto en total USD
Zona 1	UTE: Mantelectric Soluciones Químicas Os.Lo Argentina	u\$s 5.915.409	u\$s 572.666	u\$s 6.488.076
Zona 2	Reconstrucción Caños S.A.	u\$s 5.423.465	u\$s 525.443	u\$s 5.948.908
Zona 3	Automat S.A.	u\$s 5.525.048	u\$s 535.548	u\$s 6.060.596
Zona 4	UTE: Desobstructora Argentina - Ashira	u\$s 4.497.270	u\$s 435.840	u\$s 4.933.109
Zona 5	UTE: Alemarsa - SACH Mantenimientos Ambientales	u\$s 2.650.532	u\$s 257.329	u\$s 2.907.862
Total				u\$s 26.338.551

Subte

El subte debería ser una prioridad en materia de gestión para la Ciudad de Buenos Aires. Sus ventajas son varias y diversas. Es el transporte más rápido y el más seguro, pues su tasa de accidentes es muy baja en comparación con otros medios. Además, más subte significa menos tráfico automotor, reduciendo los embotellamientos en la superficie, mejorando la circulación y reduciendo la contaminación. También ayudan a reducir la contaminación sonora que se produce cuando hay elevado tránsito vehicular.

Buenos Aires fue vanguardia en la construcción de subterráneo, pero en los últimos 20 años quedó atrás de ciudades como México, Santiago de Chile o San Pablo, entre otras. La mala calidad del servicio es el primer indicador para verificar que el subte no es una prioridad para el oficialismo porteño, a pesar de lo que ha prometido en sucesivas campañas. En 2019, **Larreta prometió bajar la frecuencia a menos de 3 minutos** de espera, pero la realidad hoy es muy distinta. No sólo no se cumplió con el objetivo, sino que **estamos peor**. Durante el 2024, el promedio de espera estuvo siempre cerca de los 4 minutos, pese a que en noviembre de 2019 se había alcanzado el récord de 3:25 minutos.

EXTENSIÓN DE LA RED DE SUBTE DE LAS PRINCIPALES CIUDADES EN KILÓMETROS



Fuente: Elaboración propia en base a SBASE, MetroSP, Directorio de Transporte Público Metropolitano, Metro CDMX, RATP FR, Metro Madrid y Transport For London

Por supuesto, esta situación no es idéntica para todas las líneas, siendo la línea E la de mayor espera, **superior siempre a los 5 minutos**. Si sumamos al premetro, el promedio de todo el sistema estuvo en todos los meses del 2024 por encima de los 5 minutos. Para esta línea la frecuencia está arriba de los ¡11 minutos! Tanto la E como el Premetro, las de peores indicadores, se encuentran en el sur de la Ciudad, ¿casualidad?

Por más negativa que parezca esta situación, es todavía peor. La frecuencia mencionada es así **siempre y cuando el servicio funcione**. Un relevamiento de los problemas en la prestación del servicio indican que existe al menos un inconveniente diario, generalmente vinculado a la suspensión del servicio en algunos tramos, a la suspensión total, o a las demoras. Nuevamente, la cantidad de inconvenientes depende de la ubicación geográfica. El premetro y la línea E lideran la cantidad de inconvenientes, seguidos por la B.

En materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida la situación es paupérrima. De las 90 estaciones que tiene el subte, sólo 37 cuentan con ascensor, que no siempre funciona. Muchas veces, ni siquiera está disponible la escalera mecánica.

Desde enero del 2024 a enero del 2025, solamente teniendo en cuenta los relevamientos del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, **los ascensores y escaleras mecánicas no funcionaron 729 veces**. Es decir, 2 fallas por día sin contar las que se detectarían con un control más riguroso o con una aplicación que permita a los usuarios aportar información desde sus celulares.

El tercer motivo recurrente es la **ausencia o vencimiento de matafuegos**. Es decir, en un transporte eléctrico, sujeto a cortocircuitos, y bajo tierra, son elevadas las veces en que no están disponibles los elementos necesarios para apagar un eventual incendio. Las **condiciones de higiene** también dejan mucho que desear, no sólo por la suciedad presente en todas las estaciones, sino también por las goteras, muchas veces provenientes de desechos cloacales, y por las inundaciones cada vez que llueve.

A pesar de este pésimo servicio, desde que asumió Jorge Macri la tarifa se elevó muchísimo. Hoy tenemos como usuarios una experiencia mala y costosísima. Cuando asumió el flamante Jefe de Gobierno, el valor de la tarifa para el usuario era de \$125, mientras que desde marzo del 2025 la tarifa es de \$832 en caso de tener la tarjeta nominada (sin tarjeta registrada, el costo es de \$1322).

Estamos hablando de un aumento del 565% en un período en el que la inflación no alcanza el 200%. Con un salario mínimo desde marzo del 2025 de 296 mil pesos apenas alcanza para unos 355 pasajes, una quinta parte de lo que compraba en abril de 2024 (1768 viajes). El costo de viajar en subte todo el mes (40 viajes, suponiendo que no se aplique ningún descuento) representaba el 2,3% de un salario. Un año después, equivale al 11,2%. Para comparar con otras ciudades, en Madrid un salario mínimo compra 592 pasajes, 649 en Santiago de Chile y 1.112 en Ciudad de México.

Antes de explicar las causas de estos malestares cotidianos, adentrémonos en la historia de su responsable: el **Grupo Roggio**, otra empresa que reconoció pagar coimas. En este caso, cuando se acogió a la figura de imputado colaborador, aseguró que pagaba en coimas el 5% de lo que recibía en concepto de subsidios. ¿En la Ciudad será igual? Una vez que finalice el vigente contrato de licitación

en el año 2033, esta empresa habrá estado al frente del manejo del subte durante **¡40 años!**

El Grupo Roggio maneja el servicio de subte desde 1993. Tras el traspaso a la Ciudad en 2012, **la concesión se fue prorrogando** hasta que se aprobó un proyecto de ley para extenderla por 15 años a contar desde 2018. Sin embargo, la aprobación de la Ley en la Legislatura Porteña suscitó polémicas ya que la oposición sostenía que debía aprobarse por dos tercios, es decir 40 votos, y con doble lectura, **requisitos constitucionales que no fueron cumplidos.**

El proceso de licitación se inició en 2018, pero no se aprobó hasta el año 2020. Inicialmente, se presentaron tres propuestas, una encabezada por el mismo grupo Roggio, que ya operaba el servicio hace 25 años; otra, por RATP (operadora del metro de París) y Almston; y una última conformada por Keolis, Transport for London y Corporación América. Sin embargo, la demora en el proceso derivó en que se retiraran las ofertas de RATP y de Keolis, que había obtenido el mejor puntaje en la licitación. De esta manera, la empresa concesionaria quedó sin competencia para renovar el contrato y ampliar su concesión hasta el año 2033, prorrogable por tres años más.

Que Metrovías, hoy Emova, del Grupo Roggio, haya sido la única oferente, sin competencia, impacta de manera directa en la prestación del servicio. Le permitió **prácticamente imponer las condiciones** al Gobierno de la Ciudad en materia de subsidios recibidos e influye de manera indirecta en la tarifa que pagan todos los usuarios.

La tarifa del subte está relacionada con los costos de la operación del servicio. Por un lado existe lo que se denomina **“tarifa técnica”**, que es el valor que tendría que tener un pasaje para alcanzar a cubrir todos los costos de operación, además de las inversiones realizadas, los gastos en seguridad y la desasbestización. Para calcularla, se suman esos costos y se divide según la cantidad total de pasajeros. Ese valor nunca es asumido en su totalidad por las personas que viajan en subte, sino que existe lo que se denomina **“tarifa al usuario”**, que es el monto que efectivamente se termina abonando. En general, esta cifra está en torno a un 30% de la tarifa técnica. La diferencia la paga el Gobierno de la Ciudad con subsidios a la concesionaria.

¿Cómo surge la tarifa técnica? ¿Quién determina los costos? Ahí empiezan los problemas. Surgen de la oferta económica de la empresa, pero como en este caso hubo una sola, el Grupo Roggio prácticamente determinó cuáles eran sus costos para operar. Al momento de discutir el valor de la tarifa en audiencias públicas, el Gobierno de la Ciudad llegó a la conclusión de que el valor de la tarifa técnica era de \$859. Sin embargo, el Ente Regulador de Servicios Públicos determinó a partir de los estados financieros de la empresa que el valor de la tarifa técnica debería ser de \$618. Es decir que el **gobierno convalidó una cifra 39% superior a la realmente necesaria.**

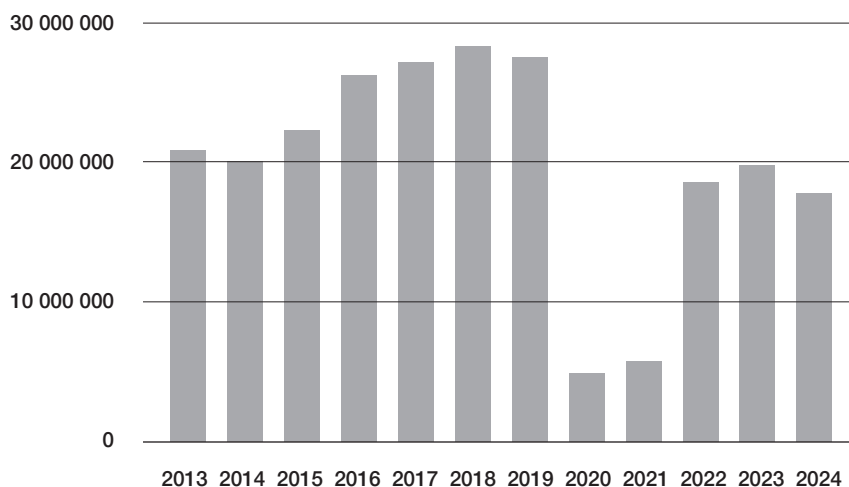
Las razones de tamaño diferencia pueden rastrearse en la “contabilidad creativa” de la empresa. Por ejemplo, para justificar los gastos en el ítem “Mantenimiento de Material Rodante” la empresa presentó 44 facturas de las cuáles 12 son a Benito Roggio Ferroindustrial, otra firma del mismo grupo. Es decir, la empresa **computa gastos que se factura a sí misma.** Pero eso no es todo. El gasto en “Mantenimiento de Material Rodante - Revisión General de Media Vida” es el más importante después de la mano de obra. De 69 facturas, 54 fueron facturadas a la misma empresa del grupo. Tan relevante es este ítem que explica el **10% del valor de la tarifa técnica.** Estas 69 facturas corresponden al mes de diciembre de 2023, y tuvieron un costo total de 820 millones de pesos sólo durante ese período. Un negocio de alrededor de **8 millones de dólares anuales.**

A su vez, figura la contratación de servicios por auditoría y asesoría contable, y jurídica al estudio Mencarini y Tarsitano por 20 millones de pesos. Casualmente, sus dos titulares son parte del directorio de Emova. Además, otro miembro de la familia, Federico Mencarini, es síndico suplente en la empresa y actualmente es funcionario del Gobierno Nacional.

Como si todo esto fuera poco, entre los gastos que presenta la empresa, consta también el ítem **“utilidad de la concesionaria”**, equivalente al 3% del costo total de la operación, una suma de **5.236 millones de pesos por año.** Es decir, la empresa dibuja sus costos, se factura a sí misma, y sobre eso define su utilidad.

Una vez asumidos estos costos, **el Estado le paga a la empresa por cada kilómetro recorrido por coche**, un sistema denominado CKC (Coche por Kilómetro Corrido). Este sistema puede tener la ventaja de generar incentivos para mejorar la frecuencia, ya que se paga por coche y no por pasajero. Sin embargo, como vimos anteriormente, no estaría funcionando. Además, no genera incentivos para que la empresa se preocupe por subir pasajeros a los coches. Como se dijo al principio de este apartado, el subte tiene una serie de externalidades positivas que hacen deseable su promoción por sobre otros medios de transporte. Por eso el sistema de incentivos correcto sería aquel que se denomina "IPK", el Índice de Pasajero por Kilómetro, que toma en cuenta tanto los kilómetros recorridos como la cantidad de pasajeros.

PROMEDIO MENSUAL DE PASAJEROS PAGOS DEL SUBTE POR AÑO (2013-2024)



La cantidad de pasajeros que utiliza el subte está en su peor momento. Hasta el año 2018 esta cifra venía subiendo. Por razones que no hacen falta aclarar, en la pandemia descendieron abruptamente, y luego comenzaron gradualmente a subir. Ese crecimiento paulatino en la cantidad de pasajeros se vio interrumpido en el 2024 por la **brutalidad del aumento en la tarifa** que abonan los usuarios de un servicio cada vez más deplorable.

Como el subte es un sistema de transporte que tiene competencia, si no se toma en cuenta la ecuación económico financiera del usuario, un aumento desmedido de los costos como el que se llevó adelante tiene un impacto en la movilidad. La cifra de pasajeros cae por la migración a otros tipos de transporte en la superficie. Algunos migran al automóvil personal, generando más congestión de tránsito, y otros al colectivo, generando más hacinamiento y peor calidad en el viaje. Se garantiza el negocio de Roggio pero nos perjudicamos todos los porteños, seamos o no usuarios del subte.

Ya se mencionó que el costo del subte aumentó más de 500%. Ahora sabemos que este precio se denomina “tarifa al usuario”. La justificación del Gobierno de la Ciudad para validar este abultado monto radica en que históricamente la diferencia entre el valor del subte y el colectivo fue del 150%. En diciembre de 2023 la tarifa del colectivo costaba 53 pesos, mientras que la del subte 80 pesos. Sin embargo, en el cálculo del gobierno hay un error grosero, ya que la diferencia entre un monto y otro no era del 150%, sino del 51%, una cifra similar a la histórica, que oscila entre el 40% y el 60%. A su vez, este aumento de la tarifa al usuario no guarda correspondencia con el aumento de la tarifa técnica, que pasó de \$397 a \$859 un incremento del 110%, similar a la inflación del período.

La crueldad del ajuste también llega a la Ciudad. Recordemos que la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario la termina pagando el gobierno porteño. Macri, preocupado por mostrarse más duro e insensible que Milei, decide primero convalidar los gastos irregulares de la empresa concesionaria, pero en lugar de asumirlos él, los traslada al usuario a través de la tarifa. **Asume los costos del Grupo Roggio pero se los hace pagar directamente al usuario de su bolsillo.**

La Justicia buscó frenar este atropello contra los usuarios y a través de una cautelar pretendió dejar sin efecto los aumentos. Sin embargo, terminaron produciéndose igual debido a la apelación del gobierno porteño. De todos modos, resulta interesante ver los argumentos de la Jueza Liberatori para intentar frenar el tarifazo:

- Los aumentos fueron por encima de la inflación y por encima de los aumentos de la tarifa técnica, rompiendo además la relación histórica entre el valor del pasaje en colectivo y en subte. Como la tarifa técnica es un cociente entre los costos y la cantidad de pasajeros, si caen los pasajeros por el precio del boleto aumenta la tarifa técnica, generando un círculo vicioso.
- Al no tomar en cuenta la ecuación económico financiera de los usuarios, afecta a la movilidad y a la accesibilidad al servicio.
- Se encontraron irregularidades en numerosos gastos. Por ejemplo:
 - **Gastos sin vinculación a la operatoria del subte:** pagos por publicidad a medios y periodistas, campañas en redes sociales, servicios de auditoría y alerta legislativa facturados a un psicólogo, gastos en cajas navideñas, 73 estadías sin justificación en el Automóvil Club Argentino.
 - **Gastos operativos cuestionables:** alquiler de autos y camionetas a una empresa radicada en Tucumán, pese a que el servicio se presta en Capital Federal, facturación de una línea de Atención Covid 24 hs sin especificar el número de atenciones o llamadas, traslados de coches de subte a Córdoba para su mantenimiento en talleres privados de Benito Roggio Ferroindustrial.
 - **Falta de especificación en las facturas:** Cirion Technologies Argentina S.A. facturó en dólares por servicios no especificados y Visma Argentina S.A. cobró por un "Abono Legajos" sin aclarar su uso.
 - **Costos injustificados para los usuarios:** Se intentó incluir el costo de eliminación de asbesto como parte de la tarifa, cuando este gasto proviene de una mala decisión de compra previa de vagones contaminados. SBASE retiene ingresos de publicidad y alquileres dentro del subte, dejando que la empresa concesionaria dependa sólo de la tarifa al usuario y subsidios, lo que afecta el cálculo real de costos.

El fallo considera que estos **gastos distorsionan el cálculo de la tarifa** y que muchos de ellos **no deberían ser cubiertos por los usuarios**. Además, la **falta de transparencia en la documentación** dificulta el control de los costos por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos y la ciudadanía en general.

Luego del fallo de la justicia, los gastos irregulares e injustificados no se detuvieron. Se dio a conocer que Emova gastó 115 millones de pesos para contratar un “Servicio Integral de Gestión de Redes Sociales de Subterráneos de Buenos Aires” por 12 meses. Estamos hablando de casi 9 mil dólares mensuales para el manejo de las redes de la empresa. El CM más caro del mundo.

El servicio de subte es cada vez peor. No es una prioridad para el gobierno que cada vez más pasajeros utilicen el servicio, pese a sus incontables beneficios para el bien común. La cantidad de pasajes comprados por mes está en su peor momento. También empeoró la frecuencia. Menos de la mitad de las estaciones son accesibles para las personas con movilidad reducida y eso suponiendo que anden todos los ascensores, algo que como sabemos no ocurre con frecuencia. Los problemas en la prestación del servicio tienen una regularidad diaria. Cuando llueve hay goteras. Los matafuegos no están o no funcionan. Van a ser 7 años sin la inauguración de una nueva estación, algo inédito en la historia argentina. Sin embargo, el negocio para Roggio está garantizado.

Tránsito

El tránsito porteño es una pesadilla para la mayoría, pero es fuente de grandes negocios para un puñado de contratistas. Desde el estacionamiento medido otorgado a una empresa cercana a los Caputo a la concesión de las multas fotográficas a una asociación denunciada por corrupción. El sistema de acarreos, con cánones irrisorios y prórrogas de contrato injustificadas, merece directamente un apartado propio.

El **estacionamiento medido** fue entregado a la empresa **Mechp SRL** en unión transitoria con un socio español, la firma **Integra Parking**

Solutions. En su momento, la licitación había despertado polémicas, ya que con el nuevo sistema que vino a reemplazar a los viejos parquímetros, se pretendió en un primer momento extender de 3.500 plazas de estacionamientos regulados a 80.000, es decir, **¡23 veces más!** Algo que finalmente no sucedió, pese a que se sancionó una ley para habilitarlo.

El tema no solamente despertó interés por la desmedida ampliación que se buscó hacer de la cantidad de plazas. Es que la empresa **Mechp SRL**, según el periodista **Francisco Olivera** de La Nación¹¹ y numerosas publicaciones periodísticas de diferentes medios¹², está **asociada con la familia de Nicky Caputo**, el amigo del alma de Mauricio Macri, quien veremos repetido a lo largo y ancho de este libro, en diferentes rubros. Según este periodista, y pese a que los Caputo niegan el vínculo, “en el gobierno porteño admiten sin embargo la relación entre socios de la empresa adjudicataria y miembros de la familia Caputo”, aunque “se trata solo de lazos de amistad”.

Si bien esta unión transitoria presentó la propuesta más barata, otras empresas oferentes cuestionaron la licitación. Saúl Sued, de Cellopark, que salió segunda, sostuvo que el margen para el oferente según la propuesta es de -38 millones de pesos, es decir, **“alarmantemente negativo”**. Decidió **impugnar la licitación** ya que consideró que desde el punto de vista económico la **oferta es vil** y “está formulada **con fines de ganar la licitación y no de cumplir el contrato**”. La empresa que salió tercera, Bolt, no impugnó pero sí presentó una observación.

Ambas empresas también señalaron que Mechp SRL no sólo trabajaría a pérdida, sino que **no contaba con el capital requerido de 50 millones de pesos**.

Mechp SRL no sólo se vio beneficiada con este contrato, sino que obtuvo una **concesión que también generó polémicas**. Se trata de un predio de 5 mil m² en Palermo, por el que sólo pagarán un cánón de 3 mil dólares. A su vez, posee la concesión de diversas **playas de estacionamiento** en la Ciudad, como el playón subterráneo de Charcas, que va de Coronel Díaz a Vidt, con 400 metros de largo. El canon era equivalente al alquiler mensual de 30 cocheras, pese a tener

lugar para más de 300. También tienen la concesión de otro estacionamiento en Pasco al 1300, cuyo canon en 2023 era alrededor de 600 dólares mensuales, es decir, lo que vale el alquiler de un departamento en la Ciudad.

El periodista **Francisco Olivera** también realizó un sugerente comentario acerca del nombre de la empresa. Si reparamos en las iniciales de los socios Martínez de Hoz, Egozcue, Hermida y Porto, nos podemos dar cuenta que coincide con el nombre de la empresa (Mechp). **Sólo faltaría descubrir a qué obedece la letra C.**

En otro orden de cosas, debe hacerse una mención a la licitación del servicio de **multas fotográficas**. Fue otorgado a una unión transitoria entre Nec Argentina y CECAITRA, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Si bien la cámara es una asociación civil sin fines de lucro, ha recibido múltiples denuncias por corrupción a lo largo y ancho del país, donde tiene múltiples contratos con el Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. El Presidente de la cámara y su hijo son dueños de al menos 4 de las empresas miembro.

El 16 de julio de 2021, la Oficina Anticorrupción de la Nación, sostuvo que hubo irregularidades en la contratación de radares, en un caso donde estuvo vinculada CECAITRA. Es que el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, El Tahham, había trabajado hasta 2019 en la cámara y había decidido contratar para instalar radares y recibir asesoramiento tecnológico a la empresa Detectra, perteneciente a Mariano García, presidente de CECAITRA. En su momento, también había sido denunciada por motivos similares en el municipio de Morón.

Acarreo

El manejo del servicio de acarreo merece un apartado exclusivo, porque constituye un caso emblemático de cómo la gestión del Gobierno de la Ciudad ha privilegiado intereses privados por sobre el bien común, perpetuando **irregularidades durante más de dos décadas**. Dakota y BRD fueron las dos empresas que históricamente

operaron el servicio. En el año ¡1990! ganaron la licitación, que venció en... ¡2001! Tras ello, fue **prorrogada repetidamente sin nueva licitación** hasta el 2021. Durante ese período, las empresas lograron mantener su posición mediante acciones judiciales que bloquearon los intentos de regularizar las concesiones.

El negocio resultó **sumamente rentable para Dakota y BRD**, que abonaban un **canon mensual irrisorio de \$55.000** cada una, congelado desde 2014 a 2022, mientras el costo del acarreo aumentaba exponencialmente de \$350 a más de \$6.000. Es decir que cuando el canon se congeló, el precio del servicio del acarreo aumentó muy por encima del nivel de la inflación. **El negocio era redondo.** Según una investigación del portal Infobae¹³, en el año 2021 las empresas **facturaron 547 millones de pesos** (alrededor de 3 millones de dólares al tipo de cambio paralelo promedio de ese año) y aportaron sólo \$1.300.000. **Sólo el 0,2% de sus ingresos.** Un informe de la Auditoría General de la Ciudad presentado ese año, que analizó un período previo, sostuvo que la relación entre el cánon y los pagos a la empresa era “irrelevante”. Uno de los auditores, miembro de la Coalición Cívica, sostuvo que con **“media hora de trabajo pagan el canon mensual.”**

Como si todo esto fuera poco, el **Gobierno de la Ciudad cubría parte de los costos operativos** de estas empresas, financiando los salarios de los agentes de tránsito que acompañaban a las grúas, así como un adicional del 20% de los sueldos a los trabajadores de las concesionarias.

Cuando profundizamos sobre estas dos empresas, **Dakota y BRD**, encontramos una figurita repetida: sus negocios en la Ciudad se extienden más allá de un rubro en particular.

Marcelo Violante, “el Señor de las Grúas”, es el presidente y rostro visible de **Dakota**, tras suceder a su tío, el empresario Reinaldo Niella. Sin embargo, según mostró una investigación de Infobae¹⁴, su influencia en el sector no se limita a esta firma: en los últimos tres años, **otras dos empresas vinculadas a él han obtenido concesiones del Gobierno de la Ciudad.** En febrero de 2021, Violante fundó junto a su hermano Juan Ramón Violante la sociedad **Ragnarv SRL.** Apenas

cinco meses después, esta nueva empresa logró adjudicarse su primer contrato con el gobierno porteño: el alquiler de **cocheras para el Ministerio de Espacio Público** por un monto total de nueve millones de pesos. Ragnarv SRL también **intentó continuar con el negocio del estacionamiento medido**, un servicio que Dakota administró durante 31 años, pero no logró imponerse en la licitación realizada a finales del año pasado. No obstante, en marzo de ese año obtuvo otro contrato con la Ciudad: la explotación de la playa de **estacionamiento subterránea de la Plaza del Congreso**.

Marcelo Violante también resultó salpicado por el escándalo de Lago Escondido. A partir de la **filtración ilegal de chats del entonces Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'alessandro**, se dio a conocer una conversación con el titular de Dakota. Allí el empresario le preguntaba al funcionario si “le da para ofrecerle negocios a Horacio” (por el ex Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta). A lo que el funcionario le responde que sí. En otros chats, Violante se disculpaba ante D'alessandro porque “no pudo juntar todo” pero que “antes de fin de mes te integro el 100%”. Y le asegura que tiene sobres con “60 verdes” (en alusión a la moneda norteamericana), en “dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno”.

Otra empresa en la que **Dakota figura como accionista es Brewda, concesionaria de tres estacionamientos estratégicos** en el microcentro porteño. Uno de ellos está ubicado en Sarmiento 1537, debajo del Centro Cultural San Martín. Otro se encuentra en la Plaza Lavalle, mientras que el tercero está en Corrientes 436, plena city porteña. **Todas estas playas de estacionamiento operan bajo la marca Apart Car, perteneciente a Dakota.**

Pero el entramado empresarial no termina allí. En 2002, Dakota creó **Estuno S.A.** para expandir aún más su presencia en el sector. Actualmente, el grupo liderado por los Violante **administra 20 playas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires**. Según información oficial, balances corporativos y datos publicados por la empresa, en el pasado también gestionaron otros seis estacionamientos, entre ellos cuatro concesionados por la Corporación Puerto Madero.

Por su parte, **BRD**, la otra prestadora del servicio de acarreo, está actualmente presidida por Bernardo Marcelo Pérez, con Ricardo Chiantore como vicepresidente. Según la ya mencionada investigación de Mariel Fitz Patrick publicada por Infobae, ambos heredaron de sus padres la conducción de la firma, José Ricardo Chiantore y Bernardo Manuel Pérez, quienes aún conservan cargos como directores, junto a Carlos Alberto Tomé. Los Chiantore han estado en la mira de la AFIP desde 2014, cuando sus nombres aparecieron en la lista de 4.040 clientes argentinos con **cuentas en el HSBC de Suiza**, en el marco de una investigación por **presunta evasión fiscal**.

Retomando la historia reciente del mundo del acarreo en la Ciudad, finalmente en 2022, **a partir de presiones por parte de la oposición a la gestión porteña, se logró poner fin a este sistema irregular**. Desde la convocatoria a la licitación en 2022 a la fecha, la Ciudad se hizo cargo del sistema de grúas. El servicio de acarreo está gestionado por la empresa estatal AUSA, mientras que **los trabajadores de Dakota y BRD fueron recontractados por SBASE**, una empresa pública encargada de controlar la concesión del subte porteño. Actualmente, no se ha logrado volver a licitar el servicio.

Espacios verdes

El negocio del espacio público está en manos de muchas de las empresas que se repiten a lo largo y ancho del Estado en otros rubros, como la obra pública, las veredas, la poda de árboles e incluso el alumbrado. En el caso de esta contratación, la Ciudad se dividió en 24 zonas, dado que algunas comunas, como las 1, 4, 9, 12, 13 y 14 contemplan más de una zona asignada. Las empresas ganadoras ya venían trabajando en el mantenimiento del espacio público. La excepción es que dos habitué del negocio, en este caso conformaron uniones transitorias con otras empresas, un mecanismo muy practicado para que empresas sin experiencia puedan ingresar a la operación.

La adjudicación se realizó el 7 de febrero de 2025 por un monto de 227 mil millones de pesos y un plazo de 48 meses. Estamos hablando de un negocio de **más de 190 millones de dólares** que se reparten **8 empresas durante 4 años**.

Zona	Empresa	Monto en Pesos	Monto en USD
1 (Comuna 1)	INDALTEC S.A.	\$12.321.727.086	u\$s 10.319.704
2 (Comuna 1)	VERDE INTEGRAL S.A.	\$15.465.206	u\$s 12.952
3 (Comuna 2)	VIVERO CUCULO S.R.L.	\$7.129.294.531	u\$s 5.970.933
4 (Comuna 3 y 5)	ECOLOGÍA URBANA S.R.L.	\$5.783.506.966	u\$s 4.843.808
5 (Comuna 4)	ALGIERI S.A.	\$9.708.634.653	u\$s 8.131.185
6 (Comuna 4)	VIVERO CUCULO S.R.L.	\$7.614.586.042	u\$s 6.377.375
7 (Comuna 6)	MIICA SA	\$5.451.628.031	u\$s 4.565.853
8 (Comuna 7)	SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES	\$9.218.226.565	u\$s 7.720.458
9 (Comuna 8)	INDALTEC S.A.	\$8.693.999.032	u\$s 7.281.406
10 (Comuna 8)	VERDE INTEGRAL S.A.	\$5.691.997.652	u\$s 4.767.167
11 (Comuna 9)	MIICA SA	\$7.569.482.576	u\$s 6.339.600
12 (Comuna 9)	VIVERO CUCULO S.R.L.	\$7.519.405.534	u\$s 6.297.660
13 (Comuna 10)	MIICA SA	\$4.463.971.400	u\$s 3.738.670
14 (Comuna 11)	ALGIERI S.A.	\$3.292.052.237	u\$s 2.757.163

Zona	Empresa	Monto en Pesos	Monto en USD
15 (Comuna 12)	SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES	\$8.190.191.554	u\$s 6.859.457
16 (Comuna 12)	ECOLOGÍA URBANA S.R.L.	\$15.031.363.963	u\$s 12.589.082
17 (Comuna 13)	ALGIERI S.A.	\$3.066.890.139	u\$s 2.568.585
18 (Comuna 13)	SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES	\$11.408.339.967	u\$s 9.554.724
19 (Comuna 13)	ECOLOGÍA URBANA S.R.L.	\$8.997.431.126	u\$s 7.535.537
20 (Comuna 14)	MANTELECTRIC I.C.I.S.A.	\$7.999.862.850	u\$s 6.700.053
21 (Comuna 14)	MANTELECTRIC I.C.I.S.A.	\$14.841.665.292	u\$s 12.430.205
22 (Comuna 14)	MANTELECTRIC I.C.I.S.A.	\$23.032.466.485	u\$s 19.290.173
23 (Comuna 15)	INDALTEC S.A.	\$9.712.006.205	u\$s 8.134.009
24 (1 EMB)	VERDE INTEGRAL S.A.	\$7.673.753.250	u\$s 6.426.929

Poda de árboles

La gestión de Jorge Macri arrancó muy mal, como un botón de muestra de lo que continuaría durante todo el primer año de mandato. En diciembre de 2023 **un temporal dejó la Ciudad intransitable por la cantidad de árboles que cayeron**. Fueron alrededor de 700 los que por su caída generaron problemas de tránsito y destrozos. El Gobierno porteño demoró semanas, incluso meses, en remover por completo los troncos y ramas que se desparramaron por el territorio de Buenos Aires. Más allá de la ineptitud y la lentitud para iniciar la gestión de Jorge Macri, la ineficiencia es parte de un servicio que muchas veces puede parecer invisible, pero que se hace tangible cuando ocurren este tipo de tormentas, y es otro de los negocios del maxikiosco porteño los dueños de la ciudad: la poda de árboles.

El 19 octubre de 2023 se adjudicó la nueva licitación para “Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos”, por un plazo de 36 meses y casi 50 mil millones de pesos, **más de 56 millones de dólares de la fecha**¹⁵. Las empresas que se vieron beneficiadas fueron las siguientes:

Zona	Empresa	Monto en Pesos	Monto en USD
Comuna 1, 3 y 4	Ecología Urbana S.R.L.	\$ 7.216.183.878	u\$s 8.144.677
Comuna 2	Salvatori S.A. Parques y Jardines	\$ 858.120.450	u\$s 968.533
Comuna 5	Indaltec S.A.	\$ 1.825.307.580	u\$s 2.060.166
Comunas 6, 7 y 8, y Grupo 17	MIICA S.A.	\$ 8.499.518.860	u\$s 9.814.686
Comunas 9, 11 y 12	Verde Integral S.A.	\$ 14.293.302.330	u\$s 16.132.395
Comunas 10, 13, 14 y 15	Mantelectric I.C.I.S.A.	\$ 14.584.075.404	u\$s 1.713.712
Grupo 16	Algieri S.A.	\$ 727.009.885	u\$s 820.552

Los denominados “Grupo 16” y “Grupo 17” son zonas adicionales, creadas para que las empresas asignadas se encarguen de la poda para despeje de luminarias públicas y de las cámaras de seguridad y de fotomultas, en el territorio de toda la Ciudad.

Varias de las empresas son habituales contratistas de la Ciudad. Desde ya, los reyes del espacio público porteño, **Mantelectric**, pero también Indaltec, encargada de espacios verdes y mantenimiento de escuelas, **MIICA S.A.** de la familia Macchi, que ya estaba presente en el negocio de la poda con su empresa Casa Macchi S.A., también a cargo del mantenimiento de espacios verdes., Está **Salvatori**, con negocios en la obra pública, veredas y espacios verdes, siendo un caso similar al de **Algieri**, también presente en este negocio.

Luego del temporal, **especialistas responsabilizaron a estas empresas y al Gobierno de la Ciudad por la caída de los árboles,**

producto de la mala praxis y la poda indiscriminada. Según el especialista Carlos Roberto Anaya, presidente de la Asociación Civil de Arboricultura, en un nota con el portal de Infobae¹⁶, la poda indiscriminada de los árboles que se realiza en Buenos Aires impide el normal crecimiento de los árboles, los debilita y aumenta las posibilidades de su caída. **Señala que “son cortadores de árboles, no podadores”.**

Las polémicas en torno a la poda no son recientes ni empezaron producto del temporal. Las advertencias habían sido planteadas, aunque lamentablemente ignoradas. En 2021, la Justicia porteña había dado lugar a un amparo para frenar la poda indiscriminada, instando al Gobierno porteño y a las comunas a que detuvieran la poda hasta tanto no se implemente un sistema informático de acceso libre, público, gratuito que contemple todas las intervenciones de poda, unifique o reglamente pautas comunes para el cumplimiento de la actividad, y brinde información accesible acerca del censo de árboles y los planes de poda.

Entre los motivos de la denuncia se esgrimía que la poda nunca debería superar el 25% del follaje, y en la mayoría de los casos representa el 70%. Es que las empresas cobran por cantidad de podas. Si bien las cantidades son incluidas dentro de los objetivos del pliego, nunca se transparentaron los planes de podas y los objetivos de los mismos. Un negocio a costa no sólo de los bolsillos de los contribuyentes, sino de su seguridad y la de sus bienes.

Educación

El negocio del hambre en las escuelas

Lo que comen nuestros chicos en las escuelas de la Ciudad es una verdadera vergüenza. En diversas ocasiones ha tomado estado público por la pobreza nutricional de los alimentos, cuando no porque directamente es comida en mal estado. Incluso han llegado al extremo de **intoxicar a niños y niñas**. Sin embargo, pese a la calidad paupérrima de este servicio, estamos hablando de un contrato multimillonario para 18 empresas¹⁷.

Esto sucede a pesar de que la Ciudad cuenta con un Programa de Alimentación Escolar, a través del cual un equipo especializado debería brindar servicios alimentarios a los alumnos de las escuelas que dependen del GCBA. Además, este programa debería realizar diferentes acciones de Educación Alimentaria Nutricional con el fin de promover hábitos saludables en la comunidad educativa.

El servicio de viandas ejecutado por el Ministerio de Educación de la Ciudad consumió \$144.112.297.495 en el año 2024, **alrededor de 125 millones de dólares**¹⁸. Hablamos de un gasto multimillonario de la Ciudad que termina en un muy mal producto para los alumnos de las escuelas.

En el caso de los colegios secundarios, el principal problema identificado por los usuarios es la **mala calidad de las viandas y de los refrigerios**. Esta situación ha sido denunciada innumerable cantidad de veces por parte de estudiantes y padres y alcanzado un grado significativo de visibilidad en distintos medios de comunicación¹⁹.

Las empresas adjudicatarias son responsables de la compra de alimentos, la contratación de personal, la elaboración de los menús y el transporte de las comidas. En teoría, no pueden cambiar los menús sin justificación y están obligadas a respetar un calendario con gramajes y valores nutricionales establecidos. Sin embargo, en la práctica, los controles brillan por su ausencia y las irregularidades se multiplican.

El Artículo 35 del pliego de licitación, titulado “Control de Alimentos”, establece que la calidad de las viandas escolares debe verificarse mediante análisis de laboratorio. Sin embargo, el proceso de control presenta zonas grises que generan más dudas que certezas. En las plantas elaboradoras, ¿quién es realmente el responsable técnico de la toma de muestras y la presentación de resultados? ¿Son las propias empresas proveedoras quienes se supervisan a sí mismas, o existe un control efectivo por parte del Gobierno de la Ciudad? El pliego no brinda precisiones sobre los procedimientos de análisis bromatológico y control de gramaje, lo que deja un vacío preocupante: no hay certezas sobre si se cumple con

los estándares exigidos por la normativa vigente o si, una vez más, el sistema favorece la impunidad y la falta de transparencia.

En el año 2022, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires realizó un estudio que tuvo como objeto al Programa de “Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria”, para controlar sus aspectos ‘legales, técnicos y financieros’. Su alcance fue examinar la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de la adjudicación de alimentos Nro. 7192/1818 y LPU 21²⁰.

Este informe de auditoría expone una serie de **irregularidades gravísimas:**

- **No se publicaron** en el Boletín Oficial **32 resoluciones** del Ministerio de Educación que **modificaban partidas presupuestarias**.
- Se encontraron irregularidades en 13 pagos a proveedores.
- No hay constancias claras sobre cómo se adjudicaron los contratos a las empresas.
- El sistema de control es insuficiente: **la calidad de los alimentos depende del autocontrol de las propias concesionarias**.
- En el 27% de los casos auditados, las raciones de comida no cumplían con el gramaje estipulado. En 12 casos, el déficit de peso de los alimentos superaba el 30%.

La Defensoría del Pueblo también elaboró un informe en el que analizó los efectos de la implementación de las Pautas de Alimentación Saludable (PAS) y puntualmente del programa "Chau Paneras", una medida que eliminó el pan de los comedores escolares. Según el informe, las modificaciones implementadas por el PAS entre 2013 y 2019 resultaron fallidas. La deficiente aplicación del programa generó un impacto negativo en la comunidad educativa, en gran parte porque no se consideraron las distintas necesidades de cada distrito escolar. Además, la falta de un criterio nutricional adecuado en la selección de reemplazos para los alimentos eliminados redujo la cantidad final de comida servida en los platos. La conclusión es contundente: la cantidad y calidad de los alimentos no mejoró y las raciones siguen siendo insuficientes²¹.

Las empresas encargadas de este pésimo servicio son:

- Alimentos Integrados S.A.
- ARKINO S.A.
- BAGALA S.A.
- CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.
- CATERIND S.A.
- COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
- DASSAULT S.A.
- DIAZ VELEZ S.R.L.
- ENRIQUE TAVOLARO S.R.L.
- FRIENDS FOOD S.A.
- LAMERICH S.R.L.
- RODOLFO FERRAROTTI S.R.L.
- SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.
- SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING S.R.L.
- SERVIR'C S.A.
- SPATARO S.R.L.
- SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A.

La empresa **Lamerich** fue adjudicataria de la contratación, por un monto superior a los 3 millones de dólares, pese a que **dos años antes había intoxicado a un centenar de estudiantes porteños**. El primer caso en tomar estado público ocurrió en la escuela Ernesto Padilla de Caballito (N°14 D.E.7°), donde 42 chicos tuvieron vómitos, dolor de estómago, diarrea y hasta fiebre luego de haber almorzado en el establecimiento. Esa misma semana, en la escuela Úrsula Llamas de Lapuente (N°5 D.E.°2) de Palermo, otros 59 chicos terminaron intoxicados luego de un desayuno. En ambos casos la empresa proveedora era Lamerich. Estos casos, ocurridos en 2020, no la privaron de ser beneficiada en 2022 con un contrato millonario. **Otra demostración de que las empresas privadas no rinden cuentas ante nadie por la mala prestación de sus servicios. Pero eso sí, siempre cobran igual.**

Algunas de las empresas proveedoras tienen vínculos con el PRO de larga data. **Bagalá S.A.** es parte del **Grupo L**, que ingresó como contratista de la Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de María Eugenia Vidal. El grupo era un asiduo comensal en las cenas de

recaudación de fondos de fundaciones cercanas al PRO, según informes periodísticos del medio Infobae²². El representante legal de la empresa, Ricardo Antonio Orlando, es también accionista de otra de las empresas adjudicatarias de esta licitación, como **Alimentos Integrados S.A.** A su vez, la empresa Arkino S.A. es propiedad de la presidenta de la **Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio**, que nuclea a buena parte de las empresas que forman parte de esta licitación. **Todo queda entre conocidos.**

La ex-ministra de Educación Soledad Acuña incluyó a la Cámara dentro del Programa de Prácticas Laborales para estudiantes secundarios²³. Está presidida por María del Rosario Porcellini, una de las titulares de Arkino SA., su vice es Héctor Alfredo Orlando, de la alimenticia Bagala S.A., el Pro-Tesorero es Rubén Melul, a cargo de Lamerich SRL. También aparecen representantes de Carmelo Antonio Orrico SRL, Enrique Tavolaro SRL, Friends Food S.A., Servicios integrales de Alimentacion SA, Treggio SRL, Spataro SRL y Alfredo Grasso²⁴.

Entre las aportantes a campañas del PRO, o a fundaciones ligadas al partido, se encuentran **Carmelo Antonio Orrico SRL** (aportante de la fundación de Dietrich, ministro de Transporte en las gestiones macristas), **Díaz Velez SRL, Enrique Tavolaro SRL, Friends Food y Rodolfo Ferrarotti SRL.**

Centros de Primera Infancia: la tercerización de la estimulación temprana en niños.

La educación temprana es determinante sobre el crecimiento y la vida adulta de las personas. El desarrollo humano tiene un carácter eminentemente social: nuestro acervo genético no es suficiente para sobrevivir y menos aún para constituirnos como sujetos. Por eso, una política ambiciosa destinada al nivel inicial es imprescindible para expandir el horizonte de las personas, complementar las tareas de crianzas realizadas por las familias y, de esta manera, ampliar la experiencia social de su grupo de origen, enriqueciendo su mundo cultural.

Cuanto antes el niño, la niña y su familia formen parte de un programa que se desarrolle con criterios de calidad, mayores posibilidades tendrán de recorrer un camino con experiencias ricas, significativas y estimulantes que redunden positivamente en su desarrollo físico, social, emocional e intelectual. Una verdadera meritocracia se construye a partir de la movilidad ascendente y nuestra propuesta de desarrollar la educación en nivel inicial es una herramienta para construir equidad.

En su artículo 24, la Constitución Porteña asegura que la Ciudad tiene la “responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública (...) desde los 45 días de vida hasta el nivel superior”. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires año tras año **faltan miles de vacantes, la mayoría de ellas en el nivel inicial**. Esta cifra aumenta todos los años: 18 mil en 2018, 29 mil en 2019, 35 mil en 2020, 55 mil en 2021 y 56 mil en 2022.

La política pública que diseñó el Estado porteño para hacer frente a esta problemática fueron los **Centros de Primera Infancia (CPI)**, con los que terceriza un servicio que debería brindar directamente. Sin embargo, la Asesoría General Tutelar manifestó su desacuerdo con esta solución. La razón era clara: **los CPI no garantizaban el derecho a la educación de los niños y niñas más pobres, ya que no formaban parte del sistema educativo formal**. En lugar de ampliar el acceso a jardines de infantes públicos, el gobierno optó por una alternativa precarizada y tercerizada.

El programa fue establecido a través del **Decreto N° 306/09** y posteriormente modificado por la **Resolución 407/2013**. Según esta normativa, los CPI funcionan bajo un **modelo de “gestión asociada”**: el Gobierno de la Ciudad aporta financiamiento y supervisión a través del Ministerio de Desarrollo Social, mientras que las organizaciones de la sociedad civil se encargan de la gestión cotidiana y del trabajo técnico-profesional.

En la práctica, esto significa que el **Estado porteño delegó en terceros la responsabilidad de cuidar y educar a la primera infancia**, sin garantizar condiciones dignas ni salarios adecuados para los trabajadores. Así, en vez de construir más jardines públicos y asegurar vacantes en el sistema educativo, el gobierno creó un esquema que profundiza la desigualdad y desprotege a los niños y niñas que más lo necesitan. Los CPI brindan básicamente dos tipos de servicios: servicios de estimulación temprana (para fortalecer el desarrollo psicomotriz de niñas y niños) con equipos integrados por profesionales del trabajo social, la psicomotricidad y la psicopedagogía y el plan nutricional (para asegurar el desarrollo y promover hábitos alimentarios saludables) que contempla desayuno, almuerzo y merienda diseñados por nutricionistas.

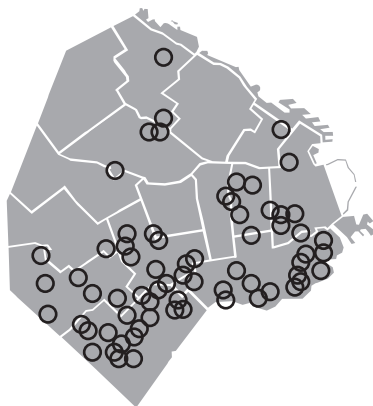
El problema es que esta política dejó a los CPI **funcionando en la absoluta precariedad**. No hay un estándar común de calidad ni reglas claras. **Cada organización define su propio proyecto educativo sin supervisión efectiva**. El resultado de esta política es una **atención desigual**: los CPI que cuentan con donaciones o apoyo externo pueden ofrecer mejores condiciones laborales y contratar más profesionales, mientras que otros apenas sobreviven con los fondos asignados. **Algunas organizaciones incluso se ven obligadas a inscribir más niños por sala para maximizar ingresos, lo que genera hacinamiento y afecta la calidad de la atención**.

Las condiciones laborales del personal son otro problema grave. La mayoría trabaja como monotributista, sin estabilidad ni derechos básicos como licencias por enfermedad o vacaciones. La alta rotación de docentes, consecuencia directa de la precarización, perjudica a los niños, ya que se pierde la continuidad en los vínculos, fundamental para el desarrollo en la primera infancia.

Las deficiencias edilicias también son alarmantes. Un informe de la **Defensoría del Pueblo** reveló que los CPI **no cuentan con habilitación**, presentan **problemas de accesibilidad**, **carecen de medidas de seguridad** adecuadas y tienen instalaciones deterioradas. En algunos casos, los espacios sanitarios se usan como depósitos de limpieza y hay filtraciones de agua que afectan las estructuras²⁵.

A su vez, los CPI están organizados, en su mayoría, por asociaciones civiles, **fundaciones y movimientos sociales, que no cuentan con la estructura necesaria** para llevar adelante el servicio. Estas organizaciones reciben una beca por cada niño y niña que se inscriben en cada sala. La beca se efectiviza mediante pagos mensuales. **No hay registros públicos de su monto.** Asimismo, el Gobierno de la Ciudad otorga por única vez un subsidio para adecuación edilicia y otro para equipamiento. Y anualmente, se puede solicitar un subsidio para mantenimiento. El monto de los tres subsidios no puede exceder el valor a otorgarse en concepto de beca y debe ajustarse a la capacidad máxima de vacantes que posea cada centro. Por otro lado, las tres comidas diarias también las garantiza el Estado.

Todo esto nos lleva a concluir en que la “solución” implementada por el Gobierno de la Ciudad no resolvió el problema de fondo, sino que profundizó la desigualdad. Mientras quienes pueden pagar acceden a vacantes en jardines privados, las familias con menos recursos se ven obligadas a recurrir a los Centros de Primera Infancia, una alternativa precarizada y fuera del sistema educativo formal. Esta brecha en el acceso a una educación temprana de calidad afecta especialmente a las infancias más vulnerables. La demanda social es clara: garantizar que el nivel inicial sea un verdadero espacio de igualdad de oportunidades, donde todos los niños y niñas, sin importar su origen o situación económica, puedan acceder a una educación digna.



Fuente: Ubicación de los CPIs. GCBA. Mapa disponible en <https://buenosaires.gov.ar/desarrollo-infantil/centros-de-primera-infancia>

¿A qué se debe que haya una concentración de CPIs en la zona sur de la ciudad? El programa de los CPI es un ejemplo más de cómo el Gobierno de la Ciudad utiliza **la tercerización para desentenderse de sus responsabilidades**. En lugar de garantizar educación y cuidado de calidad para la primera infancia en toda la Ciudad, pero **especialmente en la zona sur**, delega la tarea a organizaciones sin recursos suficientes, generando inequidades y exponiendo a miles de niños y trabajadores a condiciones inaceptables. Es urgente repensar este modelo y exigir que el Estado asuma su rol con la seriedad que la niñez merece.

Servicio de transporte escolar

Una vez más, ante la aparición de un problema, en lugar de generar una política pública para resolverlo, la gestión macrista opta por delegar en empresas privadas. Así como ante la falta de vacantes generó una política precaria y que profundiza las inequidades, como los CPI, de forma complementaria se contratan empresas para el traslado de los chicos de zona sur y barrios populares que no tienen vacantes hacia barrios donde sí las hay.

El servicio de transporte escolar gratuito es una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación de miles de niños y niñas de barrios vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires. Está destinado a estudiantes de nivel inicial y primario —y en algunos casos, secundario— que deben asistir a escuelas alejadas de sus hogares o que enfrentan serias dificultades para llegar a los establecimientos educativos. Sin este servicio, muchos alumnos simplemente no podrían ejercer su derecho a la educación.

Sin embargo, la cobertura de este servicio es insuficiente y deja a cientos de chicos en la incertidumbre. Según lo detallado en la Ley de Presupuesto Educativo 2025, el transporte escolar gratuito alcanza a poco más de 6.700 estudiantes de nivel inicial, primario, medio y adultos que residen en barrios vulnerables. En total, cubre 100 escuelas de nivel inicial y primario, 39 de educación especial, 4 de educación media y apenas 2 de adultos. A pesar de ser un derecho fundamental, la cantidad de escuelas y estudiantes beneficiados sigue siendo limitada en comparación con la necesidad real.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en un informe de 2022, reveló el listado de escuelas que cuentan con este servicio y los barrios desde donde se traslada a los alumnos: Villa 31, Villa 21-24 Zavaleta, Barrio Ramón Carrillo, Barrio Mugica, Villa 1-11-14, Villa 15 y Villa 20²⁷. Estos barrios comparten una realidad: la escasa oferta de escuelas públicas en la zona y la imposibilidad de muchas familias de acceder a instituciones privadas. Además, el contexto de inseguridad en estos barrios hace que el traslado de niños y niñas a la escuela sin transporte garantizado sea un riesgo para ellos y sus familias.

A pesar de la urgencia de este problema, el transporte escolar gratuito no es tratado como una prioridad por el Gobierno de la Ciudad. Esta política, enmarcada dentro del Programa de la Ley de Presupuesto N° 51 de Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria, es responsabilidad de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, particularmente de la Gerencia de Transporte Escolar insumió en el 2024 un gasto de \$32.094.850.480, es decir **casi 28 millones de dólares**.

Si bien el servicio de transporte escolar funciona de manera relativamente correcta, el verdadero problema radica en la forma en que el Gobierno de la Ciudad elige abordar la falta de vacantes en la zona sur. En lugar de construir más escuelas donde realmente se necesitan, obliga a cientos de niños y niñas a viajar largas distancias todos los días para acceder a su derecho básico: educación. Esta no es una solución, es una improvisación que castiga a los sectores más vulnerables, desplazándolos fuera de sus propios barrios en lugar de garantizarles una oferta educativa cercana y accesible.

Las empresas encargadas de este servicio son:

- INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A
- MANUEL GONZALEZ SUREDA
- TURISMO LA DELFINA S.R.L
- Jesica Natalia Gullifa Gonzalez
- Daiana Jesica Farias
- Eduardo Horacio Guarino
- VIA GRANDE S.R.L

El maquillaje de una Ciudad Bilingüe

Una de las promesas de campaña del actual Jefe de Gobierno Jorge Macri fue la necesidad de una educación bilingüe en las escuelas²⁸. Pero terminó siendo **una frase vacía**, una estrategia de marketing diseñada para simular modernización sin realizar cambios estructurales en el sistema educativo. Desde 2008, se anuncia la alfabetización en inglés a partir de primer grado, pero a más de una década de aquella promesa, los resultados han sido desastrosos. Lejos de garantizar una formación real en idiomas dentro de las escuelas públicas, la enseñanza del inglés quedó relegada a una oferta extracurricular insuficiente, con los Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros (CECIEs) colapsados por la falta de vacantes y sin una verdadera ampliación de la enseñanza de un segundo idioma en la currícula escolar.

En lugar de construir escuelas bilingües o reforzar el inglés en la educación pública con docentes capacitados y programas efectivos, el gobierno porteño optó por una solución superficial: **derivar la enseñanza del idioma a empresas privadas y ofrecer cursos virtuales en primaria y secundaria que no garantizan una formación sólida**. Esta política no sólo es ineficaz, sino que además profundiza la desigualdad: mientras que los estudiantes de sectores más acomodados acceden a institutos privados para aprender inglés, aquellos que dependen de la educación pública quedan en desventaja. Así, la tan anunciada educación bilingüe no es más que un espejismo, otro capítulo de la gestión basada en el marketing y la improvisación.

El mismo enfoque superficial se observa en la reciente implementación de **cursos virtuales de inglés** dirigidos a distintos sectores de la administración pública y el ámbito laboral. Personal de salud, tránsito, seguridad, gastronomía, comercio y turismo reciben capacitaciones en idioma bajo un esquema que prioriza la atención al turista por encima de la educación de la comunidad. En lugar de elevar el nivel de idiomas en las escuelas y garantizar igualdad de oportunidades para la población estudiantil, el gobierno centra sus esfuerzos en ofrecer formación exprés para trabajadores que interactúan con extranjeros, reforzando la idea de una ciudad pensada para el turismo y los negocios antes que para sus propios habitantes.

Lo más llamativo de esta cuestionable decisión es que se entregó un **contrato de 15 millones de dólares** para el desarrollo de una plataforma virtual a la empresa **Pearson Education**, cuyo representante legal en el país es el **Jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny**. A su vez, la esposa de Fernando Premoli, ex Secretario de Empleo de Mauricio Macri, forma parte del directorio.

El Jefe de Gabinete de Jorge Macri, antes fue también Director General de Cultura y Educación en PBA (símil ministerio), durante la explosión de una escuela en Moreno en la gestión de Vidal. Vivió en EEUU, donde fue vicepresidente de Dutko Worldwide, una **empresa “dedicada al tráfico de influencias”**.^{29 30} Además, tuvo una offshore llamada “Formar S.A.” con Diego Fernández y Esteban Bullrich.

El mantenimiento de las escuelas

A menudo, nos encontramos con noticias en los medios de algún desprendimiento de mampostería en un colegio, goteras, presencia de roedores. Ni hablar que quienes cursan en las escuelas públicas, o tienen hijos allí, saben de primera mano que buena parte de los establecimientos educativos de la Ciudad están llenos de problemas edilicios, desde falta de ventilación a problemas de funcionamiento en el equipamiento anti incendios.

Durante el 2024 el mantenimiento de edificios escolares en el marco del plan SIGMA (Sistema Global de Mantenimiento) requirió \$63.890.924.295, alrededor de **55 millones de dólares**³¹. A su vez, informes de la Auditoría General de la Ciudad han concluido que las empresas de mantenimiento incumplen con sus tareas, pero la facturan de igual manera por afuera como “tareas de obra de mantenimiento menor”. La AGC también determinó que no existen planos originales de muchos colegios, lo que por un lado, dificulta auditar el estado en que fueron recibidos los edificios por las empresas, y además imposibilita calcular los metros cuadrados sobre los que se calculan los costos.

Entre las empresas encargadas se encuentran las mismas que también tienen el mantenimiento de los hospitales. Y muchas de ellas son habituales contratistas de la obra pública, como MIG S.A. Encontramos también a los **principales jugadores del maxikiosco: empresa de la familia Caputo, el Grupo Roggio, Mantelectric, Indaltec**. Es un negocio por 48 meses de 46 mil millones de pesos que, al valor del dólar³² de la fecha, equivalen a 99 millones de dólares.

Comuna	Empresa	Adjudicación	Monto en pesos	Monto en dólares
Comuna 1	SES S.A.	24/5/2023	\$4.497.221.677	u\$s 9.734.246
Comuna 2	SES S.A.	24/5/2023	\$1.136.389.019	u\$s 2.459.716
Comuna 3	MIG S.A.	30/5/2023	\$3.623.124.701	u\$s 7.842.261
Comuna 4A	Indaltec S.A.	30/5/2023	\$2.621.062.541	u\$s 5.673.295
Comuna 4B	MIG S.A.	1/6/2023	\$3.040.576.054	u\$s 6.510.869
Comuna 5	MIG S.A.	1/6/2023	\$2.361.493.496	u\$s 5.056.731
Comuna 6	Indaltec S.A.	5/6/2023	\$2.565.928.598	u\$s 5.436.289
Comuna 7	SEYMA - Mantelectric (UTE)	22/6/2023	\$2.998.867.918	u\$s 6.221.717
Comuna 8A	Mejores Hospitales S.A.	1/6/2023	\$2.209.538.217	u\$s 4.731.345
Comuna 8B	Mejores Hospitales S.A.	5/6/2023	\$2.532.890.990	u\$s 5.366.294
Comuna 9	Indaltec S.A.	5/6/2023	\$1.408.348.085	u\$s 2.983.788
Comuna 10A	Mejores Hospitales S.A.	1/6/2023	\$1.267.951.294	u\$s 2.715.099
Comuna 10B	Sehos S.A.	30/5/2023	\$2.211.137.200	u\$s 4.786.011
Comuna 11	M. H. Construcciones y Servicios S.A.	1/6/2023	\$2.570.465.387	u\$s 5.504.208
Comuna 12	SEYMA - Mantelectric (UTE)	22/6/2023	\$3.022.638.706	u\$s 6.271.034
Comuna 13	M. H. Construcciones y Servicios S.A.	31/5/2023	\$3.195.180.604	u\$s 6.856.610
Comuna 14	Sehos S.A.	30/5/2023	\$2.688.350.860	u\$s 5.818.941
Comuna 15	SEYMA - Mantelectric (UTE)	22/6/2023	\$2.576.921.631	u\$s 5.346.310
TOTAL			\$46.528.086.987	u\$s 99.314.764

Salud

En materia sanitaria, el maxikosco tiene una cantidad importante de productos para despachar. Es que prácticamente todo lo que se encuentra dentro de un hospital está a cargo de una empresa privada. Al igual que en los colegios, el mantenimiento y el servicio alimentario son responsabilidades de los contratistas. Pero incluso también el servicio de lavandería, la recolección de residuos patogénicos... ¡hasta la aparatología médica! Ni los aparatos son de los hospitales, sino que son alquilados a empresas.

Mantenimiento de hospitales

Las mismas empresas encargadas de mantener las escuelas son las encargadas de mantener los hospitales. Se agregan algunas, como Lesko (también presente en el negocio del alumbrado público) y la UTE Dalkia - Constructora Lanusse. En el caso de estas empresas, se les viene prorrogando una licitación que data desde 2015 y que venció en 2019. Es decir, **sin licitar, hace 10 años las mismas empresas controlan el mismo negocio**. Debido a que en ese momento todavía no existía el Buenos Aires Compra, no pudimos acceder a los datos acerca del costo de esta contratación. Porque además, como se dijo, se la viene prorrogando sistemáticamente.

HOSPITALES

EMPRESAS

Hospital Fernández, Hospital Borda,
Hospital Ramón Sardá, Hospital Tobar García

MIG S.A.

Centro de Salud Mental N° 3 Dr. A. Ameghino,
Hosp. Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano,
Hospital Municipal de Odontología Dr. J. Dueñas,
Hospital Dr. E. Tornú, Hospital Dr. J.M. Ramos Mejía.

SES SA

17 Centros de Salud y Acción Comunitaria,
Hospital Argerich, Zubizarreta, Vélez Sarsfield,
Quinquela Martín y Santa Lucía.

SEHOS S.A.

Hospital Gral. de Agudos Ignacio Pirovano,
Hospital Oncológico María Curie, Hospital
de Quemados, Hospital de Emergencias
Psiquiátricas Alvear, Hospital Odontológico
Dr. Ramón Carrillo, Hospital J. Borda (en UT),
Hospital Tobar García (en UT), Hospital
Gral. de Niños Pedro de Elizalde.

MH Construcciones y Servicios S.A

HOSPITALES**EMPRESAS**

Hospital Gutiérrez, el Pasteur, el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) y del María Ferrer.

MEJORES HOSPITALES S.A

Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero

LESKO S.A.C.I.F.I.A

Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia y Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand"

SEYMA - Mantelectric I.C.I.S.A.

Servicio alimentario en hospitales

Las empresas encargadas de alimentar a nuestros enfermos son las mismas que brindan el escandaloso servicio de viandas en las escuelas porteñas. De las 9 empresas que mal alimentan a los pacientes, 6 también mal alimentan a los estudiantes.

La licitación fue adjudicada el 14 de abril de 2023 por un plazo de 48 meses. En dólares, estamos hablando de un negocio de **80 millones de dólares**.

Empresa	Zonas / Hospitales a cargo	Monto en Pesos	Monto en USD
Arkino S.A.	Hospital Moyano y Hospital Elizalde	\$3.965.197.696	u\$s 9.962.808
Bagala S.A.	Hospital Muñiz, Instituto del Transplante y Base Operativa SAME Monasterio	\$1.788.939.473	u\$s 4.494.822
Compañía Alimentaria Nacional S.A.	Hospital Pirovano, IREP, Hospital Piñero, Hospital del Quemado, Hospital Álvarez, Hogar Rodríguez-Viamonte	\$5.752.415.755	u\$s 14.453.305
Compañía Integral de Alimentos S.A.	Hogar San Martín y Hospital Rawson	\$1.478.593.785	u\$s 3.715.059

Empresa	Zonas / Hospitales a cargo	Monto en Pesos	Monto en USD
Dassault S.A.	Hospital Rivadavia y Hospital Tornú	\$1.778.328.458	u\$s 4.468.161
Friends Food S.A.	Hospital Alvear y Hospital Rocca, Centro Ameghino, Hospital Lagleyze, Hospital Vélez Sarsfield, Hospital Zubizarreta	\$2.160.438.360	u\$s 5.428.237
Luis y Gomez S.A.	Hospital Ramos Mejía, Hospital Fernández, Hospital Argerich, Hospital Gutiérrez, Hospital Durand	\$7.916.915.487	u\$s 19.891.747
Servicios Integrales de Alimentación S.A.	Hospital Borda, Hospital Tobar García, Residencia Warnes, Gorriti, Avellaneda, Nueva Pompeya, San Juan, Pedro Goyena, Alberdi, Alvarez Thomas, Hospital Santojanni, Aspiración Grierson, Hospital Marie Curie, Hospital Penna, Hospital Sardá.	\$6.267.378.368	u\$s 15.747.181
Teylem SA	Hospital Udaondo, Hospital Santa Lucía, Hospital Ferrer.	\$895.554.619	u\$s 2.250.137
	TOTAL	\$32.003.762.005	u\$s 80.411.462

Recordemos que Arkino es la empresa de la presidenta de la Cámara, que es la que controla casi en su totalidad el negocio. También está presente aquí la empresa Bagala, vinculada a la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires.

La lavandería privada

En la actualidad, los hospitales no se encargan ni siquiera de limpiar sus sábanas. Para eso, contratan a tres empresas que se dividen las 5 zonas en las que se agrupan los centros de salud de la Ciudad. Lavadero Anca tiene a su cargo las zonas 1 y 5 y Tex Care las 2 y 4, mientras que el Lavadero El Lucero, la 3.

La contratación tiene un plazo de 24 meses a contar desde su adjudicación en marzo de 2025. En dos años, embolsarán 23 millones de dólares por lavar la ropa.

Empresa	Monto en Pesos	Monto en USD
Lavadero ANCA S.A.	\$11.687.389.100	u\$s 9.463.472
Tex Care Argentina S.A.	\$12.488.609.700	u\$s 10.112.234
Lavadero El Lucero S.R.L.	\$4.683.726.140	u\$s 3.792.490
Total	\$28.859.724.940	u\$s 23.368.198

Equipos y aparatos alquilados

En este apartado sobre salud hemos narrado apenas una muestra de todas las cuestiones que están privatizadas dentro de un hospital. Pero, para finalizar, y en modo ilustrativo, vamos a contar algo que es muy difícil de imaginar: ni siquiera los equipos y aparatos médicos que se encuentran dentro del hospital son públicos, sino que son alquilados a empresas.

Sólo en 2024 se alquilaron equipos por 400 millones de pesos, resaltando entre las empresas contratistas Chirugia S.A., que fue adjudicada, junto a otras empresas, en contratos por 341 millones. Por 288 millones también fue beneficiada ORL Med S.A.

Nombre del proceso	Hospital	Monto	Empresas		
Neurocirugía - Alquiler de monitoreos, neuroendoscopio y adq. de insumos	Htal. Juan A. Fernandez	\$ 28.928.883	ORL MED S.A	TÉCNICAS MÍNIMO INVASIVAS S.A	MTG GROUP S.R.L.
Adquisición de Insumos para cirugía y Alquiler de Equipo	Htal. Ricardo Gutierrez	\$ 12.020.200	CHIRUGIA S.A	CORPO MEDICA S.A.	
Alquiler de equipos para cirugía	Htal. Ricardo Gutierrez	\$ 70.805.000	CHIRUGIA S.A	CORPO MEDICA S.A.	TÉCNICAS MÍNIMO INVASIVAS S.A.
Adquisición de insumos para cirugía y alquiler de neuroendoscopio	Htal. Ricardo Gutierrez	\$ 19.226.600	CORPO MEDICA S.A.	OSTEOMEDIC GROUP S.R.L.	
Alquiler de equipo y adquisición de miniplacas para neurocirugía.	Htal. Ignacio Pirovano	\$ 5.500.000	BIOX S.A.	ORL MED S.A.	
Alquiler de neuronavegador y de doppler.	Htal. Ignacio Pirovano	\$ 1.860.000	CORPO MEDICA S.A.	MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.	
Alquiler de equipos	Htal. Ignacio Pirovano	\$ 3.500.000	CHIRUGIA S.A	MEDTRONIC LATIN AMERICA INC.	TÉCNICAS MÍNIMO INVASIVAS S.A.
Alquileres de equipos de neurocirugía - Neurocirugía	Htal. José M. Ramos Mejía	\$ 254.480.000	CHIRUGIA S.A	Kinemin SA	ORL MED S.A.
Serv. de alquiler de aspirador ultrasónico y doppler intraoperatorio Neurocirugía	Htal. Bernardino Rivadavia	\$ 700.000	CHIRUGIA S.A	ORL MED S.A.	
Alquiler de mochila de oxígeno, concentrador, nebulizador - Servicio de neumonología	Htal. Bernardino Rivadavia	\$ 1.980.000	MARK SRL	OXY NET S.A.	
Servicio alquiler mochila oxígeno, concentrador y nebulizador	Htal. Bernardino Rivadavia	\$ 1.537.500	MARK SRL	OXY NET S.A.	

Seguridad

La seguridad pública no parece ser una prioridad en la Ciudad. Mientras **aumentan índices delictivos** y vivimos frecuentemente la **fuga de presos en diferentes barrios porteños**, el gobierno prioriza los spots publicitarios y las declaraciones por redes sociales, cambia funcionarios y policías, pero no gestiona.

No existe conducción política de la seguridad. Los ministros del macrismo renuncian recurrentemente por escándalos tales como un fallido operativo de ingreso de un plantel de fútbol a un estadio, el caso Lago Escondido con el entonces ministro involucrado o el viaje del siguiente ministro a mirar un torneo de tenis en los EEUU, a 4 meses de haber asumido y en el medio de una crisis de seguridad. Actualmente, y como muestra de la importancia que le da el gobierno actual a la cuestión, la Ciudad tiene un Ministro de Seguridad que no tiene antecedentes ni experiencia alguna en la materia.

La desidia en la gestión tiene consecuencias en la vida de las personas. No da lo mismo que haya o que no haya política de seguridad. Si bien aún no contamos con datos oficiales del año 2024, donde la sensación es que la situación empeoró, las cifras del 2023 dan cuenta de aumentos alarmantes en los índices delictivos que ponen de manifiesto la ausencia de gestión y conducción política: se registró un 17% más de robos en general, un 20% más de robo de autos y un 28% más de robo de motocicletas, en lugares que se repiten año tras año. Según las estadísticas oficiales de Nación, la Ciudad es el distrito con la peor tasa de robos y hurtos de todo el país. Y la mayoría de los homicidios dolosos siguen ocurriendo en las mismas comunas del sur de la ciudad: la 1, la 4, la 7 y la 8. Además, la presencia de mercados ilegales de drogas, autopartes, electrónica, joyas, cambio de moneda extranjera y trata persiste en los mismos lugares de siempre.

Un símbolo de la negligencia del PRO en materia de seguridad es la **fuga sistemática de presos** en las comisarías y alcaldías de la Ciudad. **Todos los vecinos tenemos una cárcel a pocas cuadras de nuestra casa.** Un riesgo latente para nuestra seguridad que a menudo no es sólo una amenaza potencial. Es que la falta de políticas

públicas del gobierno porteño han llevado a una sobrepoblación de detenidos en lugares dónde no tendrían por qué estar. **Desde que asumió la Jefatura de Gobierno, hace 14 meses³³, hubo 13 fugas en las que escaparon 73 detenidos.**

- El 4 de marzo de 2024, dos detenidos se escaparon durante la madrugada de la Comisaría Vecinal 15B, en Villa Crespo.
- El 31 de marzo de 2024, en la Alcaldía N° 1 de San Telmo, en Perú al 1050 (Interior Alcaldía CC1 Quinquies), se fugaron nueve detenidos.
- El 1 de abril de 2024, en la alcaldía 3A, ubicada en Lavalle al 2625 (Balvanera), dos presos se escaparon tras cortar la reja de uno de los calabozos.
- El 8 de abril de 2024, en la alcaldía ubicada en la avenida Avellaneda al 1500, la Comisaría Comunal 6 (Caballito), se fugaron 4 presos.
- El 15 de abril de 2024, en la Comisaría Vecinal 12C (Juramento 4367, entre Donado y Mariano Acha, frente a la Plaza Zapiola), se fugaron un detenido por robo y otro que había sido arrestado por portación de arma.
- El 8 de agosto de 2024, en la Alcaldía CC 4 (Quilmes al 456), se fugaron otros cuatro detenidos.
- El 12 y 13 de octubre de 2024 se fugaron Comisaría Vecinal 4B, en Barracas, se fugaron 7 detenidos.
- El sábado 23 de noviembre, se fugaron 11 personas de la Alcaldía 4 Bis.
- El 30 de noviembre de 2024 hubo una fuga de dos presos del Centro de Contraventores de Nueva Pompeya. Lo hicieron, según la información oficial, forzando una reja.
- El martes 23 de diciembre 2024 se desarrolló la fuga masiva de 17 presos de la Alcaldía 9 de Liniers (calle Gana al 400).
- El domingo 9 de febrero de 2025 se escaparon 6 detenidos en la Alcaldía 6A Anexo A de Caballito (Av. Díaz Vélez al 5100) luego de reducir, maniatar y robarle el teléfono al Jefe de Servicio.
- El domingo 16 de febrero de 2025 se fugó un detenido de la Comisaría Vecinal 1D, ubicada en Lavalle al 400, entre Reconquista y San Martín
- El martes 18 de febrero de 2025 se fugaron otros 6 detenidos de la Comisaría 3A, ubicada en Lavalle al 2600, en el barrio de Balvanera.

La función de las alcaidías y las comisarías de la Policía de la Ciudad, de acuerdo a la normativa vigente, no es convertirse en cárceles barriales, sino que deberían cumplir la exclusiva función de tener alojadas a aquellas personas sospechadas de cometer un delito cuya situación procesal debe ser resuelta. En otras palabras, estamos diciendo que esas personas deben y pueden ser alojadas en esos establecimientos hasta que un juez decida si, hasta tanto se resuelva el caso en un juicio oral y público, la persona va a transitar el proceso en libertad o presa.

En este escenario distópico donde tenemos presos fugándose en numerosos barrios porteños hace falta aclarar lo obvio: la función de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es garantizar la seguridad ciudadana, su función principal es prevenir, disuadir e investigar el delito. **No forma parte de las funciones de la Policía de la Ciudad el control permanente de personas que se encuentran detenidas** a disposición de los jueces; para eso existen los servicios penitenciarios. Pero la Ciudad no tiene un servicio penitenciario propio, ni una ley de ejecución penal propia, ni una cárcel propia.

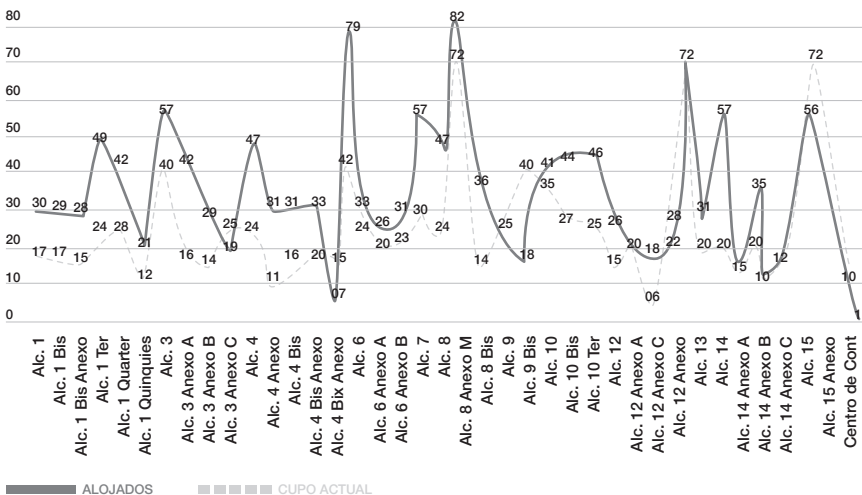
Unos **3 mil policías cumplen funciones penitenciarias en alcaidías y comisarías**. Esto supone **menos presencia de personal policial en la calle** y un **mayor riesgo para el personal policial** (que fue formado con una perspectiva de prevención e investigación del delito y no como personal penitenciario). **A esto se suman 5.060 policías afectados a consignas policiales**, según la información provista por el Jefe de Gabinete de Ministros en su visita semestral a la Legislatura Porteña.

Lugares que están pensados para alojar temporalmente a personas investigadas de cometer un delito terminan convirtiéndose en el alojamiento sostenido (poco más de 5 meses en promedio), lo que implica un **mayor riesgo para los vecinos que viven cerca de las comisarías y de las alcaidías**. Tan caótica es la situación que hay personas condenadas que se encuentran cumpliendo su pena en una comisaría u alcaidía, en vez de hacerlo en un penal. En cuanto a la situación procesal, **el 63.7% ya se encontraba transitando una prisión preventiva y el 18,5%, cumpliendo una condena**.

De acuerdo al informe más reciente de la Procuración Penitenciaria de la Nación³⁴ (organismo que se ocupa de elaborar informes periódicos respecto a las personas privadas de su libertad), al 31 de diciembre de 2024, **2.066 personas se encontraban alojadas en lugares de alojamiento pertenecientes a la Policía de la Ciudad** (40 alcaldías, Centro de Contraventores y 26 comisarías vecinales).

Fuerza policial o de seguridad	Cantidad de alojados	Lugares de alojamiento
Policía de la Ciudad	2066	En 40 alcaldías, el Centro de Contraventores, 26 Comisarías Vecinales y en “espera de alojamiento”.

El cupo ideal en las **alcaldías** es de 1.009 personas. Al 31 de diciembre, tenían un total de 1.438 personas alojadas, lo que implica una **sobrepoblación de 429 personas**. El caso más impactante es el de la **Alcaldía 4 bis anexo modular**, que cuenta con una **capacidad de 42 internos y tenía 79 personas alojadas**, es decir, **casi el doble** de su cupo.



En cuanto a las **comisarías** de la fuerza local, se registró una **sobrepoblación de 203 personas, casi el doble de lo permitido** (265 plazas de alojamiento y 468 personas efectivamente alojadas).

La Ciudad debería hacerse cargo de este problema construyendo una cárcel propia que aún adeuda. La excusa del macrismo fue, como costumbre, la quita de la coparticipación. Sin embargo, entre los años 2018 y 2019 el ejecutivo nacional aportó 60 millones de dólares para su construcción. La plata estaba... más aún, las obras se paralizaron en el mes de marzo de 2020, seis meses antes del decreto que redujo la coparticipación para la Ciudad.

En el presupuesto ejecutado del año 2024 se evidencia que nunca fue prioridad terminar la cárcel para Jorge Macri. Mientras el presupuesto sancionado por la Legislatura mandaba a invertir casi \$30 mil millones en la construcción de Marcos Paz, el Ejecutivo porteño invirtió poco más de \$11.416 millones. Una ejecución de apenas el 39%.

No sólo estamos frente a idas y vueltas normativas con consecuencias en la seguridad pública, sino que **el Jefe de Gobierno parece no tomar conciencia del problema de las fugas**. En lugar de hacerse cargo de la finalización de la cárcel, contrata consultorías, como la preadjudicada el 10 de enero del 2025 para un “Servicio de gerenciamiento para el plan de obras del Complejo Penitenciario Federal VII” por un monto de 1.965.040.000 pesos, **más de 1 millón 600 mil dólares**. Nuevamente, al igual que en la urbanización de la Villa 31, encontramos el esquema de **consultoría externa con el que el PRO favorece a sus empresas amigas**.

Quien está a cargo de terminar de construir la cárcel que debería aliviar las comisarias porteñas es también una histórica constructora muy afín al PRO: **CRIBA S.A.** Con un contrato de 96.984.788.780 pesos, **más de 84 millones de dólares**, la empresa ligada al macrismo y la obra pública en CABA desde los orígenes del partido amarillo tiene en su activo, por decisión de Jorge Macri, una de las obras más importantes de 2025 para la Ciudad. Según una investigación periodística del diario La Nación³⁵, entre 2009 y 2022, la empresa fue **una de las mayores beneficiarias de las adjudicaciones de obra pública: obtuvo 8 contratos por más de 187 millones de dólares**. La empresa figura también entre las **aportantes a campañas electorales** del macrismo.

El Gobierno porteño adeuda una cárcel que dé respuesta estructural al problema de la fuga de presos en la Ciudad. Pero como nos tiene acostumbrado, ante la ausencia de políticas públicas efectivas, decide contratar una empresa para poner un parche momentáneo. Parches que, muchas veces, se convierten en políticas permanentes. Así es cómo, para resolver precariamente la sobrepoblación en comisarías, se dispuso la instalación de módulos carcelarios. Luego de las aulas container, en la Ciudad llegaron las celdas container.

A partir de nuestra investigación, no pudimos dar con la contratación de estos módulos. Al menos, de una licitación destinada específicamente al uso de módulos para alojar detenidos. Si bien es razonable que, debido a la sensibilidad del tema, no debería publicarse documentación relativa como son los planos y especificaciones técnicas, podría iniciarse un proceso con documentos adjuntos reservados. Sin embargo, pudimos encontrar que el 20 de marzo de 2024 se adjudicó el proceso 623-0945-LPU23 por 467 millones de pesos; el cual tiene como objeto un **"Servicio de Alquiler de Módulos de Oficina y Afines"**; realizado por la Dirección General de Compras dependiente de Jefatura de Gobierno para proveer de ese servicio a todas las áreas de gobierno, **sin especificar ningún destino en particular.**

Unas semanas después, el 2 de mayo de 2024 el Jefe de Gobierno Jorge Macri **presentó los módulos destinados a cárceles container.** Cuando se ven las imágenes del anuncio oficial, se puede observar claramente que los container pertenecen a la firma **Ecosan.** Esta firma fue **una de las dos adjudicatarias** (la otra empresa es Basani) del proceso mencionado del **20 de marzo.** ¿Dicha adjudicación fue para las cárceles container? ¿Por qué se esconde su destino? ¿Por qué no existe información acerca de la contratación de módulos para las cárceles? De mínima, falta mucha transparencia en la contratación de una respuesta precaria para un problema muy complejo.

La seguridad de los porteños sirvió también como excusa de un negocio familiar. Nosotros siempre sostuvimos que las **armas no letales** son un recurso válido, como herramienta disuasiva,

minimizando el uso de la violencia pública. Sin embargo, la adquisición de 1.500 pistolas no letales a la empresa **Byrna** despertó muchas dudas. La empresa es una firma sudafricana, que en Argentina se asoció con Bersa, una empresa nacional proveedora hace muchos años de las fuerzas de seguridad.

La curiosidad es que en enero de 2023 ingresó a su directorio **Patricio García Moritán, hermano de Roberto García Moritán**, quien unos meses después bajó su candidatura a Jefe de Gobierno, para luego ingresar al Ejecutivo porteño como Ministro. ¿El acuerdo para bajarse incluyó un trueque por cargos y negocios? En febrero de ese año, Roberto García Moritán padre, ex diplomático argentino, había promocionado las pistolas en una columna del diario Clarín³⁶, donde es asiduo columnista. ¿Un negocio para toda la familia? La adjudicación se realizó en julio de 2023, apenas 17 días después de abrirse la licitación, por un monto de 180 millones de pesos, resultando uno de los contratos más importantes de la historia de la compañía.

Pese a este contexto donde se deteriora la seguridad ciudadana, en lugar de tomar las medidas necesarias para llevar adelante una reducción consistente y permanente del delito, las prioridades del Gobierno de Juntos por el Cambio fueron distintas. Por citar un ejemplo, el 24 de septiembre de 2024 contrataron el “Servicio de grúas de acarreo con destino a la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima”, adjudicado a ESCALUM INVESTMENT S.A., por un monto de 1.895.999.970 pesos (el equivalente a más de un millón y medio de dólares) y una duración de 24 meses.

Ahora bien, ¿por qué el Estado contrata una empresa de acarreos cuando está demostrado que puede hacerlo él mismo, como de hecho hace actualmente con el acarreo de autos que cometen infracciones en la vía pública? En este mismo libro, contamos cómo durante décadas el sistema de acarreos fue un negociado que tuvo que cortarse por la presión de nuestra fuerza política. Gracias a eso, dejó de ser un suculento contrato para dos empresas y pasó a encargarse la administración pública. Sin embargo, y **pese a que el Estado ya lo hace, decide contratar una empresa en el caso de los autos judicializados.**

Quizás la respuesta a esta pregunta radique en que se trata de una empresa muy vinculada a la gestión porteña. En el año 2015 fue contratada por la Agencia Ambiental para el “Servicio traslado Punto Verde Móvil” y ya en el 2022 resultó adjudicada para proveer el “Servicio de grúas de acarreo con destino a la Policía de la Ciudad”. Este último contrato, a su vez, obtuvo una ampliación y una prórroga. Según investigaciones periodísticas³⁷, el 98,7% del capital social de ESCALUM INVESTMENT S.A. estaba en manos de INVHORA S.A., que **tenía como presidente a Horacio Paolini, un hombre estrechamente ligado a Mauricio Macri y Daniel Angelici** y partícipe de sucesivas comisiones directivas de sus gestiones en Boca.

ESCALUM INVESTMENT S.A. no es una empresa desconocida por el ex intendente de Vicente Lopez y actual Jefe de Gobierno Jorge Macri, dado que fue adjudicataria del servicio de acarreo en el municipio que gobernó el primo de Mauricio. Puede que cambie de distrito, pero no las mañas.

Otro proveedor conocido para el PRO que está en proceso de contratación por el Ministro Wolf es **MIAVASA S.A.**, empresa largamente conocida y detallada en diversos informes, notas periodísticas y en este mismo libro. La histórica proveedora del PRO para obras de todo tipo fue preadjudicada el 29 de enero de 2025 **por 200 millones de pesos para la remodelación de la Planta Baja del Ministerio de Seguridad.**

CAPÍTULO 2

NEGOCIO INMOBILIARIO

La Ciudad en venta

La Ciudad de Buenos Aires está siendo exprimida por los negocios de los amigos del poder. La prioridad es el negociado inmobiliario de un grupo pequeño, cuando debería ser al revés: la inversión del negocio inmobiliario debería ir detrás de la planificación democrática de la Ciudad, en función del bien común.

El oficialismo **consagró el negociado inmobiliario en sus códigos urbanísticos, con el remate de las tierras públicas, las excepciones urbanísticas y las subastas de inmuebles.** También modificando y orientando las normativas que planifican la urbanización hacia la rentabilidad privada, en lugar de satisfacer la demanda de techo digno de la población.

El **código urbanístico** del 2018 tuvo que ser rápidamente modificado por el repudio generalizado de la sociedad, pero el nuevo, más allá de algunas mejoras incorporadas por la oposición, persigue un objetivo similar: incrementar la rentabilidad de los grandes desarrolladores, aumentando la construcción especulativa en la Ciudad.

Como con los códigos no siempre alcanzaba, también recurrieron a la Legislatura Porteña para, a través de los llamados **convenios urbanísticos**, otorgar excepciones que aumentaran la constructividad permitida en determinadas parcelas. De esta manera, los desarrolladores lograron aumentar la rentabilidad de sus terrenos a partir de una simple ley. A cambio de semejante favor, pagaban una suma de dólares como compensación. Funciona literalmente como lo estamos contando: se vende normativa a la carta, a pedido de los grandes jugadores del negociado inmobiliario.

El maxikiosco tiene también dentro de su variada oferta en la góndola inmobiliaria el **remate de tierras públicas**. El Estado ha rematado cientos de hectáreas en la Ciudad, que se vendieron destinadas a realizar negociados inmobiliarios, aunque podrían haber tenido como finalidad otros objetivos vinculados al bien común, como parques, el deporte, la cultura, vivienda social, etc. En muchos casos la venta resultó muy cuestionable, no sólo por el desprendimiento de terrenos públicos pertenecientes a todos los porteños sino también por los valores a los que se realizó, en numerosos casos muy por debajo del precio de mercado. Similar situación ocurre con inmuebles públicos, muchos de ellos obtenidos por herencias vacantes, que el Estado remata a precio vil, y que podrían ir a conformar un parque público de viviendas para alquiler.

Por último, y para terminar de abrochar el negocio, muchas veces **la Ciudad invierte recursos públicos para poner en valor las zonas donde van a desarrollarse negociados inmobiliarios**. Una política paradigmática es la de distritos económicos. Vendida como una herramienta de desarrollo productivo, más bien fue utilizada para que las empresas se mudaran de un barrio a otro. Estas empresas reciben beneficios fiscales por hacerlo, con un costo oneroso para las arcas públicas. Pero además, el Estado aporta recursos adicionales invirtiendo en infraestructura en la zona. El caso más iluminador es el del distrito tecnológico de Parque Patricios, donde el Estado invirtió mucho en mejorar el área, llevando el subte y edificios gubernamentales. Pero la misma lógica se reproduce en muchos de los terrenos vendidos, donde el macrismo además de entregar las tierras invierte para poner en valor la zona.

Cuando hablamos de “grandes desarrolladores” no estamos usando un eufemismo amarillista para generar sensacionalismo. Estamos haciendo alusión a **un mercado que se encuentra altamente concentrado**. Además de los grandes actores que mencionaremos más adelante, como Werthein, Constantini o Elsztain, existen desarrolladores inmobiliarios presentes en muchas de las obras de la Ciudad. Sin embargo, debe hacerse mención a un actor en particular que genera muchas dudas, BMA.

BMA (Bridas - Miani - Anger) es un estudio que suscitó que

numerosos desarrolladores comenzaran a elevar la voz, debido a las fuertes dudas que generaba la casualidad de que muchísimos proyectos, de desarrolladoras diversas, siempre la encontrarán como asociada. A su vez, la suspicacia era despertada por el vínculo estrecho entre este estudio y el ex Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. La relación directa entre BMA y el Jefe de Gobierno permitían inferir que el poder político ya no se contentaba con “recaudar o morder de un negocio ajeno”: a partir de la 3° gestión del PRO se implementa una estrategia más audaz: tomar control del negocio inmobiliario. Basta merodear las redes para darse cuenta de las innumerables obras compartidas entre estudios profesionales y BMA (BMA+Dujovne, BMA+Solsona, BMA+Mario Roberto Alvarez, BMA+Aisenson, BMA+Zaha Hadid, BMA+ Camps/Tiscornia, etc.).

El resultado tras 18 años es un **mercado inmobiliario que no construye viviendas, sino metros cuadrados dolarizados**. Tenemos la misma población, más viviendas y mayor déficit habitacional. Este modelo además destruye patrimonio histórico y consume suelo urbano crítico para hacer frente a la crisis climática, ocupando tierras que se necesitan para aumentar el verde en la Ciudad.

Quienes vienen planificando nuestra ciudad han sido los desarrolladores inmobiliarios. Y lo han hecho con el **Estado como facilitador de sus negociados**. El extractivismo urbano se ha vuelto, de manera casi exclusiva, la única política pública que se llevó adelante la última década de manera sostenida.

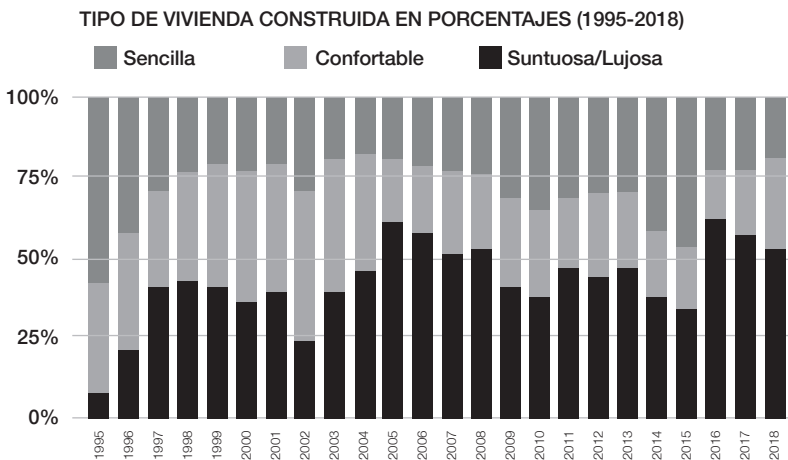
El suelo urbano porteño se convirtió en un bien especulativo, utilizado como forma de canalización de los excedentes financieros y sojeros. Este uso especulativo que se hace del suelo vuelve a nuestra Ciudad cada vez más cara, más alejada de las necesidades del conjunto de los porteños y porteñas. Hace 70 años que la cantidad de habitantes es la misma y, sin embargo, no para de crecer la cantidad de gente que vive en barrios populares. Algo, evidentemente, anda mal en Buenos Aires.

Si el Estado no planifica en función del bien común, los desarrolladores inmobiliarios son los que diseñan nuestra ciudad. Elsztain, Werthein, Constantini son algunos de los ganadores de este modelo. Los servicios están colapsados y faltan espacios verdes.

El resultado no puede ser peor (ni más evidente): Buenos Aires tiene apenas un tercio de los metros cuadrados de espacios verdes recomendados y es, además, una de las peores urbes de Sudamérica en esta cuestión. Ni hablar del impacto en el valor del suelo que tienen estos desarrollos. Desde que asumió el PRO, el precio de las viviendas se multiplicó: el **acceso a la vivienda propia se hizo casi imposible** y los alquileres se tornaron impagables.

Del 2011 al 2021, en la Ciudad de Buenos Aires **se construyeron 10.206.635 m2**. Si esta superficie fuera un barrio, **sería el segundo más grande de la Ciudad, sólo por detrás de Palermo**. Es el equivalente a **200 mil departamentos de 50 m2 o a 500 Plazas de Mayo**. Pese a eso, y a que la **población se mantuvo relativamente estable** (se incrementó un 4% entre el censo de 2010 y el de 2022), aumentó la población en villas, creció el porcentaje de gente que alquila y el peso del alquiler en el salario. **Más oferta no mejoró el acceso a la vivienda**.

Como ya se dijo, esto sucede porque el actual modelo **no construye viviendas sino metros cuadrados dolarizados**. El **60% de lo que se construye son viviendas suntuosas o lujosas**, que no están destinadas a que viva la clase media sino a los sectores de altos ingresos y grandes corporaciones que las utilizan como refugio de valor. Esto presiona sobre el precio del m2, pero además genera que **200 mil viviendas se encuentren vacías**.



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

Por eso afirmamos que en la Ciudad de Buenos Aires impera un modelo donde el **desarrollo urbanístico persigue la inversión de los negociados inmobiliarios**, cuando debería ser al revés: la inversión del **negocio inmobiliario debería ir detrás del desarrollo urbano planificado democráticamente**, en función del bien común. La mitad del desarrollo inmobiliario se concentra en tres comunas (12, 13 y 14) y tres cuartas partes en el corredor norte de la Ciudad (1, 2, 11, 12, 13, 14, 15).

Hoy este mercado no le sirve a nadie: si querés alquilar un departamento para vivir puede consumirte el 50% de tus ingresos, pero si trabajaste toda tu vida y pudiste ahorrar en ladrillos, poniendo en alquiler tu propiedad nunca vas a recuperar la inversión. Es un modelo que expulsa a la gente de la Ciudad. Se **privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas:** la ciudad no solo te expulsa económicamente, **tampoco se planifica el crecimiento a largo plazo y su impacto en la infraestructura**, en el transporte, en los servicios y en la disponibilidad de espacio público.

Entre el negociado y el dogmatismo ideológico, la ciudad neoliberal toma las siguientes características:

- La ciudad se concibe como producto.
- El desarrollo inmobiliario deriva en extractivismo urbano.
- Las viviendas se transforman en commodities.
- El suelo se corporativiza y queda en pocas manos.
- Se avanza en la desregulación normativa.
- Se incrementan los valores del suelo.
- La expansión urbana es con segregación económica y desigualdad socio-espacial.
- Se acrecienta la conflictividad ambiental.
- Se degrada la administración pública.

Antes de mostrar cómo opera el maxikiosko en el plano inmobiliario, detallaremos y ejemplificaremos la serie de instrumentos a partir de los cuales se construye esta ciudad neoliberal.

La planificación... de los negocios

La crisis del 2001 había paralizado el desarrollo urbano local. Recién a partir del 2004 se inicia una enorme recuperación económica, estimulada por el turismo y el boom inmobiliario. En ese momento los sectores económicos más dinámicos y los grupos inmobiliarios de mayor prestigio (con dinero de la soja y los importantes flujos turísticos de un país barato) empezaron a disputarse el acceso al suelo urbano, alterando su valor. El contexto de desconfianza generalizada hacia las entidades bancarias –tras el corralito– incentivó que el sector inmobiliario residencial se transformara en un valor de refugio, aún más atractivo dado que los alquileres temporarios dirigidos a turistas cotizaban directamente en dólares. Al mismo tiempo, frente a la ausencia de crédito hipotecario dirigido a las capas medias-bajas, las desarrolladoras inmobiliarias se concentraron en los segmentos de las clases más adineradas y con productos del tipo residencial “suntuoso” y en los sectores o barrios con ventajas comparativas mayores que las del resto de la ciudad, acrecentando las asimetrías urbanas.

En ese marco de enorme oportunidad, la **intencionada desregulación normativa y la ausencia de planificación por parte del estado local le permitían al mercado ejercer su despliegue inmobiliario (de acumulación y concentración), sin medir consecuencias o impactos.** El Estado local abandonaba definitivamente su rol de árbitro de intereses para convertirse en facilitador de negocios. Un cambio drástico en el rol del Estado y en el enfoque de la gestión pública (autonomía mediante), que implicó el progresivo reemplazo de los antiguos cuerpos técnicos por una nueva y joven administración de gestores, de estrecho vínculo con los actores privados. En otros términos, la degradación técnica del Estado (cuyo funcionamiento era perfectible) y la pérdida intencional de toda trazabilidad en las políticas públicas.

Normativa a la carta

Una de las prácticas habituales de la gestión del desarrollo urbano del PRO ha sido –y es, la de impulsar la revalorización del suelo urbano, ya sea público o privado, de jurisdicción local o nacional, mediante el uso estratégico de la normativa urbana; en la mayoría de las ocasiones, soslayando la necesaria mirada integral que otorga

un plan y prometiendo un “derrame” de beneficios urbanísticos y económicos que casi nunca llegan. Trazando una línea de tiempo desde el año 2008 hasta la fecha, puede observarse la misma estrategia con distinto nombre:

- 2007-2015: Interpretaciones al Código de Planeamiento Urbano
- 2015-2019: Rezonificación del suelo público y Reforma de Códigos (Código Urbanístico, Código de Edificación)
- 2019-2023: Convenios urbanísticos innovadores
- 2024-2025: Capacidad constructiva adicional

Parece haberse instaurado como regla general el uso de la **interpretación urbanística como instancia recaudatoria para el otorgamiento de excepciones normativas**. En otras palabras, la norma urbana como caja. Lamentablemente, con menor o mayor responsabilidad de todas las sucesivas administraciones del PRO en la Ciudad.

Es claro que este sistema clientelar tuvo efectos sobre la actividad. La atención especial para los grandes estudios de arquitectura y desarrolladoras provocaron una **fuerte cartelización profesional**, frente al silencio de las entidades que regulan la matrícula. La organización y control recaudatorio derivó en una progresiva concentración de la gestión de trámites (inicialmente mediante determinados estudios y gestores reconocidos y luego mediante sus propios equipos de gestores). El Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (CAPUAM, antes llamado COPUA) ha sido degradado a un espacio de lobby para estudios y desarrolladoras dedicado a justificar excepciones amparadas en la ley 2930.

La tierra pública de remate

Se privatizó un barrio entero. En los doce años de gestión Pro en la Ciudad se privatizaron, entre ventas y concesiones, un total de **473 hectáreas**. Más de la mitad fueron en los últimos cuatro años. Esto equivale a 236 veces la Plaza de Mayo, 630 canchas de River, cuatro veces la superficie urbanizada de Puerto Madero o un barrio de Nuñez.

Sólo entre el 2016 y el 2019 se privatizaron 267 hectáreas, la mayoría de ellas a través de la gestión de la Ciudad. Del resto, casi 21 fueron traspaso de tierras de Nación a Ciudad y otras 20 por la AABE.

En resumen, Macri privatizó 205 hectáreas en 8 años, a un promedio de 25 hectáreas por año. Larreta, en la mitad del tiempo, privatizó 267 hectáreas, con un promedio de 66 hectáreas por año (65% más por año con respecto a Macri). La recaudación con Macri sumó más de 68 millones de dólares. La recaudación con Larreta fue de 174 millones de dólares.

Los terrenos que Nación cedió a Ciudad mediante la AABE cuando el PRO manejaba ambos distritos suman 100 inmuebles, la mayoría alrededor del Paseo del Bajo, los playones ferroviarios de Palermo y Caballito y los bajo viaductos del Mitre y del San Martín. En ese contexto, el vínculo entre Nación y Ciudad se tornó sumamente estrecho. Los funcionarios locales y nacionales (en su mayoría ex funcionarios locales) llevaban adelante una variada agenda en común que se monitoreaba en las frecuentes reuniones de gabinete del Jefe de Gobierno. Sin dudas, el enorme interés por el banco de tierras nacional incentivó la migración de ex funcionarios de Bienes y Concesiones de la Ciudad a la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado).

En este marco, se desarrollaron 4 años de una **profusa actividad de desprendimiento de bienes inmuebles del Estado Nacional, en especial a favor de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires**. Un procedimiento que implicaba la identificación, relevamiento y análisis urbanístico de los activos del Estado Nacional, con el objeto de ser revalorizados normativamente y subastados. La ecuación era simple: Nación aporta el terreno, Ciudad aporta la norma y lo que se recauda se divide 70% / 30%.

El problema no radica tanto en el traspaso en sí mismo, sino en su objetivo. Si se hubiera realizado para que la Ciudad planificara urbanísticamente cómo desarrollar determinadas zonas, sumar espacios verdes, agregar al mercado inmobiliario oferta destinada a la clase media y los sectores populares, entre otros posibles usos, podría haber reforzado nuestra autonomía y ayudado a garantizar derechos para todos los porteños. Pero no era esto lo que tenía en mente el macrismo, sino la utilización de todos estos inmuebles para facilitar negociados.

El predio más atractivo de este modus operandi es sin dudas el de **Catalinas Norte**, cuya venta contribuyó a financiar el 50% de la obra del Paseo del Bajo. La subasta de estos predios no contempló el valor de las obras de infraestructura que aún deben realizarse para que el desarrollo sea factible. Los primeros predios nacionales subastados (Fitz Roy, Sastrería Militar, Huergo, etc.) en los que se otorgó una **interpretación urbanística poco generosa en primera instancia** (perjudicando al estado nacional respecto al valor potencial del suelo); para luego, **una vez subastado y en manos privadas, otorgar una nueva interpretación o convenio, que incrementaba su rentabilidad**. Una estrecha relación entre jurisdicciones, que actuaban en sintonía al momento de facilitar algunos negocios, como el caso del Hospital Ferroviario, el Antepuerto o los predios adyacentes a Parque Norte.

No es sólo que se venda, ¡también cómo se vende! Son numerosos los ejemplos. El **Tiro Federal**, un club que tenía su predio en tierras del Estado, es un caso paradigmático. Esas tierras dejaron de pertenecer a la institución y se privatizaron. Se dividió el terreno en tres sectores. En uno, se subastan terrenos a precios más bajos que los del mercado. Hasta Clarín sostuvo que los precios reales del m² eran hasta cuatro veces superiores. Pero además, durante la pandemia el GCBA convocó a licitación las obras de infraestructura necesarias para el Parque de la Innovación, que es el proyecto para este predio en otro de los sectores. Es decir, el negocio es doble: **te venden a precios más bajos que los del mercado y encima el Estado financia la infraestructura para poner en valor los terrenos**.

Pero no termina ahí: al Tiro Federal no lo dejaron en la calle... ¡le dieron tierras públicas frente al río! **El Estado perdió dos veces**. Primero cuando privatizó las tierras del viejo Tiro Federal y segundo cuando privatizó las tierras para el nuevo. Para colmo, gastaron millones de pesos en construir el nuevo predio. ¡Hasta les compraron equipamiento de tiro y canchas de bowling!

¿Código urbanístico o de negocios?

Sin dudas, la reforma del Código de Planeamiento Urbano (ahora Código Urbanístico o CUR) y el Código de Edificación era una de las deudas de la agenda urbana local. Sin embargo, priorizar la reforma de estos códigos sin antes actualizar el Plan Urbano Ambiental ni redactar el Código Ambiental, ambos insumos básicos, generaba la primera gran contradicción de un proceso muy particular. Luego de un proceso signado por las excepciones inmobiliarias que intensificaban el perfil heterogéneo de la Ciudad, el nuevo Jefe de Gobierno planteaba la reforma del CUR como la construcción de un marco regulatorio previsible para una ciudad homogénea de 6 millones de habitantes. Es decir, como una estrategia de diferenciación frente a las innumerables denuncias heredadas de la gestión precedente.

El gran problema del **Código Urbanístico** es haber solapado, sin debate ni participación, un modelo territorial que **afianzó la concentración del desarrollo inmobiliario y acrecentó la exclusión**. En ese sentido, la **homogeneización de alturas en la Ciudad implicó un gran beneficio para muchos barrios de la zona norte, inyectando suelo rentable y vía libre a un mercado inmobiliario ávido de oportunidades de inversión**. Si ante la falta de planificación urbana y el agotamiento de suelo previsible en Puerto Madero, el desarrollo inmobiliario con fines especulativos venía avanzando incesantemente sobre los barrios más rentables de la zona norte de la Ciudad, a partir del CUR este proceso se afianzó como una política de estado. Si la política pública no orienta la construcción (debido a la homogeneidad en todo el territorio), el capital persigue la rentabilidad, que se encuentra puntualizada en algunas zonas específicas.

Dentro de las modificaciones del CUR, pasó casi desapercibida la **desregulación de la figura de los convenios urbanísticos**, que sería utilizada tiempo después como otra de las herramientas estratégicas. Sin dudas, un proceso que generó múltiples problemáticas y que vinieron a consolidar el proceso de resistencia vecinal que obligó al oficialismo a plantear la modificación del CUR en 2024.

La implementación de los **convenios urbanísticos** marca otra etapa en la gestión PRO. Con un Código Urbanístico más restrictivo y la resistencia a generar excepciones escandalosas, a fines del 2020 la Jefatura de Gabinete de Ministros facultó a la Secretaría de Desarrollo Urbano a realizar los llamados a convocatorias para la presentación de propuestas de Convenios Urbanísticos, aprobar su metodología de evaluación y dictar cualquier otra norma complementaria o aclaratoria.

Así es que, bajo la figura de “Convocatoria de Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores”, el oficialismo de la ciudad hizo pública una iniciativa netamente orientada a blanquear nuevas excepciones inmobiliarias (beneficios normativos), pero trasladando la responsabilidad de su aprobación al cuerpo legislativo. Una convocatoria marcada por la falta de una planificación integral (sin anclaje al PUA y los Planes de Comuna), ausencia de diagnóstico técnico y de estudios complementarios que fundamenten la iniciativa (catastrales, dominiales, económicos, sociales, etc.), escasa o nula participación social, poca transparencia en los procedimientos administrativos y sobre todo una peligrosa conceptualización de la herramienta, donde se transfería el necesario “interés público” que debe guiar a todo convenio a la “recaudación con fines de interés público”. En otros términos, **cualquier excepción podía estar justificada si el destino de la recaudación revestía interés público**. Una característica alarmante, ya que si la potencialidad constructiva de toda la ciudad está sujeta a negociación se podría estar incentivando un proceso de corporativización del suelo urbano; y con ello mayor inequidad y exclusión.

La convocatoria fue un éxito. El mercado proponía hacia dónde crece la Ciudad (Centro y Norte) y alrededor de 120 convenios urbanísticos esperaban su tratamiento legislativo. Sin embargo, la primera tanda de 16 convenios que ingresó a la Legislatura dejó en evidencia los riesgos de esta metodología, **donde quedaban expuestos los interesados y sus terminales políticas**. Finalmente, sólo se aprobaron 11 del total, debido al alto rechazo que despertó.

En otros términos, la orientación del crecimiento de la Ciudad y, en especial, la continuidad de su desarrollo urbanístico más importante, queda definida por manos privadas y con un producto inmobiliario que fomenta un enclave exclusivo sin anclaje en demandas locales.

La inversión pública para mejorar la rentabilidad privada

A tal punto se organiza la Ciudad en función de los intereses inmobiliarios, que incluso políticas públicas a priori orientadas a otros fines como la política productiva, se caracterizan por tener un impacto vinculado más a la valorización del suelo urbano que al estímulo de sectores existentes o con potencial de crecimiento. Tal es el caso de los **Distritos Económicos**, de resultados discutibles en materia productiva, pero indudables a la hora de hablar de reconversión urbana. Abundan los casos de empresas que se radicaron en distritos económicos, a pesar de tener poco que ver con el objeto original de esta política pública:

- Santander Río se instaló en 2015 en el Distrito Audiovisual y de las Artes.
- Iron Mountain y ADEA, dos empresas cuya función es guardar papeles, en el Distrito Tecnológico desde 2009 y 2021, respectivamente.
- NOBS S.A. (Carnicería RES) es la única inscrita en el Distrito de Integración Productiva.

El costo económico de esta medida es muy relevante para el Estado, que brinda generosos incentivos fiscales para la radicación de empresas en determinadas zonas.

Distrito	Gasto tributario en 2025 (en millones)
Tecnológico	\$ 140.041,7
Audiovisual y de las Artes	\$ 7.363,5
Diseño	\$ 4.247,1

Fuente: Mensaje de Presupuesto 2025 de la CABA

Además, la mayoría de las veces este costo fiscal ni siquiera sirve para favorecer la aparición de nuevas empresas, sino que empresas ya existentes se mudan simplemente para obtener rebajas impositivas.

El cambio en los barrios no sólo se dio a partir de la inversión privada atraída por los beneficios fiscales, sino también a partir de la inversión

pública, destinada a mejorar los entornos donde se radicarían las ¿nuevas? empresas. En estas zonas, que originalmente no eran de alta rentabilidad, es el Estado el que invierte para mejorar el entorno, construyendo edificios gubernamentales, poniendo en valor el espacio público y generando obras de infraestructura con el objetivo claro de valorizar el suelo. El traslado de las dependencias públicas a partir de la descentralización de las oficinas del gobierno tuvo un impacto en el costo de vida de la zona, expulsando a los vecinos y constituyendo un proceso de renovación urbana tendiente a ampliar las zonas de potenciales negocios inmobiliarios.

Un caso paradigmático del modelo macrista: Costa Salguero

Bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se encaró un proyecto para construir un barrio costero de lujo a cambio de algunos metros cuadrados destinados a espacios verdes. Para eso, se modificó la normativa urbanística del Distrito Joven y se votó en la Legislatura la posibilidad de construir hasta 29 metros de altura, incluyendo un helipuerto. Bajo el eufemismo de “llevar ciudad” y recuperar el río se decidió construir un barrio para los más poderosos del país. Por algún motivo, para los funcionarios macristas, “llevar ciudad” nunca significa llevarla a la clase media, a los estudiantes o a los jubilados.

El proyecto suscitó un amplio rechazo de la sociedad civil, con la realización de audiencias públicas históricas, de las que participaron más de 7 mil personas. Además, se juntaron más de 50 mil firmas que permitieron que se debatiera en la Legislatura la primera iniciativa popular en la historia de la Ciudad. Sin embargo, el oficialismo contó con los votos suficientes para la aprobación del proyecto. Finalmente, la Justicia determinó que la venta de esos terrenos era inconstitucional y recientemente el Jefe de Gobierno Jorge Macri tuvo que reconocer que el proyecto no era una buena idea.

Este proyecto demostró una vez más cómo las tierras públicas para la gestión del PRO no son un insumo para generar calidad de vida, sino parte de un proyecto de Ciudad como administradora de los negocios privados. Sin embargo, así como la movilización ciudadana obligó a volver a discutir el código urbanístico, en este caso, la conciencia crítica de los porteños logró detener un atropello más sobre activos que nos pertenecen a todos.

CAPÍTULO 3

CONCESIONES, OBRAS Y CONTRATACIONES

La obra pública en la Ciudad

Desde que Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007 hasta la actualidad, con la continuidad de su espacio político en la gestión, la infraestructura urbana de la capital experimentó cambios sustanciales. A lo largo de estos 17 años, se han impulsado numerosas obras públicas con el objetivo declarado de modernizar la ciudad, mejorar la movilidad y potenciar el desarrollo urbano. Sin embargo, detrás de cada gran anuncio, de cada inauguración y corte de cinta, persiste un interrogante fundamental: ¿cuáles fueron las verdaderas prioridades que guiaron estas inversiones y a quién beneficiaron realmente?

El macrismo construyó su relato en torno a la eficiencia y la capacidad de gestión, posicionando la obra pública como uno de los pilares de su modelo. Desde la creación del Metrobús hasta la urbanización de villas, pasando por la renovación de espacios verdes y la construcción de pasos bajo nivel, el discurso oficial presentó a estas iniciativas como una transformación positiva e indiscutible. No obstante, cuando se analizan los contratos, los costos, la calidad de las construcciones y sus verdaderos beneficiarios, surgen patrones de adjudicaciones direccionadas, sobrecostos y concesiones a empresas vinculadas con el propio espacio político gobernante.

El macrismo realizó muchas obras. Muchas de ellas han mejorado la vida de los porteños, mientras que la pertinencia de otras es cuestionable. Sin embargo, aquí nos centraremos en los **pesos pesados de la obra pública en la Ciudad**. Un puñado de empresas que reciben contratos millonarios en dólares. Sus nombres se repiten en cada proyecto e incluso son contratistas también como proveedoras de otros servicios públicos.

Uno de los casos paradigmáticos es el Metrobús, presentado como una solución innovadora para el tránsito porteño. Si bien es cierto que redujo los tiempos de viaje para ciertos recorridos, también trajo consigo la eliminación de carriles de circulación general, la concentración de recursos en corredores específicos y la concesión de obras a empresas que han sido recurrentes beneficiarias de licitaciones públicas en la Ciudad. Del mismo modo, la urbanización de barrios populares, como la Villa 31, se anunció como un hito de integración social, pero en la práctica muchas de sus promesas quedaron a medias, con falta de infraestructura básica, problemas de escrituración de viviendas y desplazamientos forzados de vecinos.

La extensión de la red de subte fue otra de las grandes promesas incumplidas. Mientras que en campaña se aseguraba la construcción de 10 kilómetros de red por año, el promedio real fue muy exageradamente inferior. En paralelo, la concesión de la operación del subte a Emova (Grupo Roggio) se renovó en un proceso plagado de irregularidades, con tarifas que aumentaron muy por encima de la inflación y un servicio que continúa deteriorándose.

También resulta relevante examinar las obras hidráulicas destinadas a mitigar inundaciones, como el entubamiento del Arroyo Maldonado y otras intervenciones en la red pluvial. Si bien han reducido el impacto de las lluvias en algunas zonas, también han sido utilizadas como justificación para avanzar con negocios inmobiliarios en tierras ganadas al espacio público, sin garantizar un equilibrio ambiental adecuado.

Este capítulo pretende quitarle el velo a los principales jugadores de la patria contratista porteña y a la narrativa oficial, que presenta a la obra pública como un sinónimo de progreso incuestionable. A través del análisis de datos, testimonios y la revisión de contratos, se expondrá el trasfondo político y económico de las principales intervenciones urbanas realizadas durante el macrismo. Porque una ciudad no se mide sólo por sus obras, sino también por la transparencia, la equidad y los beneficios reales que estas generan para sus habitantes.

La obra pública de Jorge Macri

La obra pública en este primer año de gestión de Jorge Macri **continúa con el verdadero legado del PRO en la Ciudad, un círculo de empresas que se repiten una y otra vez, sin importar su desempeño o el impacto real de sus intervenciones.** Las licitaciones y contrataciones, lejos de fomentar la competencia y la mejora en los servicios, terminan reforzando una estructura opaca donde el Estado sólo cumple el rol de facilitador del negocio privado. Entre las principales obras del primer año de gestión, se encuentran las siguientes:

OBRA	EMPRESA	MONTO
Restauración y ampliación de edificio y predio MOA	Grupo Thor SRL Garbin S.A U.T.E.	\$ 1.766.839.641,13
Calle Verde Tucumán 25 de Mayo	Verde Integral S.A.	\$ 6.039.882.952,78
Plaza Villa Santa Rita	Naku Construcciones SRL Altote S.A. - U.T.E.	\$ 1.027.360.977,52
Barrio Padre Mugica: Plaza Feria y Plaza Primavera	Algieri S.A.	\$ 1.170.169.198,75
Patio de Juegos Florentino Ameghino	Choix S.A.C.I.F.I.C.A.	\$ 1.221.858.350,29
Plaza Rómulo Zabala	Naku Construcciones SRL	\$ 1.468.782.758,01
Reforma Integral Plaza Mario Abel Amaya	Indaltec S.A.	\$ 895.998.186,51
Puesta en valor Boulevard Avenida de los Corrales	Ilubaires S.A.	\$ 5.349.493.026,87
Patio de juegos en el Parque de la Ciudad	LX Argentina S.A.	\$ 1.321.206.579,67
Restauración Floralis Generica	OSP SA	\$ 1.410.898.514,01
Parque Centenario	Ecología Urbana S.R.L.	\$ 2.294.702.412,28
Plaza Félix Lima	Miavasa S.A.	\$ 753.796.130,00
Puesta en valor Antiguo Edificio de la Administración y Recovas de Mataderos	OSP SA	\$ 2.024.230.655,21
Restauración y conservación Patio Glorieta Andaluz	HIT Construcciones S.A.	\$ 643.638.129,15
Fachada Av. de Mayo 1201	Instalectro s.a.	\$ 475.649.526,53
Peristilo Cementerio de Recoleta	SES Sociedad Anónima	\$ 600.949.317,08

La obra de la Calle Verde de Tucumán y 25 de Mayo tomó notoriedad pública por los cuestionamientos a su costo. Según la información oficial, cada árbol costará 60 mil dólares y el metro cuadrado casi llega a los 13 mil dólares. Los gastos alcanzan los 6.039 millones de pesos, alrededor de 600 mil dólares por cuadra. Si se compara con obras similares, su costo es mayor a todas: el Parque Lineal de Honorio Pueyrredón, cuyo gasto representó 150 dólares el m² y 7.787 dólares cada árbol; la Calle Verde de Triunvirato entre Nahuel Huapi y Bauness en Villa Urquiza, que tuvo un costo de 358 dólares el m² y 11.273 dólares cada árbol; y la calle Yermal entre Calderón de la Barca y Cervantes, en el barrio de Villa Luro, que representó un gasto de 1.522 dólares el m² y 33.594 dólares cada árbol.

La empresa ya tuvo a su cargo otras obras en la Ciudad, como el “Plan Integral del Casco Histórico - Calle Perú entre Avdas. Independencia y Belgrano”, y otras contrataciones, como la “Provisión de maquinarias e insumos para el mantenimiento de grandes parques” y la “Limpieza de arroyos”, todas del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

A esta altura del libro, algunas de las empresas del listado nos resultan conocidas. Es que se repiten nombres que prestan servicios y bienes públicos en diferentes rubros. Pero también se encuentran entre las históricas beneficiarias de la obra pública en la Ciudad.

Sobre el final de este libro profundizaremos la historia de SES S.A. y sus vínculos con una familia muy allegada al poder, los Caputo. Por el momento, prestemos atención al resto de las empresas listadas. Uno de los grandes jugadores en la Ciudad es Algieri S.A., una empresa que ha sabido obtener contratos millonarios en la Ciudad, garantizando su presencia en numerosas licitaciones. A lo largo de los años ha sido la adjudicataria de múltiples obras claves, consolidando su rol dentro del esquema de contratistas recurrentes. Entre los procesos en los que resultó beneficiada, se encuentran:

- Puesta en Valor de la Plaza Manzana 103 y Cancha Ledesma (2023)

- Destacamento Policial en Bajo Autopista B31 (2022)
- Construcción del Polo Comercial (2023)
- Readecuación del Espacio Público en el Predio YPF, Manzana 3 (2023)
- Plaza Feria y Plaza Primavera del Barrio Padre Carlos Mugica (2024)
- Intervención en la Calle Verde – Yerbal (2022)
- Plan Integral del Casco Histórico en la Calle Perú entre Av. Independencia y San Juan (2022)
- Parque Ferroviario de Colegiales – Etapa III (2023)

La empresa también es adjudicataria de la licitación para el mantenimiento de las veredas en la Comuna 15 y el mantenimiento de los espacios verdes en las Comunas 1 y 3. Pero la presencia de Algieri S.A. en las contrataciones de la Ciudad va aún más allá. También fue adjudicataria de los siguientes contratos:

- Servicio de reparación de unidades funcionales en viviendas del sector YPF (2022)
- Adecuación e instalación de termotanques eléctricos en unidades funcionales (2022)
- Gestión integral de conservación del sector YPF del Barrio Padre Carlos Mugica (2022)
- Servicio de mejoras de desagües del Parque Extremo en Costanera Norte (2015)
- Impermeabilización de cubierta del edificio del Parque Extremo (2015)
- Mejora de seguridad en el Parque Extremo (2015)
- Mejora de superficies parquizadas en el Parque Extremo (2015)
- Provisión y colocación de panes de pasto en el Parque Tres de Febrero (2015)
- Mantenimiento integral de espacios verdes y tareas de intervención (2018)
- Readecuación de jaulas de manejo y seguridad en recintos de felinos grandes (2017)

Por su parte, **Naku Construcciones SRL**, también encargada del mantenimiento de las veredas en la Comuna 8, obtuvo numerosos contratos para realizar trabajos en el Ecoparque. Aunque su labor en la Ciudad no termina aquí. Entre las obras que llevó adelante, se encuentran las siguientes:

- Refuncionalización de Edificios en Playa Colegiales (2022)
- Obra de Infraestructura en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte (2022)
- Parque Ferroviario Colegiales - Etapa I (2022)
- Calle Verde - Remedios Escalada (2023)

Indaltec es una de las empresas encargadas regularmente del mantenimiento de las escuelas de la Ciudad, además del mantenimiento de los espacios verdes de las Comunas 4 y 5. Tuvo a su cargo las siguientes obras:

- Recambio y Reparación de Cubiertas del Pabellón Cocina del Hospital de Infecciosas F. Muñiz (2022)
- Mantenimiento Integral del Museo Benito Quinquela Martín (2023)
- Mantenimiento y Obras Menores en la Comuna 6 (2023)

Dentro del circuito de empresas recurrentes en la adjudicación de contratos en la Ciudad de Buenos Aires, **Ilubaires S.A.** se ha consolidado como una de las grandes beneficiarias del modelo de licitaciones direccionadas. Con una presencia constante en diversas áreas de la gestión pública, esta firma ha acumulado una larga lista de contrataciones a lo largo de los años, asegurándose su lugar en la distribución de los recursos del Estado porteño. Actualmente, se encarga del servicio de alumbrado y del mantenimiento de las veredas en las Comunas 1 y 4, en unión transitoria con Avinco Construcciones S.A. Entre sus principales contratos se encuentran:

- Parque Ferroviario Colegiales – Etapa II (2022)
- Calle Verde – Conde (2022)
- Plan de Recuperación Vial de la Ciudad (PREVIAL) – Etapa VI (2023)

- Resoluciones Urbanas y Mejoras en el Espacio Público de la Ciudad (2021 y 2022)
- Mejora del Alumbrado Público y su Sistema Integral de Telegestión (2023)
- Mantenimiento de Puentes, Pasarelas y Túneles (2021)
- Servicio de Monitoreo e Inspección de Pasos Bajo Nivel (2015)
- Mantenimiento Integral de la Red de Metrobús, Centros de Traslados y Calle Compartida (2023)
- Parque Ferroviario de Colegiales – Etapa III (2023)

LX Argentina S.A., además de estar encargada del mantenimiento de edificios públicos, se destaca por su fuerte presencia en licitaciones estratégicas. A lo largo de los años, esta firma ha conseguido una serie de adjudicaciones que le han permitido consolidarse en el circuito de empresas beneficiadas por el modelo de concesión del espacio público. Algunas de las contrataciones incluyen:

- Mantenimiento Integral de la Red de Metrobús, Centros de Traslados y Calle Compartida (2023)
- Servicio de Limpieza Integral en distintas instalaciones de la Policía Metropolitana (2014)
- Servicio Integral de Limpieza y Mantenimiento de la Red de Metrobús y Centros de Traslado (2018)
- Mantenimiento Integral y Mejora del Alumbrado Público y su Sistema de Telegestión (2023)
- Limpieza Integral, Desinsectación, Desinfección y Desratización en el Ente Autárquico del Teatro Colón (2014)
- Mantenimiento General del Planetario Galileo Galilei (2018)
- Mantenimiento Integral de la Villa Olímpica de la Juventud (2018)
- Limpieza y Puesta a Punto de los Parques Verdes y Urbanos utilizados en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires (2018)

Ecología Urbana SRL es una empresa contratada por la Ciudad para realizar la tarea de la poda de árboles y recibió durante estos años numerosos contratos, vinculados generalmente al embellecimiento urbano:

- Readaptación Integral del Patio de Juegos en el Museo de la Imaginación y el Juego (2023)
- Conexión a la Red de Agua para la Torre Monumental (2023)
- Provisión e Instalación de un Conjunto de Juegos Infantiles (2023)
- Instalación de Muelles y Torres de Avistamiento (2023)
- Mantenimiento Integral de Espacios Verdes y Creación de Espacios Públicos (2018)
- Provisión e Instalación de Muros Verdes en la Comuna 5 (2022)

Las demás empresas, si bien no tienen actualmente contratos permanentes con el Estado vinculados a la provisión de algún bien o servicio público, también han sido recurrentemente contratadas para la realización de obras públicas.

Hit Construcciones S.A. no sólo ha obtenido licitaciones millonarias en el sector de obra pública, sino que también ha sido beneficiaria de los incentivos otorgados por el Distrito Tecnológico en 2015, un esquema de beneficios fiscales creado supuestamente para impulsar la innovación, pero que terminó siendo utilizado por algunas empresas constructoras para maximizar su rentabilidad sin una real vinculación con la tecnología. Entre las licitaciones más recientes que obtuvo se encuentran múltiples contratos vinculados al Ecoparque Interactivo de la Ciudad:

- Servicio de Reacondicionamiento del Recinto de Cóndores – Etapa II (2021)
- Reacondicionamiento del Ambiente de Felinos Chicos (2022)
- Reacondicionamiento del Ambiente de Faisanera (2022)
- Readecuación y Refuncionalización del Templo Hindú de Cebúes (2022)
- Conservación Integrada del Barrio de los Monos (2022)
- Readecuación de Pajareras (2023)
- Restauración de la Envolvente Edilicia de la Casa de los Osos (2022)

Por fuera del Ecoparque también ha obtenido contratos vinculados al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y el Ministerio de Educación:

- Restauración y Conservación del Patio Glorieta Andaluz (2024)
- Restauración Integral de Fachadas en el Casco Histórico – Etapa 3 (2022)
- Conservación de Fachadas del Mercado de San Telmo (2021)
- Conservación de la Fachada Otto Wulff (2021)
- Conservación de Fachadas del Casal de Catalunya y su Biblioteca Pompeu Fabra (2022)
- Restauración de Fachadas en Catamarca 2085, Cátulo Castillo 2750, Rondeau 2751 (2023)
- Puesta en Valor del Edificio de Libertad 581 (2021)

Instalectro S.A. es otra de las empresas que ha logrado consolidarse en el circuito de contrataciones del Gobierno de la Ciudad. A lo largo de los años, ha obtenido adjudicaciones en múltiples áreas de infraestructura, mantenimiento y restauración urbana, asegurando su presencia en el reparto de recursos públicos:

- Relocalización de oficinas para el IVC en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (2021)
- Arenado y pintura de macizos de anclaje inferior de la torre del Parque de la Ciudad (2022)
- Puesta en Valor de Bases de Agentes de Tránsito en Villa Luro, Núñez y Ocampo (2022)
- Puesta en Valor de Galerías 3 y 4 del Cementerio de Chacarita (2022)
- Refuncionalización y Obras Complementarias en Sucre-Pampa (2022)
- Puesta Bajo Norma del Centro de Admisión y Derivación Inchausti y el Centro de Régimen Cerrado Belgrano (2022)
- Fachada en Av. de Mayo 1201 (2024)
- Intervención en el Parque de la Ciudad F.F. de la Cruz (2023)

OSP S.A. se ha encargado de las siguientes tareas:

- Restauración Conservativa del Mausoleo del General Belgrano (2023)
- Conservación y Restauración Integral de El Tambito (2022)
- Fachada de la Casa del Historiador y su Plaza en Bolívar 466 (2022)
- Plan de Recuperación Vial de la Ciudad (PREVIAL) – Etapa VI (2023)

Como se ve claramente, Jorge Macri vino a cuidar el maxikiosco. Es la continuidad absoluta del método que gobernó la Ciudad los últimos 18 años. El responsable de la mala calidad de los servicios públicos, de los problemas de los porteños.

Los pesos pesados de la obra pública porteña

Una investigación periodística del diario La Nación³⁸ concluyó que, entre 2007 y 2022, dentro de un total de 300 contratistas, apenas un puñado de 15 empresas se quedaron con el 50% de los contratos de la Ciudad. El informe señala que muchas de esas empresas fueron aportantes a las campañas del macrismo tanto en 2015 como en 2019.

PROVEEDOR	VALOR CONTRATOS EN USD
Techint - Dycasa S.A. (UTE)	u\$s 524.246.704
lecsa - Fontana Nicastro (UTE)	u\$s 198.342.576
Green S.A. - Rottio S.A. - VFE (UTE)	u\$s 197.125.984
Criba S.A.	u\$s 187.294.085
Benito Roggio e Hijos S.A. José Cartellone Construcciones Civiles S.A. Supercemento S.A.I.C (UTE)	u\$s 183.352.458
Constructora Sudamericana S.A.	u\$s 182.383.410
Benito Roggio e Hijos S.A. José J. Chediack S.A.I.C.A (UTE)	u\$s 127.140.975
Conorvial S.A.	u\$s 110.718.729
Green S.A. - Ceosa - PBT (UTE)	u\$s 101.490.968
Bricons S.A.I.C.F.I.	u\$s 96.235.118

La unión transitoria de empresas entre **Techint y Dycasa** lidera la tabla por haber sido la encargada de la **expansión de la línea H**, una obra que en total costó más de **500 millones de dólares**. Por su parte, Iecsa y Fontana Nicastro fueron beneficiadas por la construcción del tramo más caro del **Paseo del Bajo**. **Iecsa**, hoy renombrada como **Sacde**, es la empresa del **primo de Mauricio Macri, Ángel Calcaterra**. Los contratos más jugosos quedan en familia. También había sido beneficiada con la obra, nunca iniciada, del **soterramiento del Sarmiento**, cuyo presupuesto superaba los **3 mil millones de dólares**.

Criba, por su parte, es una empresa de Santiago Tarasido. Otra empresa de la misma persona, Mejores Hospitales S.A., es beneficiada históricamente para el mantenimiento de hospitales y escuelas de la Ciudad. Estuvo entre las principales aportantes a la campaña del macrismo en 2015. Ha realizado numerosas e importantes obras, entre las que se destacan:

- **Parque Costero BA**, un nuevo espacio verde de cara al río. La obra fue cuestionada por su costo, más elevado que el de otros proyectos similares en el país.
- **Finalización del penal en Marcos Paz**. En el 2024 fue beneficiada por un contrato monumental para terminar, finalmente, el módulo carcelario paralizado desde el año 2020. El contrato asciende a **casi 100 millones de dólares**.
- Edificio de coworking en el Parque de la Innovación. Un contrato por un monto cercano a los **4 millones de dólares**.
- **Centro de Exposiciones y Convenciones (2017)**.
- **Barrio Rodrigo Bueno**. A cargo de la edificación de 455 unidades habitacionales y 45 locales comerciales, con una superficie total de 47.690 m².
- **Villa Olímpica**. Participó en la construcción de dos módulos habitacionales en este proyecto.

Conorvial S.A. es una empresa constructora argentina con sede en Santiago del Estero, especializada en obras de ingeniería civil, como la construcción de carreteras, puentes y otras infraestructuras. Fundada en 1974, ha desarrollado diversos proyectos en el ámbito de la obra pública. En 2019, la empresa y su presidente, Pablo López Casanegra

fueron mencionados en la causa judicial conocida como "los cuadernos de las coimas". El juez federal Claudio Bonadío procesó a más de 100 empresarios y exfuncionarios, incluyendo a López Casanegra, por su presunta participación en un esquema de recaudación de fondos ilegales vinculados a la obra pública. A López Casanegra se le imputó el delito de cohecho activo en múltiples hechos, y se le impuso un embargo sobre sus bienes por un monto de \$1.100.000.000.

Miavasa fue nombrada anteriormente en este libro, ya que tiene a su cargo el mantenimiento de veredas en la Comuna 9, además de ser una de las principales contratistas del Ministerio de Seguridad. Tuvo numerosos contratos para obra pública durante la gestión macrista:

- **Metrobús del Bajo - Etapa II (Paradores).** Realizó 2,5 km de la traza y construyó 13 paradores. Adjudicada en julio de 2022 por un monto de **más de 5 millones y medio de dólares**, esta obra generó cuestionamientos debido a su elevado costo en comparación con otros corredores similares. Se señalaron irregularidades en la licitación y posibles direccionamientos a contratistas aliados.
- **Plan Integral Casco Histórico (Calle Bolívar)**, con un costo mayor a los 600 mil dólares.
- **Parque Lineal Honorio Pueyrredón**, adjudicada por un monto de 2 millones de dólares, generó rechazo por parte de los vecinos, quienes denunciaron la falta de estudios de impacto ambiental y social.
- **Plan de Recuperación Vial de la Ciudad (PREVIAL) - Etapa VI**, esta obra contempló la repavimentación de **aproximadamente 500 km de calles** en distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. El tramo otorgado a esta empresa tuvo un costo de más de **700 mil dólares**.

Cunumí S.A., bajo la dirección de Raúl Nicolás Orsini, ha estado involucrada en diversas controversias relacionadas con la obra pública en Argentina. En el marco de una causa judicial en 2005, Orsini admitió haber emitido **facturas por servicios no prestados**, cobrando una comisión del 10% del monto facturado. A pesar de este procesamiento y un embargo de 14.500.000 pesos, Cunumí S.A.

continuó obteniendo contratos significativos, especialmente durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las adjudicaciones construcción de un módulo de 86 departamentos en la Villa Olímpica en 2016 y del Edificio Polo Educativo Mugica, obra que sufrió el colapso de una parte del techo apenas 40 días después de su inauguración. Otras de sus obras más significativas fueron:

- **Cafetería - Parque de la Memoria (Ampliación de la red de agua y cloaca).** Esta obra adjudicada el **18 de julio de 2023** generó críticas por sus costos elevados y la falta de transparencia en la adjudicación, por un monto de 32.542.626.
- **Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado (San Martín y Dr. Luis Agote).** Adjudicada el **11 de agosto de 2022**, esta obra tenía como objetivo la remodelación y adecuación de espacios en centros educativos cerrados. Sin embargo, las denuncias sobre condiciones precarias de estos centros persisten a pesar de las inversiones realizadas.
- **Rediseño de Explanada y Reparaciones en la Sala "Presentes, Ahora y Siempre" - Parque de la Memoria.**
- **Instituto Superior de Arte del Teatro Colón - Bloque C. Adjudicada en febrero de 2023,** la remodelación de este bloque del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón buscaba mejorar la infraestructura del centro. Sin embargo, se ha criticado la constante necesidad de mantenimiento del teatro, señalando fallas estructurales recurrentes. **Tuvo un costo de 2.400.000 dólares.**
- **Casa de Medio Camino Ruy Díaz de Guzmán.** Proyecto adjudicado en **abril de 2023** bajo el **Ministerio de Salud**, centrado en la adecuación de un centro de contención social. A pesar de los fondos destinados, se han identificado irregularidades en la calidad de las intervenciones realizadas.
- **Casa de Medio Camino Av. Álvarez Thomas.**
- **Remodelación del CeSAC N° 15 - Ex Padelai.** Adjudicada en **julio de 2022**, esta obra tenía como fin mejorar la infraestructura de un centro de salud. No obstante, se han reportado sobrecostos y retrasos injustificados. Tuvo un **costo de 1.200.000 dólares.**
- **Remodelación del Servicio de Toxicología del Hospital General de Agudos J. A. Fernández.**

- **Centro Regional de Hemoterapia de la Ciudad de Buenos Aires.** Adjudicada en **abril de 2023**, esta obra buscó ampliar la capacidad de procesamiento de sangre. Sin embargo, la falta de información clara sobre el impacto real del proyecto genera dudas sobre su eficiencia. **Tuvo un costo de más de 1 millón y medio de dólares.**
- **Crisólogo Larralde 5085 y Galván - Trabajos de Rehabilitación.** Obra adjudicada en **noviembre de 2022** destinada a la rehabilitación de espacios. Se han registrado irregularidades en la contratación de proveedores y en la ejecución de los trabajos. **Tuvo un costo de 1.400.000 dólares.**
- **Trabajos de Ampliación Edilicia en la Escuela N°6 D.E. 12° - Yerbal 2750.** Este proyecto adjudicado en **noviembre de 2022** buscaba ampliar la infraestructura educativa. Sin embargo, padres y docentes han denunciado que la calidad de la construcción es deficiente y no se cumplieron los plazos estipulados.

La ciudad donde es más fácil conseguir una concesión que un alquiler

Los alquileres en la Ciudad son carísimos. A menos que quieras una concesión del Estado. En ese caso, si tenés la suerte de ser amigo de algún funcionario del PRO, vas a encontrar una variada y amplia oferta de negocios. En este apartado, con fines expositivos, sólo mencionaremos algunos de los más paradigmáticos.

Mercado de los Carruajes

El Mercado de los Carruajes, ubicado en la avenida Leandro N. Alem 852, es mucho más que un simple mercado gourmet. Se trata de un emblema de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, un predio que alguna vez albergó las cocheras presidenciales del siglo XIX y principios del XX. Con 4.200 m², el edificio forma parte del Patrimonio Histórico de la Ciudad, pero su reciente reconversión en un exclusivo polo gastronómico no sólo ha alterado su función original, sino que ha expuesto un entramado de vínculos, irregularidades y maniobras entre el Gobierno de la Ciudad y empresarios.

En sus orígenes, el edificio cumplió la función de “Cochera Presidencial”, resguardando los carruajes y, posteriormente, los automóviles oficiales de la Presidencia de la Nación. Sin embargo, en febrero de 2022, el sitio reabrió sus puertas convertido en un mercado de lujo, tras un proceso de concesión plagado de inconsistencias legales. **La Ciudad obtuvo el permiso de uso del inmueble sin pasar por la Legislatura porteña**, una omisión que contraviene la Constitución de la Ciudad, que exige una audiencia pública y doble lectura para este tipo de operaciones, según sus artículos 89 y 90.

Según Infobae, el proyecto se presentó como una inversión privada de 6 millones de euros³⁹. Está ubicado estratégicamente en el centro de Buenos Aires y cercano al puerto de cruceros, lo que garantiza una gran afluencia de visitantes locales y turistas. Pero detrás de esta fachada de modernización y desarrollo gastronómico, se esconde una historia de concesiones a medida y negocios cerrados entre funcionarios y empresarios con fuertes vínculos políticos.

La historia del Mercado de Carruajes y su proceso de reconversión a lo que es hoy el actual polo gastronómico comenzó en 2016, bajo la presidencia de Mauricio Macri y la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Según el diario El Cronista, en 2017 el Gobierno porteño llamó a una licitación pública para otorgar la concesión del predio a una empresa privada, con el objetivo de convertirlo en un "mercado de puestos minoristas y feria" y ayudar a convertir Buenos Aires en Capital Gastronómica de Latinoamérica⁴⁰.

En una primera instancia, la Ciudad le solicitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la cesión del predio con el argumento de transformarlo en un mercado gastronómico inspirado en los grandes mercados europeos. La AABE, en ese entonces dirigida por Ramón Lanús, aceptó la propuesta a cambio de un estacionamiento subterráneo acondicionado para la flota presidencial, ubicado a pocas cuadras. Así, la Nación cedió un edificio histórico con capacidad para 95 vehículos y recibió un estacionamiento para 480 autos.

Tal como expuso en su investigación Omar Lavieri en Infobae⁴¹ las negociaciones fueron encabezadas por la Dirección de Desarrollo Gastronómico, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, en ese momento bajo la conducción de Diego Santilli. La operación se cerró en 2017, con la firma de varias adendas que modificaron los términos originales. Uno de los cambios clave fue la ampliación del convenio: la Ciudad no sólo obtuvo el uso del predio, sino también el primer piso del edificio. En 2019, el acuerdo se extendió a veinte años, lejos de los cinco que se habían establecido en un principio.

Con el cambio de gobierno nacional en diciembre de 2019, la Agencia de Administración de Bienes del Estado revisó varias de las cesiones realizadas durante la gestión de Macri. Una auditoría reveló que, en este caso particular, antes de entregar el estacionamiento a la Ciudad, el Estado Nacional había asumido un gasto de 4 millones de pesos para acondicionarlo, mediante una obra que fue adjudicada a la empresa Caduri.

A raíz de estos hallazgos, la Oficina Anticorrupción, encabezada por Félix Crous, presentó una denuncia por administración fraudulenta en el fuero federal. La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con el fiscal Carlos Stornelli a cargo de la investigación. Se ordenaron peritajes, tasaciones y citaciones a funcionarios de la AABE.

El interrogante central es: ¿quién se benefició realmente con esta concesión? La licitación pública fue ganada por el grupo inversor Athenée Groupe, que en febrero de 2018 obtuvo la concesión del inmueble por cinco años. Sin embargo, a los pocos meses la empresa cambió de nombre y pasó a denominarse Mercado de los Carruajes S.A. La sorpresa llegó cuando se descubrió que **entre sus accionistas figuraban Marcos y Sonia Caputo, sobrino e hija de Nicolás Caputo, el empresario hermano de Luis “Toto” Caputo, e íntimo amigo de Mauricio Macri.**

Más allá de las investigaciones judiciales por la irregularidad en la entrega de un predio tan codiciado a una familia cercana a los gobiernos de la Ciudad y de la Nación en ese entonces, el caso del Mercado de los Carruajes es escandaloso también por las sumas irrisorias que se abonan de canon. En el año 2023 **pagaban un**

canon mensual de apenas 1 millón de pesos por un predio para más de 4 mil m2 con 40 locales. Si bien recientemente Jorge Macri lo actualizó a 2,9 millones de pesos, sigue estando lejos de los valores del mercado. Para tener una referencia, según La Nación⁴² en ese entonces un local comercial en el barrio de Palermo, de 150 m2, pagaba de alquiler entre 10 mil y 15 mil dólares.

No se trata de un caso aislado. La firma Mercado de los Carruajes S.A. se encuentra también vinculada a otros negocios con el Gobierno de la Ciudad. Empresas del grupo Caputo han obtenido contratos clave en la concesión del sistema de estacionamiento medido, en la venta de terrenos del ex Tiro Federal y en el desarrollo del Parque de la Innovación. Todo apunta a un esquema sistemático de adjudicaciones dirigidas, en el que un selecto grupo de empresarios cercanos a la gestión amarilla de la Ciudad ha multiplicado su presencia en las concesiones públicas.

La denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) involucra directamente a Ramón Lanús, Diego Santilli y Fernando De Andreis, pero las medidas judiciales del último tiempo indican que la lista de imputados podría ampliarse. La cesión del Mercado de los Carruajes es sólo una pieza más en el engranaje de la transferencia de bienes del Estado a manos privadas bajo condiciones altamente cuestionables. Lo que alguna vez fue un patrimonio histórico al servicio de la Nación, hoy es un exclusivo mercado gourmet administrado por los mismos apellidos que, desde las sombras, continúan moldeando los negocios en la Ciudad de Buenos Aires.

Paseo Gigena: un negocio de Toto Caputo que puede dejar sin agua a la Ciudad

Existe en la Ciudad un **negocio paradigmático**, que bien puede considerarse un “ícono” de la “gestión” amarilla: apellido ilustre por detrás, perjuicio para las arcas del Estado, negocio inmobiliario y riesgo para los vecinos de Buenos Aires. Estamos hablando del escandaloso **Paseo Gigena**. Es un proyecto inmobiliario y comercial ubicado en lo que se conocía como Ámbito Gigena o Playa Gigena, un antiguo estacionamiento situado entre el Hipódromo y el Rosedal de Palermo en Buenos Aires. La antigua estructura fue convertida en

edificio de oficinas de Clase A y locales. Son 3.071 m² que corresponderían a oficinas, locales gastronómicos y comerciales⁴³. El edificio también contaría con aproximadamente 250 plazas de estacionamiento.⁴⁴

El proyecto comenzó en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con la discusión de la Ley 6.086 que el gobierno porteño impulsó en la Legislatura de la Ciudad⁴⁵. Se aprobó el 6 de diciembre de 2018 y permitió modificar la zonificación y autorizó al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión el uso y la explotación del llamado “Ámbito Gigena” por un plazo de 15 años, con posibilidad de extenderlo por 5 más. Es decir, para habilitar este negocio se utilizó un instrumento muy conocido para la gestión porteña, los convenios urbanísticos (ver en el capítulo sobre negocio inmobiliario).

BSD ganó la licitación pública para desarrollar el proyecto inmobiliario sobre el antiguo estacionamiento del Hipódromo en 2019⁴⁶. Con la aprobación de la Ley 6.086, se procedió a la adjudicación de la concesión, que se realizó en el año 2020 (Resolución 2020/64/GCABA/MDEPGC) a la Unión Transitoria Masbor S.R.L.- BSD Grupo Asesor S.A. Al poco tiempo, la empresa Masbor fue reemplazada por Fideicomiso Dorrego y Libertador. En distintos medios periodísticos y de investigación ha circulado que el grupo económico de Fideicomiso Dorrego y Libertador se encuentra vinculado a la consultora financiera Anker, fundada por el actual ministro Luis Caputo y que tiene por socio a Santiago Bausili, el actual presidente del Banco Central. Porque la derecha argentina podrá vestirse de amarilla o violeta, pero el color que verdaderamente los emociona es el verde dólar estadounidense.

Según figura en la página de arquitectura y diseño de Arch Daily en Español, el proyecto fue diseñado por la oficina de arquitectura estadounidense ODA como su primer proyecto de uso mixto en la ciudad porteña. El equipo incluye también la participación del estudio Aisenson, Inscape Landscape, Coinsa y el desarrollador BSD Investments⁴⁷. La intervención comenzó finalmente en septiembre del 2021. Una de las empresas constructoras es **Coinsa**, cuyos directores son Martín y Matías Maccarone. Este último **fue sumado por Caputo** al gobierno de Milei para manejar la obra pública⁴⁸ y su

esposa, Teresa Zampino, aportó 500 mil pesos a las campañas del PRO. Según Emilia Delfino, de elDiarioAR, **la empresa financiera que Caputo dirigía antes de ingresar a la función pública con Macri, Axis Inversiones, alquilaba oficinas en el edificio de Coinsa, en la calle Godoy Cruz, en el barrio de Palermo.**⁴⁹ Tal como informa La Nación, la inversión inicial total era de u\$s 28 millones y la obra estaba programada para concluir en el mes de marzo de 2023.⁵⁰

La obra, que debería haberse finalizado para marzo de 2023, no pudo cumplir con los plazos establecidos. Esto se debió a que hubo un “error de cálculo”, ya que **construyeron el edificio sobre caños maestros que proveen de agua potable a 500 mil vecinos** porteños. Según la investigación llevada adelante por Emilia Delfino, cuando la obra estaba casi lista, **Aysa**, la empresa pública de aguas, se **negó a habilitar los servicios de agua y cloacas** hasta que no se finalizara la obra hídrica mayor, debido al riesgo que correrían el edificio y las personas por la ubicación de caños de alta presión debajo del paseo comercial. **Según Aysa, nunca se debería haber desarrollado la obra sobre los caños maestros, pero el proyecto se llevó adelante de todos modos.**⁵¹

¿Los desarrolladores inmobiliarios no sabían acerca de la existencia de los caños maestros de Aysa?, ¿se dieron cuenta de su existencia con la obra ya avanzada? ¿O sabían y decidieron avanzar con la obra de todos modos? Lo que sí afirman distintas fuentes periodísticas es que **no hubo un estudio de impacto ambiental ni una audiencia pública sobre el proyecto**, tal como lo prevé la ley N° 123 de la Ciudad⁵². Queda claro que, si se hubiera hecho en tiempo y forma un estudio de impacto ambiental, se podría haber analizado con información y criterio la viabilidad del proyecto.

Y, por otro lado, ¿qué significa que no haya habido una audiencia pública para presentarle a los vecinos y a la comunidad porteña este proyecto? La audiencia pública es una oportunidad para que la ciudadanía acceda a la información detallada sobre un proyecto en cuestión. Es una oportunidad para los funcionarios, porque recepciona en pie de igualdad las diferentes posiciones frente a un tema objeto de decisión, y para la gestión, pues transparenta la ejecución de un acto administrativo. Al negarle a la sociedad la posibilidad de conocer, debatir y cuestionar decisiones que afectan su

vida cotidiana, el GCBA elige la opacidad sobre la transparencia. Esta maniobra no solo restringe el debate público y la deliberación colectiva, sino que consolida un modelo de toma de decisiones discrecional, sin contrapesos ni controles ciudadanos⁵³.

Finalmente, **fue el Gobierno de la Ciudad el que salió a salvar el emprendimiento inmobiliario, aportando \$3.019 millones para el financiamiento de la compleja obra hídrica que debe realizarse.** Se buscó solucionar el problema moviendo los dos caños maestros, lo cual implicó destinar fondos millonarios en el Presupuesto 2024.

Según el informe de prensa de Aysa, “el predio de Palermo quedará durante **dos décadas en manos del inversor privado** y, si bien los concesionarios tenían previsto abonar mensualmente 200.893 unidades de compra, el equivalente a 62 mil dólares, o el 7% de lo recaudado como canon, según eligieran los funcionarios de la CABA, **el acuerdo que finalmente se cerró incluye que la concesionaria no pagará el canon durante ocho años.** El documento fue suscripto por AySA, la compañía desarrolladora BSD, dirigida por Pablo Ludmer y Matías Hodara y el gobierno porteño. En síntesis, el presupuesto inicial de la megaobra hídrica es 48 veces el canon mensual que la Ciudad va a cobrar por la concesión del espacio público, por lo que el emprendimiento terminó siendo un alto costo para las arcas del Estado porteño⁵⁴.

**MINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PUBLICAS 2024-2026**

(en pesos)

Denominación	Inversión Total	Inversiones		
		Anteriores	2024	2025
CIENGA	3.019.767,647	0	3.019.767,647	0
EDIFICIO ELA	513.974,591	0	513.974,591	0
EDIFICIO ELA	513.974,591	0	513.974,591	0
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA	170.072.848,761	14.766.807,981	80.386.914,334	45.294.944,070
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URB	48.529.687,812	4.161.374,334	30.047.475,506	14.320.837,972
NUEVA INFRAESTRUCTURA URBANA	47.413.796,188	4.086.374,334	29.233.885,354	14.093.536,500
CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL V - MARCOS PAZ-PCIA. BUENOS AIRES	44.399.908,357	1.072.486,503	29.233.885,354	14.093.536,500
CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL V - MARCOS PAZ-PCIA. BUENOS AIRES	3.013.887,830	3.013.887,830	0	0
A.CU.MA.R.REGENERACION URBANA	1.115.891,624	75.000,000	813.590,152	227.301,472
CAMINO DE SIRGA ETAPA V	1.115.891,624	75.000,000	813.590,152	227.301,472
PROG.GEST.RIESGO HIDRICO (PG	121.543.160,949	10.605.433,647	50.339.438,828	30.974.106,098
COMPONENTE MEDIDAS ESTRUCTURAL	100,041.950,551	7.222.829,127	32.220.832,950	30,974,106,098

Fuente: Extracto del plan plurianual de obra de la Ciudad, Ley de Presupuesto 2024.⁵⁵

En la investigación llevada adelante por Emilia Delfino en elDiarioAR, se muestra que en el contrato no hay mención alguna a que el edificio se construiría sobre los caños maestros de Aysa y que requeriría una megaobra de infraestructura para operar.⁵⁶

En definitiva, el Paseo Gigena demuestra un entramado de empresarios vinculados al oficialismo porteño y nacional, entre los que se encuentra nada más y nada menos que Luis “Toto” Caputo, Ministro de Economía de la Nación y familiar de otro contratista importante de la Ciudad, Nicky Caputo, quienes llevan adelante un negocio a expensas de las arcas públicas y que pone en riesgo la provisión de agua a una parte importante de los vecinos.

El caso del proyecto inmobiliario del Paseo Gigena deja en evidencia, una vez más, quiénes sacan provecho del maxikiosko porteño. En lugar de priorizar el interés público y el acceso equitativo al espacio urbano, el Gobierno de la Ciudad cede tierras estratégicas al negocio inmobiliario, consolidando un modelo de gestión que favorece a unos pocos a costa del derecho de las mayorías. La falta de instancias de participación ciudadana y la opacidad en el proceso reflejan una lógica donde el mercado dicta las reglas y el Estado se pliega a sus intereses.

¿A quién contrata Buenos Aires?

Tras un año y tres meses de gestión de Jorge Macri, se realizó un **análisis exhaustivo de los procesos de compras y contrataciones publicados en los portales Buenos Aires Compras (BAC) y Buenos Aires Obras. En el BAC se registraron 8.242 procesos**, que incluyen contrataciones directas, contrataciones menores, licitaciones públicas y licitaciones privadas. Por su parte, en Buenos Aires Obras, el portal dedicado a los procesos de contratación de empresas vinculadas a la obra pública porteña, se identificaron 92 procesos. Sin embargo, es importante señalar dos limitaciones: la información disponible en ambos portales puede ser incompleta, omitiendo datos relevantes, y en algunos casos, ciertas contrataciones no aparecen publicadas.

Un ejemplo significativo es el caso de los "cárcel containers": no queda claro si el Gobierno de la Ciudad solicitó un bien específico a un

proveedor fuera de los términos de la licitación ni cómo se adquirió dicho servicio, a pesar de las reiteradas consultas de periodistas y legisladores porteños. Esta opacidad refleja una de las críticas recurrentes al sistema de compras de la CABA: la falta de transparencia, especialmente en modalidades como los convenios marco y las contrataciones directas por urgencia, que reducen la competencia y facilitan adjudicaciones direccionadas, según se desprende de las críticas a la Ley 2.095 y sus modificaciones.

En este período, se comprobó que la Ciudad destinó **\$1.158.564.996.550 a contrataciones con el sector privado, más de mil millones de dólares**. A pesar de esta significativa inversión, la calidad de los servicios públicos continúa siendo deficiente, lo que pone en duda la eficiencia del gasto. Entre los principales ministerios que realizaron contrataciones —excluyendo obra pública— destacan el Ministerio de Salud, con \$146.234.021.554; el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, con \$274.797.274.103; y el Ministerio de Educación, con \$93.648.370.894.

Las críticas al sistema de compras aportan contexto a estos números. Por un lado, el excesivo uso de la contratación directa —justificada por excepciones como urgencia, exclusividad o montos menores— ha sido señalado como una práctica habitual que favorece a proveedores recurrentes y limita la competencia. Por otro lado, las licitaciones públicas, aunque digitalizadas a través del BAC, enfrentan demoras y una burocracia que desalienta la participación, especialmente de PyMEs, debido a requisitos administrativos complejos y pliegos con especificaciones restrictivas o sesgadas que parecen diseñados para beneficiar a ciertos oferentes. Esto contribuye a la concentración del mercado en un grupo reducido de empresas, lo que puede derivar en precios más altos y menor calidad en los servicios contratados.

A esto se suman problemas tecnológicos en el BAC, como errores en la carga y validación de documentación, fallas en las notificaciones automáticas y caídas del sistema en momentos de alta demanda, que generan incertidumbre y dificultan el acceso de los oferentes. Además, la escasa planificación estratégica de las compras públicas lleva a contrataciones urgentes, en lugar de optimizar los recursos

mediante una visión de largo plazo. Estos inconvenientes evidencian que, pese a los avances en digitalización, persisten fallas estructurales que afectan tanto la transparencia como la eficiencia del sistema.

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Los principales clientes del maxikiosco

A lo largo de este libro nos propusimos mostrar cómo la ciudad parece un gigantesco maxikiosco de concesiones. Luego de 2 décadas de gobierno del PRO, Buenos Aires se encuentra atrapada en un complejo entramado en el que se entrelazan los intereses de las empresas contratistas y los del partido gobernante.

Cuando hablamos de los servicios que contrata el Gobierno de la Ciudad para su funcionamiento y la provisión de distintos servicios, hablamos de un **negocio billonario en pesos**. De miles de millones de dólares. Durante el año 2024, se destinaron más de **\$2,3 billones de pesos, unos 2 mil millones de dólares en tercerizaciones de servicios**. Algunos de los principales gastos fueron los siguientes:

- El servicio completo de Higiene Urbana costó \$674.612.764.802, casi 600 millones de dólares.
- Los Servicios De Comidas, Viandas Y Refrigerios unos \$268.545.095.835, más de 233 millones de dólares.
- El Mantenimiento De Espacios Verdes \$219.371.016.177, más de 190 millones de dólares.
- La Limpieza, Aseo Y Fumigación unos \$158.791.333.392, el equivalente a 138 millones de dólares.
- El Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales \$132.726.210.553, más de 115 millones de dólares.
- Los servicios especializados y de consultoría suman \$78.141.969.958, casi 70 millones de dólares.
- La seguridad privada con \$119.509.636.047, 103 millones de dólares o la seguridad de SBASE por \$11.268.657.852, casi 10 millones de dólares.
- Los distintos servicios para limpiar establecimientos educativos por \$45.339.875.062, casi 40 millones de dólares
- El mantenimiento de las veredas por \$72.791.339.577, 63 millones de dólares.

Ahora, y antes de presentar algunas herramientas para empezar a cambiar este modus operandi en la Ciudad, vamos a contarles la historia de los principales actores y jugadores entre los contratistas del macrismo.

Ahora, y antes de presentar algunas herramientas para empezar a cambiar este modus operandi en la Ciudad, vamos a contarles la historia de los principales actores y jugadores entre los contratistas del macrismo.

Los Caputo, una historia de poder y negocios en la Ciudad

Nicky Caputo es el amigo del alma de Mauricio Macri. Como vimos a lo largo de este libro, tiene numerosos negocios vinculados con el Estado porteño. El vínculo con el ex Presidente y ex Jefe de Gobierno comienza en el colegio Cardenal Newman, donde fueron compañeros. También compartieron la carrera de ingeniería en la UCA, hasta que Caputo la dejó. Cuando a Macri lo secuestraron en la década del 90, su amigo fue el encargado de llevar los 6 millones de dólares de rescate a la Isla Maciel. Fue el vicepresidente 1° fundador del PRO. Y su empresa Mirgor, con la cual recibe miles de millones de dólares en subvenciones públicas en Tierra del Fuego, fue fundada por Macri.

Es uno de los argentinos más ricos del país. De hecho, la revista Forbes, en su famoso ranking de personalidades con más capital, lo ubicó en el puesto 34° en el año 2020. Ingresó al blanqueo que promovió su amigo Mauricio cuando era el Presidente de la Nación. Y, unos años antes, había creado cuentas offshore en paraísos fiscales.

Nicolás Caputo heredó de su padre la firma Caputo Hermanos S.A., fundada por su abuelo. Es necesario hacer una salvedad: no es la misma empresa que está siendo investigada por el intento de magnicidio de Cristina Fernandez de Kirchner, que fue creada en 2004 por los primos del empresario.

Nicolás Caputo fue el fundador de SES S.A. En 1991, era dueño del 50% del paquete accionario, mientras que el otro 50% le correspondía a Diego Pelizzatti, un ex ejecutivo de SOCMA, propiedad de la familia Macri. A través de esta empresa, N. Caputo logró expandirse en múltiples rubros y convertirse en el principal beneficiario de redeterminaciones de precios y concesiones de servicios clave, como la gestión del arbolado público y la limpieza de edificios públicos.

Además, con el aval de los sucesivos gobiernos del macrismo en la Ciudad ha recibido excepciones inmobiliarias para incrementar el valor de los terrenos y, en algunos casos, logró cuadruplicar el valor del metro cuadrado en algunas parcelas de la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de que en el año 2018 Caputo intentó deshacerse de sus empresas, se demuestra que tanto él como Mauricio Macri están vinculados con los supuestos compradores, entre los que aparecen nombres relacionados con el escándalo de los parques eólicos que investiga el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, por ejemplo, Daniel Lizzano y Esteban Nofal.

Empresas vinculadas con Nicolás Caputo poseen actualmente el mantenimiento y limpieza de alrededor de **300 escuelas; 15 hospitales**, entre los que se encuentran el Ramos Mejía, Ameghino, Tornú, Moyano y Dueñas; teatros como el Colón y el General San Martín; y algunas dependencias públicas de la Ciudad. También, los **polideportivos** administrados por el Estado Porteño, el Instituto del Transplante y el Centro Verde de Barracas.

Un ejemplo elocuente de la proximidad entre Caputo y la administración del PRO es el **mantenimiento de la Sede de Gobierno de la Ciudad**, a cargo de la empresa SES (la cual Nicolás Caputo fundó con la titularidad del 50%, según el estatuto) por un contrato de \$165.000.000, que fue prorrogado en dos oportunidades. La última venció el 30 de junio de 2022 y no figuran más prórrogas o continuación del contrato al día de finalización del informe. También se vincula al empresario con la **explotación del Mercado de los Carruajes**, ubicado en Alem 852, en el barrio de Retiro, y con la firma que se encargará del cobro del estacionamiento medido.

Para llevar estos negocios a cabo, en varias oportunidades Caputo utilizó un mecanismo denominado Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.). Esta forma de proceder implica que dos o más sociedades se constituyen temporalmente como una única entidad para realizar una obra o prestar un determinado servicio, compartiendo las ganancias y soportando las pérdidas. A través de este procedimiento, varias empresas ingresaron a los contratos suntuosos de la Ciudad de

Buenos Aires y SES S.A. se posicionó como una de las contratistas favoritas de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Este mecanismo se dio, incluso, realizando tareas no contempladas en el objeto social decidido por los socios al momento de conformar la sociedad. A partir de este instrumento, las empresas de Caputo lograron participar de los más variados negocios, **convirtiéndose en una de las mayores contratistas de la administración porteña.**

Según el Auditor General de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, SES S.A. recibió contrataciones por más de \$1.200.000.000 entre 2008 y 2015.⁵⁷ Para entender la magnitud de este dato, debe recordarse que el valor del dólar ilegal en ese período estuvo alrededor de los 4 pesos hasta el 2011, subiendo desde el año siguiente hasta 14 pesos. **Estamos hablando de cientos de millones de dólares en contratos con el Estado.** Sin contar lo que sucedió en los últimos 9 años, en los que siguió teniendo negocios con la Ciudad.

Durante la campaña presidencial del año 2015, en una entrevista con Jorge Lanata, Mauricio Macri aseguró: “Caputo S.A. no licitó una sola obra en mi gestión”⁵⁸. Sin embargo, omitió la participación de SES S.A., que comenzó como una empresa constructora y, a través de la participación en sociedades y unión transitoria de empresas, amplió notablemente sus rubros de participación.

Así, como empresa constructora, años más tarde incursionó en mantenimiento integral de edificios, poda de árboles y mantenimiento de espacios públicos, entre otros. La nota característica es que para ganar licitaciones del Gobierno de la Ciudad realizó varias uniones transitorias, todas ellas con empresas que también poseen numerosos contratos con la Ciudad. Por ejemplo, ha trabajado junto a MIG S.A., Mantelectric, Planobra y LX Argentina, todas empresas mencionadas en este libro. Como se puede observar, **a partir de la llegada de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno en el 2007, SES S.A. se convirtió en una de las primeras contratistas de la gestión porteña,** accediendo a las licitaciones por medio del mecanismo de Unión Transitoria de Empresas. Veamos en detalle los negocios de la empresa:

SES SA.

HOSPITALES	ESCUELAS	TRANSPORTE	ESPACIOS VERDES	TEATROS / INSTITUCIONES
Hosp. Dr. J.M. Ramos Mejía	Comuna 1 y 2: 58 escuelas	Metrobús: mantenimiento integral y limpieza del Corredor Juan B. Justo	Zonas B y C	Usina del Arte
Hosp. Dr. E. Tomú	Valor Patrimonial	Subte: obras viales	Comunas 13 y 14	Teatro Gral. San Martín
Hosp. Municipal de Odontología Dr. J. Dueñas	18 escuelas			Teatro Colón
Hosp. Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano				Casa de Gobierno Uspallata
Centro de Salud Mental N3 de Dr. A. Ameghino				Instituto del Transplante
				Polideportivos del GCBA
				Centro de Reciclado de Barracas

Fuente: Página web de SES S.A. (<https://www.ses-sa.com.ar/mantenimiento.php>)

SES S.A. - Mantelectric

La poda de árboles en la Ciudad de Buenos Aires es motivo de fuertes cuestionamientos en materia ambiental, al punto que hubo diversos fallos que suspendían la tala indiscriminada. Uno de ellos, que data de febrero de 2021, demostró que el monto que el GCBA abonaba por esta actividad en 2012 era \$163,54 y que, para 2015, Mauricio Macri lo había aumentado a \$878.⁵⁹ **Un 500% más en tres años.**

Entre las principales beneficiadas por esta redeterminación de precios figura **Mantelectric I.C.I.S.A.**, una empresa que, en Unión Transitoria con SES S.A., obtuvo contratos millonarios en las Comunas 13 y 14. Conocida como “el rey del espacio público” por la cantidad de concesiones recibidas, Mantelectric también tiene un historial de aportes a las campañas del macrismo.

Bajo la gestión de Rodríguez Larreta, la empresa siguió ganando licitaciones en áreas donde no tenía experiencia, como poda de árboles y reparación de veredas. En 2019, la U.T.E. de SES S.A. y Mantelectric fue adjudicada, a pesar de ni siquiera haber estado debidamente registrada. Según la propia resolución oficial, el inicio del servicio quedó condicionado a que las empresas completaran los trámites pendientes y fueran incorporadas a los sistemas del GCBA.

Pero la irregularidad más grave en esta situación es que ni SES S.A. ni Mantelectric tenían en su objeto social la prestación de “Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes”. Aun así, sin antecedentes en el rubro, fueron las elegidas para manejar la poda y el mantenimiento en las comunas más cotizadas de la Ciudad.

Contratos para obras de construcción y mantenimiento edilicio

Otro rubro en el que la empresa de Nicolás Caputo ha obtenido importantes negocios con la Ciudad es en obras de construcción y mantenimiento edilicio. A través de una U.T.E. con Construere Ingeniería S.A.⁶⁰, ha realizado las siguientes obras entre 2011 y 2022: Red de Captación Pluvial VII, Paso Bajo Nivel Congreso, Paso Bajo Nivel Donado, Paso Bajo Nivel Iberá y Paso Bajo Nivel Besares⁶¹. Además, la Unión SES - Construere también obtuvo un suntuoso contrato para la tercera etapa de la Central Obelisco⁶². La empresa realizó también obras de adecuación a la red de subte en las estaciones Plaza de Mayo y Retiro, de las líneas A y E, respectivamente.

Además, la Ciudad ha otorgado a Caputo proyectos de gran relevancia como la remodelación del Centro Metropolitano de Diseño en Barracas o la construcción de la Usina del Arte. Por esta última licitación, comenzada en julio de 2007 bajo la gestión porteña de Jorge Telerman, la empresa obtuvo \$324 millones, cuando la cotización inicial de la obra ascendía a la suma de \$54,5 millones. Es decir, que durante la administración de Mauricio Macri, el GCBA abonó a la compañía \$250 millones que no fueron previstos en el contrato firmado entre las partes⁶³. La obra recién fue inaugurada en 2011.

Desarrollos inmobiliarios de lujo

En cuanto a construcción, **“Desarrollo Caballito”** es la marca que comprueba la connivencia de las administraciones del PRO con el grupo Caputo. El Ejecutivo de la Ciudad vetó la ley que limitaba la construcción en altura en esa zona para que se pudiera realizar detrás de la cancha de Ferro un emprendimiento de 35 pisos que hoy modifica, por su altura, las condiciones de vida de todo el barrio.

Caputo S.A.I.C.F., la firma familiar destinada a la construcción, fue vendida en 2018 a **TGLT** por 109 millones de dólares, en una operación que incluyó a SES S.A.⁶⁴. TGLT por entonces era propiedad de **Darío Lizzano**, a quien se pudo ver junto a Mauricio Macri recorriendo **Parques Eólicos**. Posteriormente estaría en la mira de la Justicia por este negocio.⁶⁵

La operación de venta fue investigada por la Comisión Nacional de Valores debido al monto por el cual se adquirió la empresa y a una supuesta irregularidad en el proceso⁶⁶. Antes de comprar la empresa de Caputo y según consta en sus balances, TGLT acumulaba patrimonio neto negativo y pérdidas recurrentes, además de obligaciones por 150 millones de dólares, que había tenido que renegociar por imposibilidad de cumplir.

TGLT estuvo en la escena pública por el emprendimiento inmobiliario **“Astor San Telmo”**, luego frenada por el Tribunal Superior de Justicia porteño, por considerar que la obra ignoraba el Código Urbanístico. En las instancias anteriores, el fallo fue apelado por TGLT y por el propio Gobierno de la Ciudad. Llamativamente, en medio del proceso judicial, la sociedad cambió de nombre a GCDI, pero **mantuvo el mismo domicilio legal que Mirgor y TGLT**.

Otro desarrollo inmobiliario para destacar es el de los **edificios Quartier**. Se amplían a diario en toda la Ciudad y la empresa encargada de realizarlos es **Argencons**, que pertenece a Miguel Camps⁶⁷, de estrecho vínculo con Caputo.

En el proyecto Quartier Retiro, **Caputo S.A.I.C.F.** intervino como un actor determinante, ya que **el terreno donde tuvo lugar la construcción le pertenecía**. Lo había adquirido por casi 6 millones de dólares y logró venderlo a 23 millones de dólares años más tarde. En ese período de tiempo, la Legislatura porteña, con mayoría del PRO, **aprobó la rezonificación del lugar y cuadruplicó su valor inmobiliario**. Ariel Turkie, socio en Argencons, es a la vez **socio de TGLT, la compradora de Caputo S.A.I.C.F.**

En julio de 2024, TGLT decidió vender el 50% de SES S.A. El comprador fue **CIMA Investments**, liderado por **Esteban Nofal**.⁶⁸ Este empresario fue citado a declarar por actuar como **intermediario entre el Grupo Macri y la empresa china Goldwind**, que adquirió la mayor parte de los **proyectos de parques eólicos a la familia del expresidente**⁶⁹. Lo sorprendente es que, **al igual que Daniel Lizzano de TGLT**, estuvo investigado por la venta de Parques Eólicos durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Será casualidad que los dos compradores de la empresa de Caputo estén vinculados a uno de los negocios más polémicos del ex Presidente Macri?

Compra de terrenos en el ex Tiro Federal

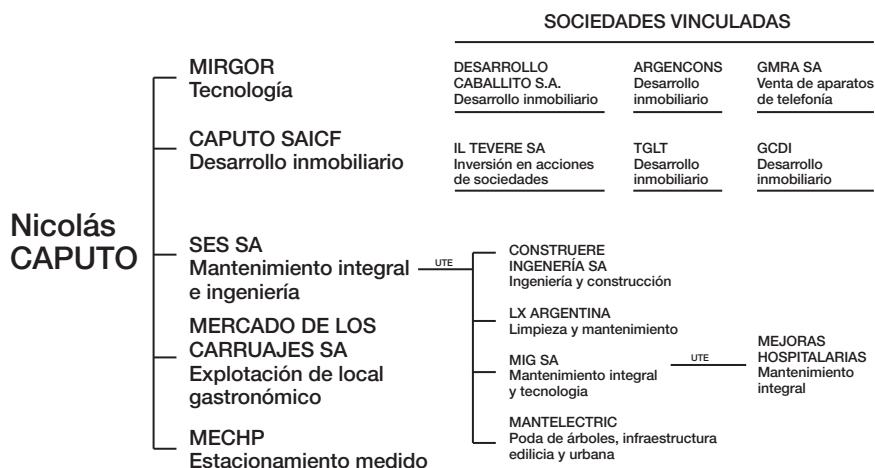
El empresario Nicolás Caputo también figura entre los compradores del ex Tiro Federal, donde el Gobierno de la Ciudad vendió 12 hectáreas de tierras públicas para construir el **“Parque de la Innovación”**.

GMRA SA, una empresa del Grupo Mirgor fundada por Mauricio Macri y Nicolas Caputo que se dedica a la venta de teléfonos, adquirió 402 m2 por 5,7 millones de dólares, a precio de dólar oficial, y con el beneficio de poder abonar en cuotas.

Otros negocios

- **El Mercado de los Carruajes:** un negocio de 4 mil m2 por el que sólo pagaban, en 2023, un millón de pesos de canon, una cifra considerablemente inferior al precio de mercado.
- Por último, cabe mencionar la situación del **estacionamiento medido** que, tras la sanción de la Ley 6353, digitalizó su cobranza. La empresa ganadora de la concesión fue **MECHP**, que según el Boletín Oficial explota bienes, bares y confiterías, y realiza eventos. Se otorgó una licitación a un proveedor sin experiencia previa en el rubro y cuyos socios comparten con el hijo de Nicolás la administración de canchas de fútbol en Puerto Madero⁷¹.

Mapa del holding de Nicolás Caputo:



La evidencia expuesta demuestra que Nicolás Caputo ha sido, y continúa siendo, uno de los principales beneficiarios de las gestiones del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Desde que este espacio político asumió el poder, las contrataciones, licitaciones y aprobaciones de obras han estado marcadas por irregularidades sistemáticas, con procesos que vulneran normativas vigentes y favorecen a un reducido grupo empresarial. Detrás de cada contrato, cada concesión y cada redeterminación de precios, se esconde un

entramado de negociados que ha consolidado la fortuna de Caputo a expensas del Estado y de los recursos públicos.

Grupo Roggio

El grupo Roggio, como se contó detalladamente en este libro, tiene entre sus principales negocios con la Ciudad la **concesión del Subte**, a través de una de sus empresas, Emova (antes Metrovías). Son los responsables del pésimo servicio, a la vez que tienen un negocio donde se facturan a sí mismos y dibujan costos que luego el Gobierno de la Ciudad se encarga de trasladar a los usuarios a través de la tarifa.

Pero también son responsables de otro de los pésimos servicios de la Ciudad: **la recolección de la basura**. A través de una empresa del grupo, Cliba, son los responsables de las Comunas 2, 13 y 14, es decir, de todo el norte de Buenos Aires. Recordemos que la basura es el principal contrato del gobierno porteño, con un costo que suele rondar el 7% del total del presupuesto porteño, que este año alcanza los 11 mil millones de dólares.

Pero los negocios del Grupo Roggio con la Ciudad no se reducen solamente a los rentables contratos del subte y la basura. A través de su empresa **Sehos**, realiza el **mantenimiento de 74 escuelas** en las comunas 10 y 14, con una superficie mayor a los 200 mil m². A eso debe sumarse el mantenimiento de los hospitales Dr. Cosme Argerich, Dr. Zubizarreta, Vélez Sarsfield, Santa Lucía, Quintela Martín y 17 Centros de Salud y Atención Comunitaria.

Además, realizó **obra pública**, como la construcción de pasos bajo nivel, como el de la calle Holmberg en Villa Urquiza, las ampliaciones de las líneas B y E, los pasos a nivel y construcción de vía secundaria para el viaducto del FC Mitre y el entubamiento del arroyo Vega. A su vez, tuvo a su cargo obras de infraestructura en escuelas y hospitales. Según un informe periodístico del portal el Diarioar⁷², **solamente desde 2015 en adelante, el Grupo Roggio embolsó 336 millones de dólares en obras**.

Mantelectric, los “reyes” del espacio público

Mantelectric es el paradigma de las empresas “polirrubros” que brindan servicios de lo más variados. Como hemos visto, en muchos casos asociarse con SES, la empresa de Caputo, fue la llave de entrada a diversos negocios en la Ciudad.

En la actualidad, la empresa tiene a su cargo el mantenimiento de numerosos servicios. En cuanto a **mantenimiento de edificios**, tiene la responsabilidad del trabajo en **150 escuelas, el Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” y el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand”**. También **realiza mantenimiento de comisarías**.

En septiembre de 2023 fue adjudicada para el trabajo de **alumbrado público** en la Zona 1, que comprende a las Comunas 1, 2, 3 y 4, es decir, desde Retiro hasta el Riachuelo, abarcando todo el macrocentro. **El monto total del contrato es de casi 6 millones de dólares**. A su cargo tiene el mantenimiento de más de 320 mil luminarias, además de haber instalado 380 mil. También posee los **semáforos** de 2.400 cruces de calles.

Además, tiene a su cargo el **mantenimiento del espacio público** de las Comunas 13 y 14, dos de las **zonas con más parques en toda la Ciudad**. También se encarga de la **poda de árboles y el mantenimiento de alcantarillado**. En total, son más de 2 millones de m² de espacios verdes, más de 500 mil árboles, el mantenimiento de 10 mil sumideros, 100 mil m² de mantenimiento en hospitales, 400 mil m² de escuelas, y 7500 m² de mantenimiento de comisarías.

En este libro, trabajamos una muestra no exhaustiva pero bastante amplia de servicios públicos tercerizados. Salvo en la basura y el mantenimiento de veredas, Mantelectric está presente en todos: mantenimiento de escuelas y hospitales, alumbrado, alcantarillado, poda de arboles, mantenimiento de espacios verdes, entre otros contratos con la Ciudad.

Los ganadores del negociado inmobiliario

Como vimos en el Capítulo 2, el Gobierno de la Ciudad facilitó los negociados inmobiliarios a partir de herramientas como el traspaso de inmuebles nacionales, destinados a la subasta y remate de tierras públicas, cuando el macrismo gobernaba ambos ejecutivos. También se valió de la modificación de los códigos urbanísticos y de edificación sin una previa planificación de la Ciudad a través de un Plan Urbano Ambiental y de la proliferación de normativas urbanísticas destinadas a generar excepciones a esos mismos códigos, concentrando aún más la actividad en las zonas más rentables para el mercado, inversiones alejadas de las demandas y necesidades de la población en general.

Si bien las consecuencias de este modelo en los indicadores habitacionales demuestran una pauperización de los sectores medios y populares, no todos salen perdiendo con estas políticas. Hay algunos pocos ganadores, empresarios poderosos con enormes patrimonios.

Sin dudas, uno de los mayores ganadores de este modelo especulativo es **Eduardo Elsztain**, un empresario propietario de **IRSA**, el Banco Hipotecario y CRESUD (agro), entre otras. Dueño de uno de los mayores patrimonios en el país, es un empresario muy cercano a **Javier Milei**. A tal punto es así, que el hotel donde el actual presidente se atrincheró poco antes de asumir es de su propiedad. Pero también tiene vínculos con el PRO. De hecho, el Gerente de Relaciones Institucionales de **IRSA**, durante 10 años, fue **Augusto Rodríguez Larreta**, hermano de Horacio. ¿Qué mejor responsable de las relaciones con instituciones públicas que un familiar del Jefe de Gobierno y anterior Jefe de Gabinete del ejecutivo porteño? En los negocios, la interna de la derecha parece no ser tal.

El proyecto más relevante en términos inmobiliarios es el de la **ex Ciudad Deportiva de Boca**, ahora denominado **Costa Urbana**. El predio originalmente fue destinado por el Congreso en 1964 para la Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors pero, tras problemas financieros, fue vendido en 1993. IRSA avanzó en el proyecto a través de gestiones con el Estado, aumentando la superficie constructiva mediante rellenos de antiguos islotes y logrando acuerdos con el Gobierno porteño para la financiación del parque público.

Este terreno, adquirido por IRSA en 1997 por aproximadamente 50 millones de dólares, permaneció abandonado por más de 25 años debido a complicaciones legislativas y judiciales. En 2021, la Legislatura porteña aprobó la rezonificación del predio, **permitiendo la construcción de un complejo urbano que incluirá 6 mil viviendas, oficinas, locales comerciales, escuelas, un hotel y un paseo costero peatonal.** La densidad constructiva **se asemeja a Puerto Madero** y organizaciones ambientalistas han criticado el impacto en los humedales costeros y en la gestión del agua.

El mecanismo por el que opera IRSA es el siguiente: **adquiere tierras públicas que tienen determinado valor y, a partir de sus conexiones políticas, consigue una normativa que amplía la capacidad constructiva y, por ende, el valor del suelo.** Sin realizar ninguna inversión logra multiplicar el valor de su activo solamente a partir de sus gestiones políticas. En este caso, tras lograr en 2021 el tratamiento y aprobación express, logró que en un terreno que habían adquirido por 50 millones de dólares, donde no estaba permitido construir viviendas, hoy puedan construirse hasta 850 mil m², según consigna Infobae⁷³. Teniendo en cuenta que se proyecta como un nuevo Puerto Madero, el valor del m² podría alcanzar entre los 5 mil y 6 mil dólares. Es decir, el emprendimiento inmobiliario, para el que IRSA deberá invertir alrededor de 1.800 millones de dólares, tiene un valor potencial de **entre 4.250 millones de dólares y 5.100 millones de dólares.**

Como dato adicional, tal es la magnitud del negocio, que el día que se aprobó el dictamen en comisión, **la acción de IRSA subió 28%** en los mercados bursátiles argentinos y 20% en la bolsa norteamericana.

Otro inmueble público que adquirió la empresa en la ciudad es el **Edificio del Plata**, ubicado sobre la Avenida 9 de Julio. La adquisición se realizó en 2016 a través del Banco Hipotecario por 68 millones de dólares. Se proyecta la construcción de 720 viviendas, además de espacios comerciales y de esparcimiento como pileta y gimnasio. El proyecto se beneficiará de exenciones impositivas del Gobierno porteño, que incluyen una deducción de entre el 50% y el 60% de la inversión total.

En el barrio porteño de Caballito también existe, sobre terrenos antiguamente públicos, un megaproyecto que enfrenta fuertes cuestionamientos y denuncias. IRSA adquirió el **Playón de Caballito** en 1997 por 6,5 millones de dólares con el objetivo de construir un shopping, pero enfrentó resistencia de los vecinos. En 2019 vendió una parcela por 5,5 millones de dólares para la construcción de un edificio de 10 pisos con planta baja comercial.

En 2020, durante la pandemia, IRSA intentó construir Ciudad Palmera, que contempla diez edificios, un shopping y estacionamientos. Para evitar el debate legislativo, **presentó un plan fragmentado en cuatro parcelas independientes.**

En una nota al medio periodístico Tiempo Argentino, un miembro del consejo consultivo del barrio sostuvo que “IRSA logra que la Ciudad divida el predio en cuatro parcelas, afirmando que en cada una de ellas se levantará un proyecto totalmente independiente de los otros. Y aquí está el punto clave sobre el que decidirá la Justicia. Si el acto administrativo por el cual se parceló el terreno es válido o nulo”.

La justicia frenó la obra tras detectar irregularidades, incluyendo un certificado de impacto ambiental con datos falsos. Se prevé que la Cámara de Apelaciones defina sobre la continuidad del proyecto.

IRSA también vendió el **Edificio República**, ubicado en el complejo Catalinas Norte, al Grupo Petersen por 131,8 millones de dólares. La operación incluyó un pago de 105,1 millones en efectivo y la entrega de un predio de 46 hectáreas en Quilmes. Este edificio había sido adquirido por IRSA a través de una compulsión pública en 2008 por 70,2 millones de dólares. La venta se enmarca en una estrategia de especulación inmobiliaria del grupo, que previamente compró terrenos en Catalinas Norte I y Catalinas Norte II durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad.

Otro inmueble que adquirió IRSA se ubica en Beruti y Coronel Díaz, donde actualmente funciona la **Sede Comunal N° 14**. El Gobierno porteño lo subastó en 2022 con un precio base de 20 millones de dólares, y fue adjudicado a IRSA por apenas 20,1 millones. Organizaciones denunciaron que la venta se realizó a un precio inferior

al del mercado, con un valor de 1.186 dólares por metro cuadrado debido al pago en pesos al tipo de cambio oficial.

Entre los negocios de la empresa también se encuentran varios de los shoppings de la Ciudad que han operado con habilitaciones ambientales vencidas o sin cumplir la normativa vigente. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, **Distrito Arcos, Alto Palermo y Dot Baires Shopping** no contaban con Certificado de Aptitud Ambiental vigente, mientras que **Abasto Shopping nunca obtuvo uno. Otros, como Patio Bullrich, Paseo Alcorta y Buenos Aires Design, tenían permisos irregulares.**

Además, **Distrito Arcos, Abasto Shopping y Alto Palermo** fueron denunciados por ocupar espacio público de manera ilegal. Distrito Arcos debía ceder 23 mil m² de un playón ferroviario, pero no lo hizo. Abasto Shopping convirtió una plaza pública en un área privada y Alto Palermo incumplió una ordenanza que prohíbe locales comerciales en calles públicas.

Otro de los grandes ganadores de los negociados inmobiliarios de la Ciudad es **Gerardo Werthein**, a quien le fue adjudicada, a través del Fideicomiso Financiero Buenos Aires LandMark, parte del Parque de la Innovación (ex Tiro Federal) por **5.600 millones de pesos, o 151 millones de dólares**. Se construirán torres de hasta 100 metros, con capacidad constructiva por 150 mil m². Werthein compró a mil dólares el m² y podrá vender a 5 mil o 6 mil dólares por m², según información pública acerca del valor por m² en el barrio de Núñez. La ganancia crece a 750 millones de dólares.

Pese al negocio, por primera vez se permitió el **pago en cuotas**. Por eso, las tierras para la urbanización de la Villa 31 y 31 bis tuvieron que pagarlas mediante la toma de un crédito. Es decir, el financiamiento que Werthein no tuvo que buscar en el sector privado lo hizo la Ciudad. **Los porteños y las porteñas aportamos el financiamiento para el negocio inmobiliario.**

No sólo ahí termina el gran negocio privado. **Parte de lo recaudado por el polígono A será invertido en infraestructura en el polígono C** (Parque de la Innovación). Es decir que, como pasó con

Puerto Madero, la inversión del privado vuelve a partir de la obra pública estatal, que valoriza la zona y **le garantiza el retorno de la inversión al privado con mayor valor por m2.**

El caso de **Werthein** es otro donde los intereses de la derecha argentina se tocan. Beneficiario de uno de los grandes negocios inmobiliarios del PRO, hoy también es **funcionario del Gobierno de Javier Milei**, nada más ni nada menos que ocupando el influyente rol de Ministro de Relaciones Exteriores, luego de su paso por la embajada norteamericana.

Eduardo Constantini, un empresario vinculado al sector financiero, también se quedó con un negocio importante en la Ciudad. El dueño de Nordelta, y uno de los hombres más ricos del país, compró terrenos linderos al Paseo del Bajo, en **Catalinas Norte**, para realizar su emprendimiento inmobiliario de **Catalinas Río**, por el orden de los 140 millones de dólares. Es decir, compró por 140 millones de dólares unos 76 mil m2, lo que equivale a 1.800 dólares por m2. Según La Nación, hoy el m2 está valuado en 5.200 dólares. La empresa que construirá las torres, según información periodística, es Caputo SA, de Nicky Caputo.

Otras empresas frecuentes

Entre las múltiples empresas que prestan servicios a la Ciudad, existen algunas que suelen repetirse. Ya mencionamos a **Algieri**, como una de las **principales contratistas de obra pública**, quien tiene a su cargo actualmente una de las principales obras de la gestión de Jorge Macri. Pero también es **contratista del Estado**, ya que es responsable del **mantenimiento de los espacios verdes de las comunas 1 y 3, además del mantenimiento de las veredas en la Comuna 15.**

Por su parte, **Urbaser**, una empresa que tiene vínculos comerciales con firmas de la familia Macri, tiene a su cargo, además de una de las zonas del **suculento contrato de la basura** (comunas 3 y 4), el **mantenimiento de las veredas** en la Comuna 13, los **espacios verdes** de las comunas 2 y 8 y participa del negocio de la **poda de árboles.**

MIG S.A. es otra de las recurrentes contratistas del Estado porteño. Tiene a su cargo el **Hospital Fernandez, el Borda, la Sardá y el Tobar García**, representando una superficie de 160 mil m2. También realiza el mantenimiento de más de 200 escuelas, con 450 mil m2 a su cargo y de otros edificios públicos, entre los que se encuentran el Teatro Colón y la Usina del Arte.

Devolverle el poder a la gente

Venimos a **terminar con el maxikiosco** de la Ciudad. Nuestro objetivo no es solamente **mejorar la transparencia** de los procesos administrativos del Estado porteño, sino fundamentalmente poder **mejorar la calidad de los servicios públicos** que reciben los contribuyentes y **disminuir sus costos** para la sociedad. **Mejorar tanto la transparencia, como la eficacia y la eficiencia.**

Para cumplir con estos objetivos, es necesario contar con un bloque en la Legislatura Porteña con la mayor cantidad de diputados que puedan llevar adelante una agenda de reformas imprescindibles en el Estado. Las propuestas delineadas a continuación buscan **devolverle el poder a la gente**. Aumentar las herramientas de control sobre las empresas contratistas, endurecer las sanciones, mejorar los mecanismos de transparencia y utilizar la tecnología como aliada para estos fines.

Renegociación de todos los contratos. Conformación de una comisión investigadora de los contratos de la Ciudad para estudiar en profundidad si existieron irregularidades, cómo mejorar los requerimientos a las empresas y evaluar sus desempeños. A partir de las conclusiones se emplazarán los lineamientos generales para la renegociación de todos los contratos en función de mejorar su transparencia, eficacia y eficiencia.

Aumentar las sanciones a las empresas en casos de incumplimientos. Reformas en la ley de compras y contrataciones y endurecimiento de las sanciones presentes en cada uno de los pliegos.

Modificación de la Ley de Ética Pública para que las empresas

que confesaron pagar coimas no puedan ser contratistas del Estado. Blanqueo que les permita volver a participar a las empresas que contribuyan en la investigación judicial, aportando pruebas de coimas o extorsión, o presentándose en la Justicia a denunciar.

Fortalecimiento del Ente Regulador de los Servicios Públicos en su rol de contralor. Para eso es indispensable aumentar el rol que ocupa la oposición en organismos de esta índole. Si existe la posibilidad de que haya connivencia de intereses entre el Estado y las empresas, no puede ser el mismo oficialismo quien los audite. Se debe modificar la composición del directorio para garantizar que el oficialismo no lo controle, permitiendo una mayor transparencia y fortaleciendo al organismo en su rol de sancionar y, fundamentalmente, que pueda cobrar las multas.

Rendimiento comunal de las obras públicas. Para que los ciudadanos sepan en qué se gastan sus impuestos, deberá consignarse en el ABL qué obras se realizaron en las comunas y cuáles fueron sus costos.

Calificación digital participativa de las empresas, para que los usuarios puedan puntuar el desempeño de las contratistas en sus barrios. A partir del proyecto CuarkID, ya existente de la Ciudad, que busca crear una identidad digital donde centralizar toda la documentación individual, cada ciudadano podría tener a su disposición un sistema para evaluar de manera sencilla, rápida y práctica a las empresas que prestan determinados servicios públicos en sus barrios. Así como calificamos a las empresas donde consumimos cualquier tipo de bienes y servicios, a partir de esta innovación digital vamos a poder definir las percepciones de los ciudadanos sobre las empresas contratistas. A partir de esta herramienta, tendríamos un instrumento donde los porteños reporten fallos: basura acumulada en Palermo, demoras en el subte u obras que se paralizan eternamente. Esos datos alimentarían indicadores públicos para evaluar a las empresas. Si una empresa tuviera un rendimiento por debajo de los estándares requeridos, que pierda el contrato.

Comparación de prácticas para premiar y castigar a las empresas

en función de la calidad de los servicios que prestan. Tal como se desarrolló al principio de este libro, las características de los bienes públicos impiden que el mecanismo de mercado funcione. Por eso el Estado debe asumir un rol que fomente la competencia entre estas empresas. Crearemos un sistema de indicadores que den cuenta de la eficiencia a través de las cantidades de insumos utilizados y el producto final entregado. Estos indicadores deberán ser utilizados en el futuro para aceptar o rechazar las ofertas de las diferentes empresas y para diseñar los pliegos de licitación en función de mejorar la experiencia a futuro.

Tablero de control digital para los usuarios. Hoy en día, algunas de las empresas ya están obligadas a informar en tiempo real sobre el estado de sus servicios. Si bien esto no se cumple, y no existe fácil acceso a esa información ni siquiera a partir de requerimientos formales de información pública, debemos extenderlo a todos los contratos de la Ciudad y garantizar sanciones para quienes no lo cumplan. A partir de un tablero digital que permita ver en vivo el estado del servicio, se podrá potenciar el control ciudadano sobre las empresas y la calidad de sus prestaciones.

Estímulo para incorporar más pymes al sistema de contrataciones porteñas. Para que no sean siempre las mismas empresas, es imprescindible sumar actores al ecosistema. Hay que simplificar los requisitos administrativos para presentarse a una licitación y realizar pliegos menos restrictivos que los actuales, que muchas veces parecen diseñados para que solo algunas empresas puedan participar. Necesitamos mayor transparencia en los mecanismos de elección de las empresas y en las contrataciones directas y licitaciones privadas, mayor difusión de las contrataciones y capacitación activa para que Pymes y nuevos actores puedan registrarse y presentar ofertas.

Hoy la tecnología nos da numerosas herramientas para potenciar el control ciudadano sobre las empresas presentes en este libro y para poder romper el maxikiosco. La **blockchain**, puntualmente, ya es utilizada hoy para mejorar la transparencia en muchos países del mundo, incluso en nuestra región. Imaginemos un libro contable gigante, abierto para que todos lo veamos, pero imposible de borrar o

alterar. Eso es blockchain: una base de datos distribuida, segura y transparente, donde cada transacción —un contrato, un pago, una licitación— queda registrada en "bloques" encadenados y protegidos por criptografía. No hay manera de borrar el rastro: si SES S.A. cobra \$300 millones por recoger basura y las calles siguen sucias, todos lo sabremos. Si el gobierno porteño cobra \$1 millón de canon irrisorio por el Mercado de los Carruajes a un privado, quedará registrado cuándo y quién lo paga. Y lo mejor: no depende de un funcionario o de un ente regulador conducido por el mismo espacio político al que se debe controlar; la información está en manos de los ciudadanos.

Esta tecnología no es algo del futuro, es posible hoy. En Estonia, desde 2008, el sistema e-Government usa blockchain para que cada trámite público sea rastreable, reduciendo las posibilidades de corrupción. En Dubai, el gobierno planea que el 50% de sus transacciones estén en blockchain para 2025, ahorrando 1.500 millones de dólares al año. Y en Colombia, un país con muchas dificultades en el manejo del estado por la penetración del narcotráfico, blockchain está transformando la contratación pública. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no?

Proponemos un plan concreto para que blockchain sea un arma que desmantele el entramado de negociados y permita a los ciudadanos un control de los servicios por los que pagan con sus impuestos:

Registro de Contratos y Licitaciones: Todas las contrataciones públicas —los más de 8 mil contratos anuales que mencionamos bajo la gestión Macri— se subirían a una blockchain porteña. Desde el pliego hasta el pago final, cada paso sería visible. ¿SES S.A. renovó su contrato hasta 2028 sin licitación?

Quedará registrado. ¿El Paseo Gigena costó 3.019 millones de pesos públicos para un negocio privado? Lo veremos en detalle. ¿Se le solicita a una empresa que se encarga de la higiene urbana que aplique desodorante de ambiente a contenedores de basura? Podremos ver a la unidad ejecutora hacer el requerimiento y a la empresa notificar su aplicación y el cobro posterior por ese servicio.

Smart Contracts para Cumplimiento: Usaremos "contratos inteligentes", programas automáticos en blockchain que liberan fondos sólo cuando se cumplen metas verificables. Si por ejemplo, Cliba tiene que limpiar la Comuna 13 y las esquinas están llenas de basura, no cobra. Si Mantelectric no arregla las alcantarillas, el dinero se congela. Basta de pagar por servicios que no se prestan. Esto permitiría que el área técnica lleve adelante un control exhaustivo del cumplimiento de los contratos y que los ciudadanos evalúen la efectividad del funcionario que avala el accionar de la empresa.

Seguimiento de Ingresos y Gastos: Los 11 mil millones de dólares que pagamos en ABL, patentes, multas, Ingresos Brutos, etc., irían a una blockchain pública. Queremos saber si ese dinero termina en veredas nuevas o en contratos de consultorías. Cada peso tendría un destino rastreable.

Las universidades públicas, como la UBA, podrían integrarse al sistema blockchain porteño como nodos verificadores, aportando una capa adicional de descentralización y confianza al esquema de transparencia propuesto. En este rol, se encargarían de alojar copias de la blockchain pública y validar las transacciones registradas —contratos con empresas como Cliba o SES S.A., pagos por obras como el Paseo Gigena, o el destino de los 11 mil millones de dólares del presupuesto anual—. Su carácter académico e independiente las posiciona como actores idóneos para garantizar que ningún funcionario o empresa manipule los datos. Además, al participar activamente, estas instituciones podrían monitorear en tiempo real el cumplimiento de los smart contracts, asegurando, por ejemplo, que Mantelectric no cobre \$26 millones por alcantarillas que no funcionan, empoderando así el control ciudadano con un respaldo técnico y ético.

Este rol no sólo fortalecería la transparencia, sino que también convertiría a las universidades en centros de innovación y capacitación para la implementación del sistema. Como nodos, podrían desarrollar herramientas analíticas para que los porteños interpreten fácilmente los datos de la blockchain —por ejemplo, una interfaz que muestre si los \$825 millones anuales de la basura se

traducen en calles limpias— y formar paulatinamente a funcionarios y vecinos en el uso de esta tecnología, derribando la barrera de la complejidad que algunos podrían percibir. Las facultades de ingeniería o informática de la UBA podrían incluso perfeccionar los contratos inteligentes, adaptándose a las necesidades locales, como indicadores de quejas ciudadanas que penalicen a empresas que fallan sistemáticamente. Así, las universidades públicas no solo serían guardianas de la integridad del sistema, sino también un puente entre la tecnología y los porteños, asegurando que el control vuelva a manos de quienes habitan la ciudad.

El **Banco Mundial** estima que la utilización de tecnología como la que estamos proponiendo puede **reducir hasta un 20% los costos administrativos**. Y lo más importante: **devolverá el poder a los ciudadanos**. No habrá más audiencias públicas testimoniales como la de Costa Salguero: la participación será real, efectiva y diaria.

Imaginemos una Ciudad donde los contratos no se negocian en oficinas cerradas, sino en una blockchain abierta. Donde los porteños decidimos si Mantelectric se queda o se va, si Paseo Gigena vale nuestro dinero o si Caputo merece otro contrato. Blockchain no es una utopía: Colombia lo hace, Estonia lo hace, Dubai lo hace. Nosotros también podemos. Es hora de romper el maxikiosco y devolverle el control a quienes habitamos Buenos Aires. La herramienta está ahí; solo falta la decisión de usarla.

NOTAS

1. Hasta la primera quincena de febrero 2025.
2. En lo que continúa del libro tomaremos siempre como referencia el valor del tipo de cambio del dólar “MEP”, pero en este caso, al no existir esta cotización en el año 2013, se toma como referencia el valor del dólar blue según la web “Dólar Histórico”, al 20 de diciembre de ese año.
3. Auditoría General de la Ciudad, Proyecto 1.22.06, “Recolección de Residuos por terceros”. Disponible
4. Valor del dólar MEP al 30/08/2023.
5. Valor del dólar MEP en octubre de 2022.
6. Delfino, Emilia. (2 de enero de 2021). Los Mastronardi, dos hermanos que suman contratos millonarios con la policía porteña. EIDiarioAR.
7. Valor del dólar MEP al 5 de septiembre de 2023.
8. Al valor del Tipo de Cambio del Dólar MEP de la fecha.
9. Tomando el valor del dólar MEP a las fechas de adjudicación (2/11/2022) y de prórroga (2/11/2024).
10. Valor del tipo de cambio del Dólar MEP al 1 de Octubre de 2021 y 1 de Octubre de 2024.
11. Olivera, Francisco. 26 de junio de 2022. Amigos de los Caputo y un socio español: quiénes son los nuevos dueños del parking porteño. La Nación.
12. Pertot, Werner. 18 de marzo de 2024. Un regalo para el hermano de la vida de Mauricio Macri. Nueva Ciudad.
13. Ruiz, Iván; Fitz Patrick, Mariel y Crucianelli, Sandra. 12 de julio de 2022. El Gobierno porteño sólo le cobra \$55.000 por mes a las empresas que manejan el millonario negocio del acarreo de autos. Infobae.
14. Ibídem.
15. Al tipo de cambio del dólar MEP del 19/10/2023.
16. 20 de Diciembre de 2023. La poda de árboles en el ojo de la tormenta: cómo influyó en los resultados del temporal. Infobae.
17. Rapallini, Ornella y Ferioli, Florencia. 19 de abril de 2022. La mala alimentación en los colegios no para. Revista Crisis
18. Al tipo de cambio promedio del 2024, tomando la cotización del Dólar MEP.
19. Vexler, Emilia. 24 de mayo de 2022. Polémica por la comida que sirven en las escuelas porteñas, en la antesala de una nueva licitación. Clarín.
20. Informe final de Auditoría. Proyecto N° 2.23.02 Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria. Auditoría Legal y Financiera Período 2022.

21. Defensoría del Pueblo de CABA. Recomendación al GCBA para que mejore la calidad nutricional de los menús escolares. 22 de mayo de 2019.
22. Pizzi, Nicolás. 12 de abril de 2020. Alimentos con sobreprecios. Infobae.
23. Suárez, Martín. 08 de mayo de 2022. Pasantías laborales en CABA: negocios para empresas y presiones para el alumnado. Tiempo Argentino.
24. <https://www.cacyr.com.ar/cacyr.php>
25. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2020. Centros de Primera Infancia. Informe preliminar sobre la implementación de los centros de primera infancia ubicados en la comuna 4 de la CABA.
26. Mapa disponible en <https://buenosaires.gob.ar/desarrollo-infantil/centros-de-primera-infancia>
27. Defensoría del Pueblo de CABA. Enterate cómo es el trámite de solicitud de incorporación al servicio de transporte escolar gratuito para el ciclo lectivo 2022.
28. Ciudad Bilingüe. GCBA. Disponible en <https://buenosaires.gob.ar/educacion/ciudad-bilingue>.
29. 23 de julio de 2017. Educación: Vidal le prepara el terreno a Sánchez Zinny, un empresario offshore vinculado a las pruebas PISA. Elteclado.com.ar
30. https://en.wikipedia.org/wiki/Dutko_Worldwide
31. Al valor promedio del tipo de cambio en 2024, según la cotización del dólar MEP.
32. Tipo de cambio al valor del dólar mep de la fecha de adjudicación.
33. Del 10/12/2023 al 01/03/2025.
34. Procuración Penitenciaria de la Nación. 14 de enero de 2025. Trigésimo tercer reporte mensual sobre alojamiento en alcaldías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.
35. Ini, Candela y Louzau, Natalia. 4 de diciembre de 2022. Quiénes son los principales contratistas de la obra pública del gobierno porteño. La Nación.
36. García Moritán, Roberto. 21 de diciembre de 2023. Producción para la defensa. Clarín.
37. Pelliza, Carla. 30 de enero de 2021. Polémica por millonario negocio para un hombre de Macri y Angelici. El Destape.
38. Ini, Candela y Louzau, Natalia. 4 de diciembre de 2022. Quiénes son los principales contratistas de la obra pública del gobierno porteño. La Nación.
39. Filgueira, Belén. 25 de julio de 2018. Así será el primer centro comercial gourmet de la Ciudad inspirado en los modelos más exitosos del mundo. Infobae.
40. De Sousa Quintas, Luz. 15 de febrero de 2022. Mercado de los Carruajes: la increíble historia del edificio donde está el nuevo patio gastronómico en el Microcentro. El Cronista
41. Laveri, Omar. 15 de agosto de 2022. La justicia federal avanza en la investigación por irregularidades en la cesión del predio del Mercado de los Carruajes. Infobae.
42. Olivera, Francisco. 23 de agosto de 2023. Cánones bajos y empresarios amigos en varias concesiones, los nuevos frentes del gobierno porteño. La Nación.

43. BA. 02 de Febrero de 2022. Rodríguez Larreta recorrió la obra del Paseo Gigena, un nuevo polo gastronómico y parque público
44. Reinoso Taccone, Candelaria. 29 de diciembre de 2023. Paseo Gigena: la esquina de Palermo que cambiará para siempre une oficinas, locales y una terraza verde pública. La Nación.
45. Ley 6086, año 2018.
46. BA. 10 de octubre de 2019. Continúa el proceso de licitación del Buenos Aires Design y el ámbito Gigena. Ya están en marcha los procesos de licitación del ámbito Gigena, (el edificio de cocheras ubicado frente al hipódromo de Palermo) y del ex Buenos Aires Design.
47. Dejtiar, Fabián. 22 de septiembre de 2021. Paseo Gigena en Buenos Aires: ODA transformará un antiguo estacionamiento en un proyecto de uso mixto con parque público. ArchDaily en Español. Accedido el 2 Feb 2025.
48. Barca, Juan Manuel. 12 de octubre de 2024. Quién es el empresario de la construcción que sumó Caputo para manejar la obra pública. Clarín.
49. Boletín Oficial de la República Argentina. COINSA CONSTRUCCIONES S.A.. 12/03/2020.
50. Reinoso Taccone, Candelaria.. 29 de diciembre de 2023. Paseo Gigena: la esquina de Palermo que cambiará para siempre une oficinas, locales y una terraza verde pública. La Nación.
51. Delfino, Emilio. 26 de febrero de 2024. Paseo Gigena: los plazos vencieron y la obra vinculada a Caputo debería haberse inaugurado hace un año. El DiarioAR.
52. Ley Ciudad 123 Año 1998. Texto consolidado año 2018.
53. obierno de la Ciudad de Buenos Aires. Audiencias Públicas. Instancia participativa para ejecutar políticas públicas.
54. Aysa. 12 de octubre de 2024. Informes de prensa.
55. Fuente: nota de Emilia Delfino. 26 de febrero de 2024. El DiarioAR.
56. Delfino, Emilio. 26 de febrero de 2024. Paseo Gigena: los plazos vencieron y la obra vinculada a Caputo debería haberse inaugurado hace un año. Emilia Delfino. 26 de febrero de 2024. El DiarioAR.
57. Macri: "Caputo S.A. no licitó una sola obra en mi gestión". 23 marzo, 2016.
58. Macri: "Caputo S.A. no licitó una sola obra en mi gestión". 23 marzo, 2016.
59. Poda sin control: un negocio de 2500 millones para firmas amigas. 10/11/2019. Tiempo Argentino.
60. <http://www.construere-ing.com.ar/>
61. <https://www.ses-sa.com.ar/obras.php?t=18>
62. Subte: se adjudicó la obra para la tercera etapa de la Central Obelisco. Domingo 17 de abril de 2022. GCBA.
63. Fuente: Barral Grigera, N. y Rafelle, E. (2017) El otro yo: Nicolás Caputo. Socio y operador secreto de Mauricio Macri en la Argentina del capitalismo de amigos. Ed. Planeta. Pág. 170.
64. La constructora Caputo SA fue vendida a TGLT por 109 millones de dólares. 19 de enero de 2018. La Nación.

65. Foto diario Perfil.
66. La CNV va a investigar posibles fraudes en la acción de TGLT de Darío Lizzano. 31/07/2020. La Política Online.
67. Quién es Miguel Camps, el nuevo zar de la construcción que hace negocios con 'Nicki' Caputo. 22/05/2017. La Política Online.
68. TGLT vende la empresa de Caputo bajo la mira por sus contratos de obra pública con el GCBA. 7 de julio de 2021. El Cronista.
69. Parques Eólicos: declaró Mariano Macri ante el juez y dijo que no tiene pruebas contra su hermano. 16 de marzo de 2021. El DiarioAR.
70. De Nicolás Caputo a un arrepentido de los Cuadernos: quiénes son los nuevos dueños de las tierras del ex Tiro Federal. 8 de octubre de 2022. El DiarioAR.
71. Amigos de los Caputo y un socio español: quiénes son los nuevos dueños del parking porteño. 26 de junio de 2022. La Nación.
72. Rebossio, Alejandro. Quiénes son los dueños de la obra pública en la gestión de Rodríguez Larreta. El DiarioAr.
73. Cieri, José Luis. 7 de abril de 2023. Mega inversión de USD 1.800 millones: cómo es el proyecto de espacio público y desarrollo inmobiliario en la ex Ciudad Deportiva de Boca. Infobae.
-

Vivimos en una de las ciudades más lindas del mundo y, sin embargo, todos los días tenemos que protestar por algo. El tráfico, los ruidos, el subte que no funciona, las calles llenas de basura y los edificios creciendo como hongos en los barrios, para robarnos la luz y el sol. Alguna vez estuvimos orgullosos de nuestra salud y educación pública, y **hoy sufrimos el abandono** de las escuelas y los hospitales. Los parques y las calles arboladas que fascinaban a los turistas son tierra de nadie y los barrios en que jugábamos en la vereda se convirtieron en territorio del individualismo, el miedo y el sálvese quien pueda.

Durante casi veinte años, un grupo de políticos y sus empresas familiares, amigas o socias fueron quedándose con nuestra ciudad. Vos no las ves, pero allí están. **Convirtieron a Buenos Aires en un maxikiosco.** Son los dueños de la obra pública, la recolección de basura, los subtes y la limpieza de los hospitales. Son los que construyen torres enfrente de tu casa, te acarrearán el auto y te cobran la fotomulta, rompen las veredas que están bien y dejan sin arreglar las que están rotas, llenan de cemento la plaza del barrio y quieren construir mansiones frente a la costa de nuestro río.

La Ciudad está abandonada porque se privilegiaron los negocios. Es momento de dar vuelta la página y priorizar a las personas para construir una Buenos Aires más humana.